

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



**“CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL PARA MENORES EN
DESPROTECCIÓN FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PIURA
2017-2018”**

PRESENTADA POR:

Br. FREISY IVETTE PEÑA TORRES

TESIS PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO

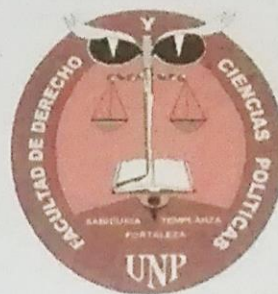
Línea de Investigación Institucional: Legislación y Ciencias Políticas

Sub Línea de Investigación: Ciencias Jurídicas

PIURA – PERÚ

2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



**“CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL PARA MENORES EN
DESPROTECCIÓN FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PIURA
2017-2018”**

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

Bach. Freisy Ivette Peña Torres
Ejecutadora

Dr. Santiago Herrera Navarro
Asesor

Línea de Investigación Institucional: Legislación y Ciencias Políticas

Sub Línea de Investigación: Ciencias Jurídicas

PIURA – PERÚ

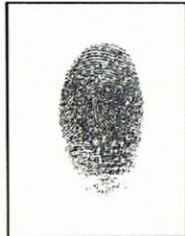
2019

DECLARACIÓN JURADA
DE ORIGINALIDAD DE TRABAJO DE INVESTIGACION

Yo: **FREISY IVETTE PEÑA TORRES** identificado con DNI N° **75662515**, en la condición de Estudiante Egresado, de la Facultad de **DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**, Escuela Profesional de **DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS** y domiciliado en **CALLE I-16 ASENT.H.M. BASTIDAS**, Provincia de Morropón, Departamento de Piura, Distrito de Chulucanas, Celular: **952599561**, Gmail: **Freisyt24@gmail.com**.

DECLARO BAJO JURAMENTO: que el trabajo de investigación que presento a la Oficina Central de Investigación (OCIN), es original, no siendo copia parcial ni total de un trabajo de investigación desarrollado, y/o realizado en el Perú o en el Extranjero, en caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el Art. N°411, del código Penal concordante con el Art. 32° de la Ley N°27444, y Ley del Procedimiento Administrativo General y las Normas Legales de Protección a los Derechos de Autor. En fe de lo cual firmo la presente.

Piura, octubre del 2019

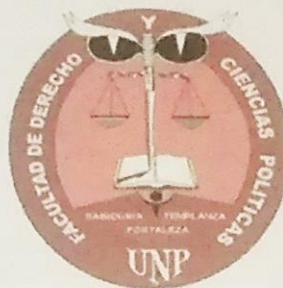
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Freisy', written over a horizontal dashed line.

DNI N°75662515

Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.

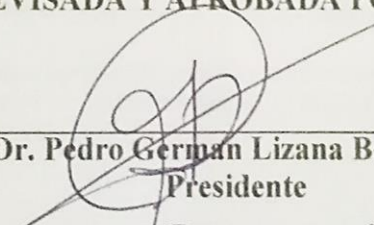
Art. 4. Inciso 4.12 del Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales –RENATI Resolución de Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU/CD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

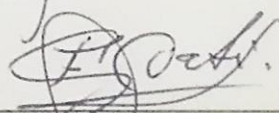


**“CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL PARA MENORES EN
DESPROTECCIÓN FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PIURA
2017-2018”**

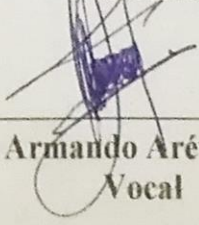
TESIS REVISADA Y APROBADA POR EL JURADO



Dr. Pedro German Lizana Bobadilla
Presidente



Mag. Fidencio Francisco Cunya Celi
Secretario



Dr. Armando Arévalo Zeta.
Vocal

PIURA – PERÚ
2019



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS
057-UI-FDCCP-UNP-2019

Los miembros del Jurado Calificador que suscriben, reunidos para evaluar la Tesis titulada: "CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL PARA MENORES EN DESPROTECCIÓN FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PIURA 2017 - 2018" presentada por la Bachiller FREISY IVETTE PEÑA TORRES para optar el Título Profesional de Abogado, con el asesoramiento del Dr. Santiago Herrera Navarro; oídas las observaciones y respuestas a las preguntas formuladas y, de conformidad al Reglamento de Tesis para la obtención del Título Profesional, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la declaran:

APROBADA

☒


DESAPROBADA ()

Con la mención de:

MUY BUENO

- () En consecuencia, queda en condición de ser ratificado por Consejo de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura y recibir el Título Profesional de Abogado.
- () En consecuencia, queda en condición de ser ratificada por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Piura y recibir el Título Profesional de Abogado, después de que la sustentante incorpore las sugerencias del Jurado Calificador.

Piura, 19 de octubre de 2019


DR. PEDRO GERMAN LIZANA BOBADILLA
PRESIDENTE


DR. ARMANDO ARÉVALO ZETA
VOCAL


MAG. FIDENCIO FRANCISCO CUNYA CELI
SECRETARIO

DEDICATORIA

*A MI MADRE, ejemplo de constancia y
sacrificio, porque cada uno de mis logros
llevará su nombre.*

AGRADECIMIENTO

*A mi familia, amigos y a esa persona
especial, por alentarme a alcanzar
mis metas.*

INDICE GENERAL

DEDICATORIA	VI
AGRADECIMIENTO	VII
INDICE GENERAL	VIII
INDICE DE TABLAS	X
INDICE DE GRAFICOS	X
INDICE DE ANEXOS.....	X
RESUMEN.....	XI
ABSTRAC	XII
INTRODUCCIÓN	13

CAPITULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA.....	14
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	15
1.2.1. Problema General.....	15
1.2.2. Problema Específico.....	15
1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN.....	15
1.4 OBJETIVOS.....	15
1.4.1. Objetivo General	15
1.4.2. Objetivo Específico	15
1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	15

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.....	16
2.2 BASES TEÓRICAS.....	16
2.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS.....	18
2.4. MARCO REFERENCIAL.....	19
2.4.1 Sistema Jurídico Internacional de Protección de los Derechos Humanos de la Infancia y Adolescencia.....	19
2.4.1.1. Niños, Niñas y Adolescentes: de objetos de tutela a sujetos de derecho con capacidad progresiva para ejercer derechos fundamentales.....	19
2.4.1.2. El Sistema Internacional de Protección de los Derechos del Niño.	27
2.4.1.3. La Convención sobre Derecho del Niño y el Interés Superior del Niño.	29
2.4.1.4. Protección Jurídica frente a la Desprotección Familiar: Legislación Nacional e Internacional.	36

2.4.2 La Familia y la Desprotección Familiar.	43
2.4.2.1. Familia.....	43
2.4.2.2. Desprotección Familiar.	46
2.4.3. Nuevo Régimen Normativo para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Sin Cuidados Parentales o en Riesgo De Perderlos.	60
2.4.3.1. Decreto Legislativo N° 1297 para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Sin Cuidados Parentales o en Riesgo De Perderlos.....	62
2.4.3.2. Principios Orientadores de la Actuación Estatal.	65
2.4.3.3. Situaciones de Riesgo o Desprotección Familiar.....	68
2.4.3.4. Medidas de Protección frente a la Situación de Riesgo o Desprotección Familiar.. ..	75
2.5 HIPÓTESIS.....	81
2.5.1 Hipótesis General.....	81
2.5.2 Hipótesis Específica	81

CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO

3.1. ENFOQUE Y DISEÑO.....	82
3.1.1. Enfoque.....	82
3.1.2. Diseño.....	82
3.2. NIVEL.....	82
3.3. TIPO.....	82
3.4. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN.....	83
3.5. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS.....	83
3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.....	83
3.7 POBLACIÓN Y MUESTRA.....	84
3.7.1 Población.	84
3.7.2 Muestra.....	84
3.8. ASPECTOS ÉTICOS.....	85

CAPITULO IV: PROBANZA DE LA HIPOTESIS

4.1. PROBANZA JURÍDICA SOCIAL Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	86
CONCLUSIONES	108
RECOMENDACIONES	109
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	110
ANEXOS.....	114

INDICE DE TABLAS

Cuadro 4.1.....	86
Cuadro 4.2.....	87
Cuadro 4.3.....	89
Cuadro 4.4.....	91
Cuadro 4.5.....	93
Cuadro 4.6.....	95
Cuadro 4.7.....	97
Cuadro 4.8.....	99
Cuadro 4.9.....	101
Cuadro 4.10.....	103
Cuadro 4.11.....	105

INDICE DE GRAFICOS

Grafico 4.1.....	86
Grafico 4.2.....	87
Grafico 4.3.....	89
Grafico 4.4.....	91
Grafico 4.5.....	93
Grafico 4.6.....	95
Grafico 4.7.....	97
Grafico 4.8.....	99
Grafico 4.9.....	101
Grafico 4.10.....	103
Grafico 4.11.....	105

INDICE DE ANEXOS

ANEXO N° 01.....	115
ANEXO N° 02.....	117
ANEXO N° 03.....	121
ANEXO N° 04.....	127
ANEXO N° 05.....	128
ANEXO N°06.....	129

APÉNDICE.....	130
---------------	-----

RESUMEN

El principal objetivo de la investigación consiste en demostrar la necesidad de implementar Centros de Acogida Residencial para niños, niñas y adolescentes en desprotección familiar en el Distrito de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, teniendo en cuenta el daño psicológico y fisiológico que causa en el desarrollo integral de los menores de edad víctimas de este, como consecuencia del ejercicio abusivo o deficiente de la patria potestad, configurando, en ese sentido la omisión de los deberes de crianza, alimentación, educación y cuidado que tienen los padres, lo cual conlleva a la desprotección.

El Estado tiene por finalidad brindar medidas de protección integral en favor de los niños, niñas y adolescentes en desprotección familiar, y que en cuanto a toda medida concerniente a los menores de edad que adopte se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y Adolescente y así mismo el respeto a sus derechos, y lograr con ello cumplir con su rol protector frente a los mismos.

Palabras Clave: Centros de Acogida Residencial; Desprotección Familiar; Interés Superior del Niño y Adolescente.

ABSTRAC

The main objective of the research is to demonstrate the need to implement a Residential Reception Center for children and teenagers in family protection in the District of Piura, Castilla and 26 de Octubre, considering the psychological and physiological damage caused in the integral development of the minors victims of this, as a result of the abusive or deficient exercise of parental rights, configuration, in that sense the omission of the obligations of parenting, food and nutrition, education and care that parents have which leads to unprotection.

The State has to provide comprehensive protection measures in favor of children and teenagers in family protection, and to what extent of any measure of concern to minors who adopt will be considered the Principle of Higher Interest of Children and Adolescents and also respect for their rights, and with this, fulfill its protective role against them.

Keywords: Residential Reception Centers; Family protection, Best interest of the child and teenagers.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación tiene como propósito, realizar el estudio de los Centros de Acogida Residencial, siendo este el espacio físico donde viven niñas; niños y adolescentes sin cuidados parentales, siendo así, se pretende determinar que la inexistencia de estos en el Distrito de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre vulnera el Interés Superior del Niño.

Debemos considerar que el menor de edad no tiene la plenitud de capacidad para obrar, porque su desarrollo físico, intelectual y moral no es completo. Por lo tanto, debe estar bajo la protección y tutela de sus padres o de personas responsables de su cuidado (tutores, guardadores).

La problemática que afronta el Perú, en la que parece primar el abuso, la negligencia, la inconsciencia, por ello es importante no perder la orientación. Así, la regulación tutelar es necesaria debido a que existen circunstancias especialmente difíciles que interfieren, obstaculizan e incluso, impiden el pleno desarrollo del niño, niña y adolescente. Estas circunstancias son la pobreza crítica, la participación temprana y sin protección en actividades destinadas a generar ingresos, vivir en ambientes donde abunda el maltrato y la falta de afecto, vivir en la calle, la violencia armada, vivir en instituciones tutelares y la presencia de desastres naturales que los deja en el completo desamparo.

Así, la presente investigación tiene como tema a tratar los **“CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL PARA MENORES EN DESPROTECCIÓN FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PIURA 2017-2018”**, la cual desarrolla la problemática planteada teniendo en cuenta el siguiente esquema:

En el Primer Capítulo comprende los Aspectos de la Problemática en el que se ha basado la investigación y comprende desde la descripción del proyecto, formulación del problema, justificación e importancia, objetivos y delimitación.

En el Segundo Capítulo de la investigación se desarrollará lo concerniente al Marco Teórico, que sustentan las conclusiones de la presente investigación, iniciando con los antecedentes teóricos, asimismo contiene bases teóricas con el objetivo de dar a conocer la configuración de los centros de acogida residencial en nuestro ordenamiento jurídico, así como conocer qué es el interés superior del niño, y su desarrollo en el derecho nacional.

En el Tercer Capítulo contiene el Marco Metodológico, que verificará la metodología de la presente investigación, señalando que el mismo es de carácter cuantitativo no experimental, correlacional y documental.

En el Cuarto Capítulo se desarrolla la Probanza de la Hipótesis, en este último se comprobó las hipótesis materia de esta investigación. Esperando pues, que este trabajo de investigación sea de gran ayuda para los alumnos y operadores del derecho.

CAPITULO I

ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA

En la actualidad afrontamos el reto de humanizar el tratamiento legal de protección de los derechos de miles de niñas, niños y adolescentes, enfatizando especialmente el desafío de velar por el bienestar y cuidado de sus derechos fundamentales, especialmente de los menores de edad que se hallen en constante estado de desprotección familiar y abuso. Es así, que durante mucho tiempo se encontraron una serie de falencias en el sistema, primordialmente en lo concerniente a niñas, niños y adolescentes en estado de abandono, los cuales como bien sabemos se encontraban bajo el rol tutitativo del Estado, otorgándoseles como medida de última ratio, la medida de protección de declaración judicial de abandono en sede judicial y posteriormente la de adopción en el mejor de los casos. Al verse que este sistema dilataba por completo los procesos tanto en sede administrativa como judicial y que primordialmente no se priorizaba del derecho a la opinión del menor de edad, con fecha 5 de Diciembre del 2017, mediante Decreto Legislativo N° 1297 aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2018 MIMP de fecha 8 de Febrero del 2018, se instauró el nuevo régimen de protección familiar al menor de edad, modificándose nuestro Código de los Niños y Adolescentes, así como el Código Civil vigente, estableciéndose un nuevo procedimiento para la declaración de la situación de desprotección familiar y primordialmente de acogimiento familiar y residencial. (QUIRI y PEREZ, 2018)

Es así, como este nuevo cuerpo normativo se crea con el afán de que el menor de edad no se vea separado de su entorno familiar más cercano, previniendo así la separación de su núcleo familiar y buscando lograr la reintegración familiar de las niñas, niños y adolescentes. Todo ello en el marco de una política de Estado de disminuir los altos índices de inseguridad ciudadana, de criminalidad y de violencia.

Así, los niños, niñas y adolescentes constituyen uno de los sectores más vulnerables de la población, nuestra Constitución lo regula a través del precepto de que “la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, adolescente, madre y anciano en situación de abandono”. Esta situación de vulnerabilidad exige una especial protección por parte del Estado, la familia y la comunidad, tal como lo han establecido diversos instrumentos internacionales, entre ellos, la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, es decir, como titulares de derechos y obligaciones.

En ese sentido, para marzo del año 2018 se recibieron 245 denuncias de niños, niñas y adolescentes en estado de abandono, a través de la Unidad de Protección Especial de Piura (UPE) del Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, lo preocupante de estas cifras es la falta de albergues o casas de acogida para recibir a los menores que no pueden regresar a sus casas mientras duren las investigaciones. (MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES, 2018)

Es necesario asumir la responsabilidad ética y social de formular proyectos de desarrollo integral que protejan a los niños, niñas y adolescentes en desprotección familiar, apoyados en el conocimiento de las fuentes específicas de cada región, en sus rasgos diferenciales y en un estudio específico de su realidad, además considerar en qué medida los alcances de las políticas económicas y sociales causan un impacto positivo o negativo en las familias más pobres.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. Problema General

➤ ¿Es necesaria la creación de Centros de Acogida Residencial para menores de edad en desprotección familiar?

1.2.2. Problema Específico

➤ ¿La ausencia de Centros de Acogida Residencial para menores de edad en desprotección familiar vulnera el Interés Superior del Niño?

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

Es de total importancia realizar un estudio e investigación justificada en la necesidad de instaurar centros de acogida residencial para menores de edad en desprotección familiar, esto en razón de que en nuestra sociedad no se le brinda la debida importancia y atención del caso, a pesar que con el paso del tiempo esta situación se incrementa.

Por lo tanto, resulta importante comprender e interpretar dicha realidad desde las percepciones de los involucrados directamente, con el propósito de aportar información valida que aviste sus necesidades y se pueda articular con intervenciones pertinentes que contribuyan a su buen desarrollo y bienestar.

Asimismo, se aspira que este proyecto de investigación actué tanto sobre el investigador como en el lector, a fin de que sea un punto de referencia en la trascendencia que tiene la problemática.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General

➤ Demostrar, la necesidad de crear Centros de Acogida Residencial para menores de edad en desprotección familiar, en salvaguarda del interés superior del niño.

1.4.2. Objetivo Específico

➤ Determinar que, la ausencia de Centros de Acogida Residencial para menores de edad en desprotección familiar vulnera el Interés Superior del Niño.

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación, tiene como delimitación espacial el Distrito de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, pertenecientes a la provincia y departamento de Piura y como delimitación temporal el año 2017-2018.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

➤ Sobre el tema **“Centros de Acogida Residencial para Menores en Desprotección Familiar en el Distrito de Piura 2017-2018”** a la fecha no es abordada en su integridad en ninguna obra jurídica, tesis de pregrado y postgrado, sin embargo, se ha podido encontrar algunos trabajos que plantean temas de relevancia para el Derecho del Niño y Adolescente en nuestro país de manera general y ello es favorable para el avance de la presente investigación, no obstante, los aportes de las investigaciones previas a este proyecto permiten esclarecer desde un enfoque global la problemática que se desarrolla en la actualidad respecto a la ausencia de centros de acogida residencial para menores de edad en desprotección familiar; así tenemos a la Dr. Violeta Cristina Gómez Hinojosa, quien a través de su **Demanda de Cumplimiento** señala: solicito la creación a nivel nacional de Centros de Atención Residencial (albergues) para la atención de menores de edad que se encuentran en presunto estado de abandono y/o grave riesgo social, a fin de que el Estado cumpla con otorgar la medida de protección de atención integral en un centro de atención residencial a favor de los mencionados niños y adolescentes sujetos a una investigación tutelar cuando esta medida sea necesaria para proteger la integridad personal del menor de edad, conforme está obligado en la legislación nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscritos por el Perú. (DEMANDA DE CUMPLIMIENTO, 2017)

➤ Asimismo, el Br. Juan Francisco Herrera Campoblanco, en su tesis acerca de **“Políticas públicas de protección de niños en estado de abandono: Perú 1990– 2015”**, realizado en Lima, concluye que: Los Centros de Atención Residencial (CAR), no se visualizan en todas las provincias; tampoco hay referencias de servicios de apoyo familiar como escuelas de padres, servicio de visita domiciliaria, estimulación temprana a niños/as con necesidades especiales, espacios de cuidado diurno, etc. La normatividad hace referencia a la necesidad de articular o construir un sistema de atención o protección integral del NNA. Los diversos servicios de protección implementados, son deficitarios por la demanda existente, ya que el diagnóstico de los casos de desprotección, es usualmente complejo y multicausal, por lo que se hace necesario desarrollar estrategias de atención articuladas, de tal manera, estén puedan ser integrales. (HERRERA CAMPOBLANCO, 2018)

➤ De igual manera encontramos un acercamiento al tema de investigación en la tesis de los Bachs. Jessika Estefanía Palomino Urbina y Diego Rafael Rengifo Lozada, titulado **“Albergue para Niños en Estado de Abandono en el Distrito de San Juan De Lurigancho”**, realizado en Lima, con la cual tuvo como finalidad exponer el contexto y la problemática de los niños abandonados en Lima Metropolitana específicamente en el Distrito de San Juan de Lurigancho. La importancia de su investigación se centró en proponer y desarrollar un proyecto arquitectónico capaz de albergar un número considerable de menores en estado de abandono ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, para lograr el desarrollo integral del niño. (PALOMINO y RENGIFO, 2016)

2.2 BASES TEÓRICAS

➤ CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL

El Centro de Acogida Residencial es un establecimiento benéfico donde se alojan niñas, niños y adolescentes en situación de abandono o riesgo, también conocidos como refugio; casa hogar o albergue. Se trata de centros de acogida donde se brinda al menor de edad atención y desarrollo integral con la finalidad de alcanzar un crecimiento de calidad.

El artículo 100 del Reglamento del Decreto Legislativo para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sin Cuidados Parentales o en Riesgo de Perderlos, se refiere a los centros de acogida residencial del modo siguiente: “Es el espacio físico donde se desarrolla la medida de acogimiento residencial dispuesta en el procedimiento por desprotección familiar, en un entorno que se asemeje al familiar y se implementa el Plan de Trabajo Individual con el objetivo principal de garantizar su desarrollo psicosocial y propiciar su reinserción familiar, debiendo contar para ello con acreditación vigente y con las condiciones básicas para su funcionamiento”.

➤ DESPROTECCIÓN FAMILIAR

Situación que se produce de hecho a causa de la inobservancia o del imposible o contraproducente desempeño de los deberes de cuidado a NNAS, y que afecta gravemente su desarrollo integral. (ÁLVAREZ OLAZÁBAL, 2017)

Toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. (CAHUA GALLEGOS, 2017)

Para (SOKOLICH ALVA, 2017), la desprotección familiar en el marco del Decreto Legislativo N°1297 es uno de los motivos de origen de la delincuencia juvenil, lo cual desencadena en la imperiosa necesidad de prevenirla y combatirla mediante, los sistemas de protección integral, ello en aplicación del artículo 4 de nuestra Constitución Política vigente, a través de políticas públicas.

➤ INTERES SUPERIOR DEL NIÑO

El principio del interés superior del niño o niña, también conocido como el interés superior del menor, es un conjunto de acciones y procesos tendentes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible a las y los menores. (DICCIONARIO DE ASILO, s.f.)

La Ley N°30466 Que Establece Parámetros y Garantías Procesales para la Consideración Primordial del Interés Superior del Niño, en su artículo 2 establece: “Es un derecho, un principio y una norma de procedimiento que otorga al niño el derecho a que se considere de manera primordial su interés superior en todas las medidas que afecten directa o indirectamente a los niños y adolescentes, garantizando sus derechos humanos”.

Así mismo, el Decreto Legislativo N° 1297 para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Sin Cuidados Parentales o en Riesgo de Perderlos, en su artículo 4 inciso g) señala: “Este derecho sustancial, principio de interpretación y norma de procedimiento, asegura la protección y desarrollo integral de la niña, niño o adolescente en su familia y en caso excepcional, prioriza un entorno familiar alternativo. A fin de determinar el interés superior del niño, se respetan los vínculos familiares y se favorece el apoyo a la familia de origen como medida de protección prioritaria. En ningún caso su aplicación puede disminuir o restringir los derechos y garantías reconocidos a las niñas, niños y adolescentes. Cuando exista conflicto entre el interés superior de un niño y otros intereses o derechos, la autoridad competente analiza y pondera los derechos de todos los interesados, teniendo en cuenta que el derecho de la niña, niño y adolescente a que su interés superior es una consideración primordial”.

El interés superior del menor es un concepto triple: es un derecho, un principio y una norma de procedimiento.

- a) Se trata del derecho del menor a que su interés superior sea una consideración que prime al sopesar distintos intereses para decidir sobre una cuestión que le afecta.
- b) Es un principio porque, si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño o niña.
- c) Es una norma de procedimiento ya que, siempre que se deba tomar una decisión que afecte a menores, el proceso deberá incluir una estimación de las posibles

repercusiones de esa decisión en las y los menores interesados. La evaluación y determinación de su interés superior requerirá las garantías procesales. (DICCIONARIO DE ASILO, s.f.)

El Código del Niño y Adolescente, Artículo IX Título Preliminar establece: “En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos.

2.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS (OSSORIO, 2010)

1. Derecho:

Alude a la facultad que las personas físicas o jurídicas tienen no solo para realizar determinados actos, sino también para exigir que otras personas de igual índole, sin excluir al Estado, no les impidan realizar lo que la ley permite o no prohíbe.

2. Principio:

Fundamento de algo. Máxima, aforismo.

3. Constitución:

Forma o sistema de gobierno que tiene cada Estado. Ley fundamental de la organización de un Estado.

4. Sociedad:

Cualquier agrupación o reunión de personas o fuerzas sociales. Agrupación natural o convencional de personas, con unidad distinta y superior a la de sus miembros individuales, que cumple, con la cooperación de sus integrantes, un fin general.

5. Desarrollo:

Impulso progresivo y efectiva mejora cuando de los pueblos y sistemas políticos y económicos se trata.

6. Denuncia:

Acto de poner en conocimiento del funcionario competente la comisión de un hecho delictuoso, sujeto a acción pública, del que se hubiere tenido noticias por cualquier medio.

7. Derechos Humanos:

Se hace referencia casi siempre a una transgresión supuesta o real del respeto que el hombre merece como individuo, como ciudadano y como integrante de la comunidad universal.

8. Estado:

Es una organización social constituida en un territorio propio, con fuerza para mantenerse en él e imponer dentro de él un poder supremo de ordenación y de imperio, poder ejercido por aquel elemento social que en cada momento asume la mayor fuerza política.

9. Protección:

Ayuda, amparo. Favorecimiento

2.4. MARCO REFERENCIAL

2.4.1 Sistema Jurídico Internacional de Protección de los Derechos Humanos de la Infancia y Adolescencia.

2.4.1.1 Niños, Niñas y Adolescentes: de objetos de tutela a sujetos de derecho con capacidad progresiva para ejercer derechos fundamentales. (PLÁCIDO V., 2015)

Aunque hoy parezca evidente distinguir a los niños, niñas y adolescentes como una categoría distinta a la de los adultos, ello históricamente no ha sido así.

Philippe Aries en su obra *El niño y la vida familiar en el antiguo régimen* (...) explica. “La infancia no era más que un pasaje sin importancia, que no era necesario grabar en la memoria; había tantos de estos seres cuya supervivencia era tan problemática (...). El sentimiento que ha persistido muy arraigado durante largo tiempo era el que se engendraban muchos niños para conservar solo algunos”.

No existía, ningún vínculo sentimental hacia ellos. Solo estaban allí para cumplir su misión: formar parte de la sociedad, como uno más entre todos. En realidad, no existía diferencia entre niños y adultos, y esto queda demostrado claramente en las pinturas que representaban a las familias, donde el hijo menor tenía las características de un hombre mayor, pero en dimensiones reducidas.

Es a comienzos del siglo XVII en que las pinturas de los niños se vuelven una novedad y representan al niño solo y por sí mismo, volviéndose el personaje principal de las obras; no más el niño visto en compañía de sus padres o como algo en la lejanía sin mayor importancia. Es entonces que los pintores de la época tratan de estampar en sus lienzos el aspecto fugaz y hermoso de la infancia.

A principios de la Edad Moderna, un gran acontecimiento hizo que cambiaran todas estas formas de vida, la reaparición por el interés a la educación, ahora no solo les preocupaba engendrar niños, se interesaban por que estos tuvieran una formación para la vida, “la familia y la escuela, retiraron al niño de la sociedad de los adultos. La escuela encerró a una infancia antaño libre en un régimen disciplinario cada vez más estricto...”.

La educación entonces también fue seleccionada en pública y privada, abandonando los hijos de los ricos, las escuelas donde antaño concurrían mezclados con los del pueblo.

Es propio señalar que antes de esta época, la medicina no se había interesado en la salud de los niños y las mujeres; esto era labor propia de la medicina popular. Ello llevó, pues a que la mortandad de los niños y madres fuera creciente. Gracias entonces a la medicina, la mujer obtiene un status ante la sociedad: la de madre, educadora y auxiliar del médico; esto conlleva a que aparezcan otras inquietudes como el de la crianza del infante en espacios más abiertos ante la atenta vigilancia de los padres hacia ellos.

A finales del siglo XIX, las políticas tutelares invaden la práctica estatal y la regulación jurídica de su control. En este contexto, la administración de justicia a través de los tribunales de menores se convertirá en una herramienta de control de la categoría social menor.

En el plano jurídico, los niños durante muchos siglos no fueron considerados bajo un tratamiento legal aparte o distinto del derecho de los mayores. Desde los remotos orígenes del derecho y hasta los inicios del siglo XIX, desde el punto de vista punitivo, no se distinguió si

los delitos eran cometidos por niños, adolescentes o adultos; todos eran recogidos por el ámbito del derecho penal y sancionado con las penas establecidas en las normas y codificaciones existentes (...). Las penas siempre eran privaciones de libertad y, en cuanto al lugar del cumplimiento, adultos y niños eran reclusos en los mismos centros penitenciarios. Surgió entonces, a fines del siglo XIX, una orientación novedosa que se opuso a la historia, al considerar que el derecho represivo penal debía reservarse para los adultos, mientras que los menores que incurrieran en delitos debían recibir una consideración jurídica distinta. De manera, pues, que se podría identificar una primera etapa en el proceso evolutivo del tratamiento jurídico penal del menor de edad, que se extiende desde los orígenes mismos del derecho penal represivo, hasta 1899.

Se inician entonces movimientos reformadores impregnados de ideas protectoras, frente a la situación deplorable de reclusión que sufrían los menores (...). Se comenzó a hablar de un nuevo derecho desde una óptica protectora del menor, derecho especial que partiendo del derecho común general (civil y penal) se adaptase a las necesidades del menor de edad. La consecuencia trajo este movimiento protector fue el que surgieran jurisdicciones especiales para atender los asuntos de los menores, así como legislaciones, también especiales, que contemplaran un tratamiento reeducativo individual para los que infringieran la ley, descartándose el carácter punitivo del derecho penal imperante hasta entonces.

Desde ese contexto, se marcaría una segunda etapa en la evolución de las prácticas socio-penales de protección al menor de edad, con la creación en 1899 del primer tribunal tutelar en Chicago, Estados Unidos, para juzgar a menores autores de hechos delictivos y asegurarles un tratamiento diferenciado y específico. Se planteó la importancia de que los funcionarios que atendieran esta jurisdicción fueran también especiales.

Indudablemente que los sucesos ocurridos en la Primera Guerra Mundial, con la secuela de hogares destruidos y niños desamparados, despertaron en la conciencia de los hombres sentimientos humanitarios que, conducidos por las bondades que aparentemente tenía el concepto de peligrosidad, llevaron a considerar que la atención por los menores, no solo se extendía a los que cometieran delitos, sino que el ámbito protector debía abarcar a todos los abandonados, en situación de riesgo o con derechos elementales vulnerados. La protección, dentro de estas ideas, inspirada en una función tutelar debía conocer de todos los menores en eventual situación de riesgo.

La infancia, como objeto de estudio, comenzó a ser materia de pronunciamiento por parte de la comunidad internacional. En 1923 se proclamó la Declaración de Derechos del Niño de la Sociedad de Naciones, en Ginebra. En 1959 se aprueba la Declaración de los Derechos del Niño por parte de las Naciones Unidas. Surgen organismos internacionales para la ayuda y protección de la infancia, como el Instituto Interamericano del Niño (INN) EN 1927; el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en 1946. Este organismo se preocupó en celebrar periódicamente encuentros internacionales de expertos en la materia, a los fines de divulgar las nuevas ideas protectoras; además, se publicaron sus deliberaciones de manera de ir consolidando toda una doctrina jurídica-protectora-tutelar.

Al mismo tiempo, el movimiento legislativo no se hizo esperar. Los países de América Latina comenzaron a promulgar leyes especiales de menores, inspiradas en los principios de la doctrina de la situación irregular.

A. La Doctrina de la Situación Irregular.

Como se ha señalado, a finales del siglo XIX surgieron movimientos reformistas dirigidos a sacar al menor del Derecho Penal de los adultos, al considerar que debía rescatarse del ambiente de represión y castigo al que estaba sometido.

Los movimientos humanitarios que surgieron en este contexto cultural proclamaban y exigían la protección y reeducación del niño, corriente que tuvo clara influencia en los instrumentos internacionales de entonces, y en el surgimiento de doctrinas asociadas a las ideas del control social de ciertos sujetos que, por razones de su naturaleza o condiciones de vida, debían

ser controlados por el Estado debido a su peligrosidad social. Dentro de este razonamiento, se desarrolla un sistema de justificación del tratamiento jurídico conjunto, que incluía tanto a las infracciones a la ley penal con otras derivadas del riesgo social, o la amenaza o violación de derechos de los niños.

Nace entonces la concepción de la doctrina de la situación irregular, que genera todo un movimiento legislativo que se extiende rápidamente en el mapa latinoamericano, con la característica común en todas las leyes, de asimilar jurídicamente al infractor de la ley penal con el niño víctima de la negligencia familiar o el descuido social (...). Expresado de otra forma, la intervención debía ocurrir al darse los primeros síntomas que fatalmente determinarían a que esos niños o jóvenes llegaran a la delincuencia.

Para la doctrina de la situación irregular el mecanismo que desarrolla el Estado para atender el problema de los menores en situación irregular, es la intervención directa a través de sus órganos administrativos y judiciales.

Las características esenciales de la doctrina de la situación irregular son:

- a) Carácter enunciativo de las categorías definidas como menores en situación irregular. – La definición de las categorías que conforman la situación irregular, a saber: comportamiento antisocial, abandono [material y moralmente], situación de peligro, y menores deficientes [físicos y mentales], revela el carácter enunciativo de las conductas que se encuentran allí encuadradas.

En efecto, el Instituto Interamericano del Niño en su vocabulario multilingüe define la situación irregular como “aquella en que se encuentra un menor tanto cuando ha incurrido en hecho antisocial, como cuando se encuentra en estado de peligro, abandono material o moralmente o padece un déficit físico o mental. Dícese también de los menores que no reciben el tratamiento, la educación y los cuidados que corresponden a sus individualidades.

En todas estas circunstancias se autoriza la intervención protectora-controladora del Estado a través de sus órganos administrativos y judiciales.

El carácter enunciativo de las categorías definidas como menores en situación irregular permitía al intérprete contemplar en ellas, situaciones similares a las indicadas aun cuando no estén específicamente previstas en las normas legales. Las categorías abiertas finales permitían cualquier intervención de un menor por parte del brazo protector del Estado y en nombre de su interés (...). Asimismo, se contempla la intervención judicial en los casos de los menores deficientes físicos y mentales.

- b) Los menores son objeto de tutela por parte del Estado.- De acuerdo a los postulados de la doctrina de la situación irregular, el sujeto menor de edad es un ser diferente al adulto al ser una persona en desarrollo que no alcanza a comprender las consecuencias de sus actos, vive en continuo riesgo y, por ello, necesita tratamiento adecuado para estimular la parte de su psiquis que puede aprovecharse, con el fin de proporcionarle el nivel de adaptación que el estadio de su minusvalía le permita.

Dentro de esta consideración del menor de edad, forzosamente, ese ser humano requiere de protección, es objeto de tutela, tiene que ser amparado por una legislación y debe ser atendido por los órganos del Estado encargados de su protección.

El Estado asume entonces el compromiso de protegerlo en determinados aspectos, entre otros, que sea alimentado, asistido y defendido en su salud, que no sea explotado en su trabajo, que reciba una educación integral, que sea amparado por leyes y tribunales especiales, que no se le prive de libertad sin cumplirse las formalidades legales.

c) Amplias facultades discrecionales del juez de menores. - La figura del juez en esta doctrina tutelar aparece como protectora, su función ha sido calificada como la de un buen padre de familia, atribuyéndose a ambos la facultad de no equivocarse. Su ámbito de intervención se extiende a niveles preventivos, investigativos y decisorios dentro de un marco de gran discrecionalidad. El juez tutelar dispone de un poder absoluto para detectar y tratar a los menores a fin de evitar problemas mayores.

d) Los menores son inimputables y carentes de responsabilidad penal. - Se considera que la inimputabilidad es la característica que marca definitivamente la separación entre el derecho penal y el derecho de menores en situación irregular. Al no ser imputable, no comete delito, por lo tanto, no es delincuente; al no ser delincuente, no se le pueden aplicar penas sino medida socioeducativa.

La situación irregular de inimputabilidad abarca a todos los seres humanos desde cero hasta el cumplimiento de los 18 años de edad, sin que exista ninguna consideración jurídica distinta en esa etapa; siendo, por lo tanto, homogéneamente irresponsables.

Los actos cometidos por los menores que implican la violación de una ley penal no son imputables ni culpables, ya que los mismos no tienen plena conciencia de las consecuencias de su obrar y no poseen capacidad de derecho; tampoco son culpables por tratarse de seres en desarrollo que no alcanzan a comprender el sentido y proyección de sus actos.

e) El tratamiento reeducativo se manifiesta a través de medidas vinculadas a la personalidad individual de cada menor. - La medida reeducativa en la doctrina de la situación irregular se define como el medio que el Estado dispone para transformar en un ser socialmente útil al menor de 18 años que se encuentra en situación irregular, lo cual no constituye en sí un daño; aun cuando implique la privación de bienes jurídicos, por cuanto su carácter tutelar se encamina necesariamente a hacer posible que el menor de edad se convierta en un ciudadano útil, a sí mismo y a la sociedad.

Se parte de la convicción de que el acto cometido por el menor solo interesa en la medida de que constituya una manifestación de su peligrosidad, y que por lo tanto es necesario una medida de protección, de asistencia, educación o reeducación.

La duración de las medidas reeducativas es indeterminada. Expresado de otra manera, la medida no tiene lapso de duración por cuanto al tratarse de personalidades en evolución, el parámetro para su duración lo establecerá la conducta del menor durante el tratamiento.

f) Ausencia de garantías procesales en el procedimiento de los menores en situación irregular. - Uno de los aspectos que mejor caracteriza a la doctrina de la situación irregular es la función jurisdiccional, la cual es concebida como de carácter inquisitivo. Se considera que este principio impregna todo el proceso, los poderes discrecionales del juez son como un poder absoluto que otorga el Estado con la finalidad de proteger al menor, quien es el objeto de la investigación judicial. Durante el procedimiento no existen intereses contrapuestos, el Juez tiene como norte un solo interés: la protección tutelar del menor; en consecuencia, no está vinculado a los acuerdos ni a las argumentaciones de las partes.

No se admiten las instituciones procesales de la acusación y de la defensa, es decir, existe una especie de concentración de ambas en la figura del Juez.

Las actuaciones en el proceso tutelar de menores son rigurosamente confidenciales con el ánimo de proteger al menor.

Esta no publicidad se extiende a todas las fases del proceso y el juez determina, conforme a su criterio, quienes tienen acceso a las actuaciones.

El juez no tiene directrices para la valoración de las pruebas. Su amplio poder discrecional le permite valorar las pruebas de acuerdo al interés del menor y su función protectora, lo que es igual a arbitrariedad.

En la decisión lo que debe prevalecer es el interés del menor prescindiendo de todo formalismo procesal.

En resumen, son el paradigma de la doctrina de la situación irregular las ideas del niño-delincuente-abandonado como objeto de control social y de los jueces de menores como herramientas de política de estado de control respecto de los potenciales infractores del orden. En pocas palabras, esta doctrina no significa otra cosa que legitimar una potencial acción judicial indiscriminada sobre niños y adolescentes en situación de dificultad. Es que la doctrina de la situación irregular, de compasión-represión, legitimaba la disponibilidad estatal absoluta de sujetos vulnerables, que precisamente por serlo, son definidos en situación irregular.

B. La Doctrina de la Protección Integral.

Actualmente se asiste a una suerte de revolución teórica-conceptual que ha conducido a visualizar al niño, niña y adolescente como sujeto de derechos. La Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, ha constituido, sin duda alguna, el instrumento jurídico más completo y acabado de la nueva concepción de la infancia y adolescencia.

Aparece un nuevo paradigma que obliga a repensar profundamente el sentido de las legislaciones para la infancia y adolescencia, como instrumentos realmente eficaces de defensa y promoción de los Derechos Humanos de todos los niños y adolescentes, y no solamente de la categoría residual “menores” como ha sido concebida la protección bajo el esquema de la doctrina de la situación irregular. Este nuevo paradigma se conoce como la Doctrina de la Protección Integral.

La doctrina de la protección integral se constituye de un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales, cuyo antecedente es la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. Los instrumentos básicos de esta doctrina son:

1. La Convención sobre los Derechos del Niño, del 20 de noviembre de 1989.
2. Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing del 29 de noviembre de 1985).
3. Las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad y Directrices para la prevención de la delincuencia juvenil (Reglas de Riyadh del 14 de diciembre de 1990).

Cabe destacar que la Convención sobre los Derechos del Niño, que constituye un documento jurídico con fuerza vinculante para los Estados partes, en su párrafo noveno del Preámbulo, refiere la importancia de otros textos internacionales previos, entre ellos, las Reglas de Beijing, realzando así su valor jurídico, sobre todo a los efectos de la interpretación de disposiciones conexas de la Convención.

La importancia de la Convención es trascendental, ya que ella constituye la reafirmación y consolidación de los derechos del niño, es decir, se sientan las bases de la edificación de los derechos humanos de la infancia y adolescencia, desapareciendo cualquier duda sobre el “ser objeto del derecho a una protección especial” como ha sido concebido por la doctrina anterior. Definitivamente irrumpe como sujeto de todos los derechos reconocidos por la normativa internacional para todos los ciudadanos, y, además, tiene los derechos propios a su especial condición de ser humano en desarrollo. Es que, como se ha indicado, el punto central de la doctrina

de la protección integral es el reconocimiento de todos los niños, niñas y adolescentes, sin discriminación alguna, como sujetos de plenos derechos, cuyo respeto el Estado debe garantizar.

De la consideración del menor como objeto de compasión-represión y de tutela por parte del Estado, a la consideración de la infancia y adolescencia como sujeto de plenos derechos, así como la previsión de los canales idóneos para exigirlos, es lo que caracteriza el tránsito de una doctrina a otra.

Un aspecto central en este proceso es el cambio del término menor por el de niño, que responde no sólo a una opción terminológica, sino a una concepción distinta: el cambio de un ser desprovisto de derechos y de facultades de decisión, por un ser humano, sujeto de derecho, capaz de ejercer derechos fundamentales.

Los postulados más importantes de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la propia Doctrina de la Protección Integral son:

1. El cambio de visión del niño, de objeto de compasión y represión a un sujeto pleno de derechos.
2. La consideración del principio del interés superior del niño, que sirve como garantía (vínculo normativo para asegurar los derechos subjetivos de los niños), norma de interpretación y/o resolución de conflictos; y como criterio orientador de las políticas públicas referidas a la infancia.
3. La inclusión de los derechos de los niños dentro de los programas de derechos humanos.
4. El reconocimiento al niño de derechos y garantías en los casos en los que se encuentre en conflicto con la ley, especialmente la ley penal. En este último caso, la necesidad de diferenciar el grado de responsabilidad según el grupo etéreo al que pertenezca.
5. El establecer un tratamiento distinto a los niños que se encuentran abandonados con los infractores de la ley penal, separando claramente la aplicación de una política social o política criminal respectivamente.
6. La adopción de medidas alternativas a la privación de libertad, la cual debe ser una medida excepcional y aplicarse por el mínimo plazo posible.
7. El principio de igualdad ante la ley y la no discriminación.

Las características esenciales de la doctrina de la protección integral son:

- a) La consolidación de la situación jurídica del niño, niña y adolescente como titular de derechos fundamentales. – La Convención sobre los Derechos del Niño exige reconocer las peculiaridades del disfrute y ejercicio por los niños, niñas y adolescentes de derechos como la identidad, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, conciencias y religión, el derecho de asociación y el derecho de reunión, el derecho a la intimidad y a la vida privada y los derechos de participación tanto a nivel familiar como cultural y social.

El reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos significa que ellos tienen derecho: al respeto, la dignidad, la libertad, la protección y al desarrollo pleno. Los derechos humanos, son atributos propios de su condición humana. Y gozan, a su vez, de todos los derechos humanos fundamentales y de las garantías reconocidas a los adultos en la Constitución y en las leyes; no pudiendo como ciudadanos – en ningún caso y por ningún motivo- ser tratados como objetos de intervención por parte de la familia, las instituciones (públicas o privadas), la sociedad y el Estado.

De esta manera, se les protege de cualquier decisión, arbitrariedad o injerencia ilegal por parte del Estado, sus representantes y de toda

posibilidad e intento de considerar o tratar al niño, la niña y el adolescente, como menor tutelado por éste.

Importa, además, considerarlos como personas en condición peculiar de desarrollo. Además de los derechos y garantías reconocidos a los adultos, a todos los niños, niñas y los adolescentes deben reconocérsele derechos especiales que garanticen recibir cuidados distintivos.

- b) La protección integral de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a partir de la consideración su superior interés. – La protección integral constituye no solo una serie de dispositivos jurídicos sino una forma distinta de pensar la infancia en el proceso socio cultural, elevándolo en su status jurídico y social. De esta nueva forma de pensar la infancia emerge la concepción del niño como sujeto poseedor de derechos y como destinatario de consideración especial. Estos derechos, son interdependientes y están relacionados con la sobrevivencia, el desarrollo, la participación, la promoción, y la protección de la niñez.

Dentro de este contexto, el interés superior del niño se constituye en la herramienta eficaz para adjudicar un derecho cuando existe conflicto de intereses o discrepancia de derechos, entre un/a niño/a y otra persona o institución. El interés superior, que no puede quedar librado al criterio adulto, está íntimamente vinculado con el derecho del niño(a) a ser escuchado/a y a la participación. Obliga a todos (Juez, legislador, funcionario, familia, etc.) a que, al momento de resolver, de tomar una decisión, se otorgue consideración primordial, dándosele prioridad al interés superior del niño. La prioridad del interés superior del niño consiste en primacía al recibir protección y ayuda en cualquier circunstancia, prioridad en la atención de los servicios u organismos públicos, preferencia en la formulación y ejecución de políticas sociales, y destino privilegiado de recursos públicos en las áreas relacionadas con la protección de la infancia, la adolescencia y la familia.

- c) El reconocimiento de autonomía y participación del niño, niña y adolescente en el ejercicio de sus derechos fundamentales. – La Convención sobre los Derechos del Niño promueve el reconocimiento de autonomía y participación del niño en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Están relacionadas con el derecho del niño, la niña y el/la adolescente a participar, a la libertad, a recibir y a buscar información, a ser escuchado y a emitir opinión en todos los asuntos y en todos los espacios que tienen influencia en la vida de los mismos. A que se le designe un representante, que hable en su nombre, no por él, porque nadie puede reemplazarlo, para lo cual y con miras a asegurarle protección especial, es necesario que sea escuchado.

Evidentemente, el reconocimiento de autonomía y participación hace referencia a la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia en brindar un nivel de vida adecuado, que promueva la protección y favorezca el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce los derechos y responsabilidades de los padres, tutores, o de las personas encargadas del niño, en la atención, el cuidado y la educación de los mismos, así como el derecho a recibir apoyo por parte del Estado.

En buena cuenta, la doctrina de la protección integral plantea el reconocimiento del niño como sujeto pleno de derechos, posicionando a la infancia y a la adolescencia como ciudadanos de nuestro Estado social -ya no como meros objetos de intervención por parte del Estado, la sociedad y la familia- y posibilita ir exigiendo las concreciones vinculadas a un Estado de Derecho para los niños, niñas y adolescentes.

La doctrina de la protección integral postula un nuevo esquema de relaciones paterno-filiales, basado en un modelo familiar participativo, democrático y en el principio del interés superior del niño.

Existen, sin embargo, algunas contradicciones sobre cuya solución parece, en estos momentos, no ser fácil de alcanzar un consenso. Se trata de contradicciones que inspiran las reformas habidas durante la última década, pero que desconocen los verdaderos alcances de los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se pueden resumir en tres:

1. La contradicción entre paternalismo y liberalismo. Reconocer el acceso gradual del niño, niña y adolescente al ejercicio de la propia libertad (en la conciencia, la expresión, la reunión, la asociación, y, en general, en la propia realización) choca frontalmente, con dramática frecuencia, con los requerimientos de protección del interés superior del niño frente a las posibilidades de manipulación. Asuntos como el de las sectas o el de la utilización de niños en los “reality shows” son ejemplos de esta tensión.
2. La contradicción entre desarrollo evolutivo y configuración jurídica de edades. Si está fuera de discusión que, psicológicamente, el niño evoluciona de forma paulatina, está también fuera de duda que el ordenamiento necesita, en aras de la seguridad, establecer un régimen claro de edades. Preceptos bienintencionados pueden ser contraproducentes al dejar un margen enorme de arbitrariedad interpretativa que, ante las exigencias de la seguridad jurídica, pueda inclinarse por la interpretación más restrictiva. La solución parece requerir la sustitución de la dicotomía mayoría-minoría por un sistema de tramos –como dice Díez-Picazo “probablemente hay que volver al más antiguo Derecho romano y distinguir niños, infantes, adolescentes y jóvenes” – limitando la incapacidad de obrar genérica para los infantes y desarrollando, a continuación, un sistema que, en lugar de partir de la incapacidad genérica y regular excepcionalmente los actos que los niños pueden realizar (lo que actualmente ocurre), parta de la capacidad de obrar genérica y regule los actos que, en cada tramo de edad, el niño (el adolescente, el joven...) no puede realizar por sí mismo, o bien en que su consentimiento o decisión requiere complementos (esto es, intervenciones de sus padres o representantes legales).
3. La contradicción entre inimputabilidad y seguridad jurídica. Las intenciones humanísticas del correccionalismo condujeron a un sistema de reforma de menores repudiable. Sin embargo, aún subsisten muchas resistencias teóricas en la determinación de la edad mínima a partir de la cual se asume responsabilidad frente a la ley penal o la fijación del plazo máximo de duración de la privación de la libertad; recurriéndose al argumento de la necesidad de penalizar las conductas delictivas de los adolescentes como una garantía de sus derechos, desconociendo que la Convención sobre los Derechos del Niño contiene un marco definido de relación con la justicia y un modelo de intervención educativa basado en la aceptación de la responsabilidad del infractor y en la voluntariedad de participación en todo proceso de carácter educativo y terapéutico.

La supresión de tales contradicciones requiere de la verdadera comprensión de los alcances de la doctrina de la protección integral y de la articulación de los esfuerzos de la sociedad civil y los organismos gubernamentales; traducir las directivas de la Convención en cuerpos jurídicos y políticas sociales en el plano nacional. La mejora de las condiciones de vida de la infancia requiere formas institucionales y cambios legislativos. Convertir el tema de la niñez en prioridad absoluta constituye el prerequisite político cultural de estas transformaciones. El reconocimiento del niño y el adolescente como sujeto pleno de derechos representa el eje respecto al cual gira este nuevo enfoque de derechos.

La fundamentación rigurosa de las medidas adoptadas y una correcta y ponderada interpretación de la ley se restituyen como deberes del Juez especializado. La división de competencias y responsabilidades con el Ministerio Público, así como la obligatoriedad de la presencia del abogado, colocan las bases mínimas para que la arbitrariedad sea sustituida por la justicia.

La infancia en riesgo, producto de las diversas situaciones de abandono, comienza y debe ser percibida como resultado directo de la omisión o inexistencia de las políticas sociales básicas. El niño de la calle constituye, antes que nada, el niño sin escuela y por tanto la asistencia no puede más ser cómplice de la omisión generalizada.

Los textos que abordan el contenido de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, explicitan los términos y alcances del compromiso nacional en esta materia. No obstante, el carácter de este enfoque exige la articulación de los gobiernos y la sociedad civil para el diseño y fiscalización de las políticas públicas.

2.4.1.2 El Sistema Internacional de Protección de los Derechos del Niño. (PLÁCIDO V., 2015)

Los derechos del niño han carecido de reconocimiento jurídico hasta entrando el siglo XX. Han surgido Declaraciones, Convenciones..., que de una forma más o menos directa tienden a proteger los derechos de los niños. Ello ha sido así, por cuanto se asumió que la infancia está necesitada de una especial protección, al carecer la comunidad de prácticas y normas de respeto a los derechos de sus propios niños. El niño comienza a ser considerado como un sujeto cuyos derechos fundamentales deben ser especialmente protegidos, al entenderse que los abusos producen graves daños en el menor.

El movimiento en defensa de los niños, que comienza en Inglaterra, llegó a través de distintas organizaciones a los organismos internacionales con la adopción; en 1924, de la Carta de los Derechos del Niño, por la Sociedad de Naciones. A partir de ese momento, comienzan a aparecer distintos documentos en los que la esfera de protección al niño, aunque a veces sea de forma indirecta, se va ampliando paulatinamente.

La Segunda Guerra Mundial, consiguió que la cuestión de los niños fuese de nuevo una preocupación para determinadas asociaciones más bien de carácter humanitario, tal como ya había sucedido durante la primera gran guerra. En ese sentido, la Liga Internacional para la Educación Nueva, elaboró en Londres, en 1942, una Carta de la Infancia, con la que se pretendía salvaguardar a los niños de las repercusiones de ese nuevo desastre mundial. Sin embargo, la trascendencia internacional de la Carta fue mínima.

Luego de largo proceso de discusión promovido por la Comisión de Asuntos Sociales y concluido por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 1959 se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño.

Esta Declaración añade algo a la Universal de los Derechos Humanos; ambas tienen como fin mejorar las condiciones en que se desarrolla la vida del ser humano, pero mientras que la primera se dedica al individuo en su integridad, la segunda se concentra durante una etapa de la vida de todo individuo: la niñez. Por eso, son inseparables y de ahí que la última venga a fortalecer y reafirmar lo establecido en la primera.

La Declaración de Ginebra nace inspirada por las personas que se enfrentaron a los desastres de la Primera Guerra Mundial, y se pretendía con ella evitar a los niños los sufrimientos causados por esta. Fue, por tanto, más el producto de un momento social, y buscaba, no ya el reconocimiento de los derechos, ni la protección en el campo jurídico, sino crear una conciencia social adecuada para que esa protección surgiera.

Por el contrario, la Declaración de 1959 no está ya dirigida a la “humanidad”, sino a todos aquellos con responsabilidad tanto social como política, para que apliquen de forma

directa esos principios, y, en definitiva, para que estos se traduzcan en medidas legislativas que tiendan a la protección de los niños.

Aun así, carecía este texto de vías efectivas para imponer de forma coactiva a los Estados firmantes de la Declaración, el respeto a los principios reconocidos.

En 1978, debido a que la Declaración de 1959 carecía de una exhaustiva enumeración de los derechos de los niños, así como su carácter, ya analizado, de texto sin obligaciones jurídicas para los Estados Parte, el Gobierno de Polonia presentó a la Comisión de Derechos Humanos un proyecto sobre una Convención de las Naciones Unidas, relativa a los Derechos del Niño.

Recién, en el mes de noviembre de 1989, coincidiendo con el XXX aniversario de la Declaración de Derechos del Niño adoptada por las Naciones Unidas, y a petición de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social, fue presentado el proyecto de Convención. Después de su adopción por la Asamblea General, la Convención sobre los Derechos del Niño quedó abierta a la firma el 26 de enero de 1990.

El mayor logro de la Convención es su existencia misma, puesto que supone el instrumento internacional más importante en defensa de los derechos de los niños. Como tal, tiene un carácter obligatorio, puesto que no es un simple cuerpo de principios, como lo era la Declaración de 1959.

La Convención considera al niño como alguien que requiere protección y asistencia especiales, pero también lo reconoce como sujeto de derechos y libertades, y con capacidad para participar en la toma de decisiones en los asuntos relativos a su persona.

A. La Protección Jurídica de la Infancia.

El respeto de los derechos del niño constituye un valor fundamental en una sociedad que pretenda practicar la justicia social y los derechos humanos. Ello no solo implica brindar al niño cuidado y protección, parámetros básicos que orientaban la concepción tradicional sobre el contenido de tales derechos, sino que, adicionalmente, determina reconocer, respetar y garantizar la personalidad individual del niño, en tanto titular de derechos y obligaciones. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que “la verdadera y plena protección de los niños significa que estos puedan disfrutar ampliamente de todos sus derechos, entre ellos los económicos, sociales y culturales, que les asignan diversos instrumentos internacionales. Los Estados Partes en los tratados internacionales de derechos humanos tienen la obligación de adoptar medidas positivas para asegurar la protección de todos los derechos del niño.

Los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos. Pero, en atención a la particular situación de vulnerabilidad y dependencia en la que se encuentra el ser humano en tales fases de la vida, se justifica objetiva y razonablemente el otorgarles un trato diferente que no es per se discriminatorio; sino, por el contrario, sirve al propósito de permitir el cabal ejercicio de los derechos especiales derivados de tales condiciones.

De acuerdo con ello, la especial protección que les reconoce la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño tiene como objetivo último el desarrollo armonioso de la personalidad de aquellos que les han sido reconocidos. A tales derechos especiales les corresponden deberes específicos, vale decir, la obligación de garantizar la protección necesaria, a cargo de la familia, la sociedad y el Estado. Esta es la verdadera comprensión de la previsión del artículo 4 de la Constitución cuando se indica que “la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono”. No supone, por tanto, la descripción a la teoría de la situación irregular por la referencia a la “situación de abandono”.

En cuanto a la protección especial para el caso de los niños y adolescentes, el Tribunal Constitucional ha expresado – a propósito del artículo 4 de la Constitución de 1993- que

“el fundamento constitucional de la protección del niño y adolescente que la Constitución les otorga radica en la especial situación en que ellos se encuentran; es decir, en plena etapa de formación integral en tanto personas. En tal sentido, el Estado, además de proveer las condiciones necesarias para su libre desarrollo, debe también velar por su seguridad y bienestar”.

La protección superlativa que ha sido prevista en la Constitución es permanente, pero la responsabilidad no solo es del Estado, pese a que siempre los reclamos son dirigidos a este, sino de la comunidad toda. El artículo 4 de la Constitución, respecto a dicha salvaguardia, si bien le asigna un papel protagónico al Estado, la hace extensiva a la comunidad.

2.4.1.3 La Convención sobre Derecho del Niño y el Interés Superior del Niño. (PLÁCIDO V., 2015)

A. Convención sobre Derechos del Niño.

En oportunidad de celebrarse el trigésimo aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, mediante resolución 1386 (XIV), aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, tras diez años de elaboración de sus contenidos. La propuesta inicial, tendiente a proyectar en estos tiempos los avances logrados con la Declaración de 1959, correspondió a Polonia, si bien tal iniciativa se limitaba a reformular los derechos allí enunciados.

Pero la profunda transformación evidenciada por la sociedad en el transcurso de ese tiempo y la sanción de numerosos y trascendentes pactos internacionales relativos a los derechos de la humanidad, que incluían al niño en forma más o menos directa, determinaron la necesidad de otorgar un instrumento que reflejara tales avances, a la vez que constituyera un compromiso de la sociedad, representada por los distintos Estados, respecto de considerar al niño en la plenitud de su proyección como persona.

El propio Preámbulo de la Convención alude a algunos de estos instrumentos internacionales, pues menciona la Carta de las Naciones Unidas; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño; la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959 y reconocida en la ya mencionada Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, como se señala en el Preámbulo, en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que interesan en el bienestar del niño.

Existen otros instrumentos que, igualmente, vinieron a conformar todo un panorama de reclamos por la concreción de los derechos de la infancia, que transformaron el carácter meramente enunciativo o de recomendación inherente a las declaraciones, en una normatividad con fuerza vinculante e incorporada a los ordenamientos jurídicos de los respectivos Estados, con la jerarquía necesaria. Es preciso destacar el relieve que, entre tales antecedentes, reviste la Declaración de los Derechos del Niño de 1959.

Los trabajos preparatorios de esta Declaración se iniciaron en 1946, en forma conjunta con los de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo influjo transcendental llevó a hacer dudar sobre la necesidad de un instrumento específico para los niños. Pero se destaca que en dicha Declaración se consagran derechos exclusivamente sociales, sin contemplarse los civiles y políticos, y sus principios resultan recargados de detalles, sin cláusulas de aplicación propiamente dichas. Ese contenido obligatorio, propio de las convenciones, comienza a ser considerado una necesidad y, con motivo del Año Internacional del Niño (1979), Polonia peticiona a la Asamblea General que se adopte un instrumento de tal carácter.

La adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño constituye una de las manifestaciones de que tales inquietudes pueden ser receptadas y que esos pactos internacionales se convierten en instrumentos decisivos para el bienestar de los niños.

A.1 El Carácter Vinculante de la Convención sobre los Derechos del Niño.

El fundamento de la obligatoriedad de los tratados se apoya en los principios del *pacta sun servanda* y de la buena fe. Así, el artículo 26 de la Convención de Viena de 1969 señala: “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. De ello se tiene que los tratados no solo son obligatorios, sino que hay que cumplirlos de buena fe; esto es, absteniéndose de realizar actos destinados a frustrar el objeto y fin del tratado y haciendo uso de todos los mecanismos para lograr la plena ejecución del acuerdo.

El Tribunal Constitucional ha destacado que “tal como lo dispone el artículo 55 de la Constitución, los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. De esta manera, los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano, por pertenecer al ordenamiento jurídico interno, son Derecho valido, eficaz y, en consecuencia, inmediatamente aplicable al interior del Estado”.

La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional sobre derechos humanos que contiene el catálogo mínimo de derechos específicos de la infancia, con carácter vinculante para los Estados frente a todo menor y a sus representantes legales sometidos a sus jurisdicciones y con mecanismos de supervisión para el cumplimiento de estas obligaciones por parte de los Estados.

Dicho conjunto de derechos, que componen el catálogo, constituye el mínimo exigible al Estado. Nada autoriza a que el Estado lo restrinja y nada obsta, o más bien todo alienta al Estado para que incluya otros derechos en su ordenamiento jurídico nacional, para que amplíe el alcance y contenido de un derecho del catálogo o para que mejore las posibilidades de ejercicio y goce de los derechos existentes. En ese sentido, la obligación de los Estados de procurar el ejercicio de los derechos del niño no es una obligación estática, sino dinámica y progresiva, que debe permitir el mejoramiento de las condiciones necesarias para el pleno goce de estos derechos.

El carácter vinculante surge para el Estado por su ratificación o adhesión voluntaria y de buena fe. A partir de ello, el Estado se obliga, no con otros Estados partes, sino con el individuo que habita en su jurisdicción, que en los términos del tratado sobre derechos humanos son efectivamente los auténticos destinatarios.

En general, el Estado asume dos obligaciones básicas: la primera, la de respetar los derechos del niño, y la segunda, la de garantizar el ejercicio de los mismos.

La obligación de respetar los derechos humanos, implica para el Estado y sus agentes una abstención de realizar cualquier acto, sea de naturaleza administrativa, legislativa o judicial que amanece o viole los derechos humanos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño.

La obligación de garantizar el goce y pleno ejercicio de los derechos a todo menor y a sus representantes legales sometidos a su jurisdicción, importa el deber del Estado de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos del niño. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos del niño.

Por el carácter vinculante, la Convención es oponible jurídicamente a todos los Estados en materia de derechos humanos, siempre que exista el marco convencional pertinente que prevea derechos a los individuos y los mecanismos procesales necesarios para llevarlos a cabo.

La existencia de mecanismos de supervisión en la Convención sobre los Derechos del Niño determina para el Estado la obligación de cooperar en la supervisión

internacional, proporcionando información oportuna, pertinente y veraz respecto de la situación general de los derechos humanos en su jurisdicción, a fin de que el Comité sobre los Derechos del Niño pueda evaluar si dicho Estado cumple o vulnera los derechos específicos de la infancia y, en su caso, dictar la recomendación correspondiente.

A.2 La Definición de Niño en la Convención sobre los Derechos del Niño, y en Otros Instrumentos Internacionales.

Al respecto Figueroa (2012) señala, ¿A quiénes denominamos “niños”? La Declaración Americana de Derechos Humanos en su artículo VII solo brindaba una aproximación a la noción de “niño” y la materializaba en cuanto a obligaciones en el artículo XXX. Ambas nociones, sin embargo, denotaban una referencia muy contextual respecto a los niños, asignándoles un estatus de objeto de protección. La Convención Americana de Derechos Humanos sigue esta misma tendencia en su artículo 5 párrafo 5 en cuanto aborda, en caso de menores procesados, la separación de los niños respecto de los adultos. Se igual forma, el artículo 17 párrafo 5 del mismo instrumento establece iguales derechos de reconocimiento tanto para niños nacidos dentro como fuera del matrimonio. Sin embargo, conforme podemos advertir, se trata de una referencia legal a los niños solo por la figura de aproximación de contextos, esto es, se regula un derecho principal y, adicionalmente, se advierte la necesidad de incluir a los niños.

Es recién a través de la Convención sobre los Derechos del Niño que la concepción de infante varía a la de sujeto de Derecho Internacional y le corresponde una definición propiamente dicha. Lo relevante de este instrumento de 54 artículos reside en un tratamiento amplio de los derechos que les asisten a los menores, quienes se convierten en beneficiarios sustantivos de un sistema de protección integral, en cuanto su visión axiológica es de suyo mucho más amplia respecto a los derechos de los niños. La dimensión valorativa del niño se transforma radicalmente y pasamos de una visión estática de los derechos del menor a un enfoque dinámico de estos derechos. Advertimos así que la apreciación de mera legalidad de los derechos del niño, cual pozo inmóvil en el cual solo distinguimos el nivel calmado de las aguas, deviene en un control de legitimidad de derechos, esto es, ahora estamos frente a un torrente de aguas caudalosas en el cual es necesario percibir que los derechos de los niños discurren unos tras otros, y que tenemos el imperativo de asirlos para una efectiva protección de los derechos de los menores favorecidos por razones de edad. (ROMAN VALDIVIEZO, 2018)

Siendo así, el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece lo siguiente:

Artículo 1.- Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

El artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño define al “niño”, para los efectos del tratado internacional, como todo ser humano menor de 18 años de edad, dejando abierta la especificación del momento en que comienza la infancia. Ni la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño (1924) ni la Declaración sobre los Derechos del Niño (1959) definen el comienzo o el fin de la infancia. Pero el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño llama la atención sobre la afirmación que aparece en la Declaración de 1959: “(...) el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”.

Debe indicarse que la falta de referencia al punto de partida de inicio de la infancia fue intencional con el propósito de evitar adoptar, sobre el aborto y otros temas relacionados con el período anterior al nacimiento, una posición que hubiera amenazado la aceptación universal de la Convención. De esta manera, la Convención permite a cada Estado parte buscar una solución equilibrada a los conflictos de derechos e intereses que originan cuestiones como el aborto y la planificación de la familia. Cabe mencionar que la Convención no afecta las

disposiciones de la legislación nacional que sean más conducentes a la realización de los derechos del niño.

Para los efectos de la Convención sobre los Derechos del Niño, la infancia termina y la mayoría de edad se alcanza al cumplir el niño los 18 años de edad “salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. Así pues, la Convención se muestra más normativa, aunque no inflexible, a la hora de definir el fin de la infancia.

Los 18 años se constituye en una edad de referencia máxima general. “Los Estados partes deberán utilizar esa edad límite como una norma y una referencia para el establecimiento de cualquier otra edad particular para propósitos o actividades específicas (...) queda claro que el niño puede alcanzar la mayoría de edad antes en virtud de la ley que le sea aplicable. Esta expresión no debe ser interpretada de ninguna manera como una ‘cláusula de excepción general’, ni se permite, con arreglo a ese artículo, fijar edades que puedan ser contrarias a los principios y las disposiciones de la Convención”.

El Comité de Derechos Humanos destaca que las “edades de protección no deben ser excesivamente bajas y que, en ningún caso, un Estado puede eximirse, en virtud del Pacto, de sus obligaciones con los niños menores de 18 años, aunque a los efectos de la legislación nacional hayan alcanzado la mayoría de edad”. Por cierto, que en la Convención no se insiste en que los Estados con edades superiores para la mayoría de edad deban bajarlas, puesto que la definición del niño dada por el artículo 1 se entiende “para los efectos de la Convención”. Cabe precisar que el artículo 1 de la Convención no impide fijar edades mínimas de protección para diferentes finalidades (contra los trabajos peligrosos, contra la privación de libertad o contra la participación en conflictos armados, por ejemplo), las que, en todo caso, deben fijarse tan altas como sea posible. Otras edades mínimas están relacionadas con la adquisición de autonomía por parte del niño y con la obligación del Estado de respetar los derechos civiles y la evolución de las facultades del niño.

El Comité de los Derechos del Niño ha subrayado que, al fijar edades mínimas, los Estados deben inspirarse en la Convención, y en especial en sus principios generales: no debe existir discriminación, el interés superior del niño debe ser una consideración primordial y la supervivencia y el desarrollo del niño deben asegurarse en la máxima medida posible.

El Comité de los Derechos del Niño ha precisado, sin carácter taxativo, la conveniencia de fijar edades mínimas para la realización, por parte del niño, de derechos de autonomía. “Se pide a los Estados Partes que informen acerca de la edad en que se alcanza la mayoría de edad y acerca de la edad mínima establecida legalmente para distintas finalidades, por ejemplo, empleo peligroso, consentimiento sexual, matrimonio, alistamiento voluntario en las fuerzas armadas, reclutamiento en las fuerzas armadas, declaración ante los tribunales, responsabilidad penal, privación de libertad, encarcelamiento y consumo de alcohol o de otras sustancias controladas”.

La Convención no ofrece una orientación concreta sobre la edad o las edades específicas en las que el niño puede ejercer estos derechos, pero sí proporciona un marco de principios. Así en el artículo 12 se alude a la edad y madurez; en los artículos 5 y 14, se refiere a la evolución de las facultades.

B. El Interés Superior del Niño

El Comité de los Derechos del Niño ha insistido en que el interés superior del niño es uno de los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño; aunque no es un concepto nuevo en el ámbito de los instrumentos internacionales de derechos humanos, la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 ya lo definía en su Principio 2: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”.

El artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño subraya que las autoridades administrativas y legislativas, así como las instituciones públicas y privadas deben cerciorarse de las repercusiones que tendrán sobre el niño las medidas que adopten, con el objeto de que el interés superior del niño sea siempre una consideración primordial. De ello, se advierte que las interpretaciones de aquello que constituye el “interés superior del niño” no pueden en ningún caso modificar o reemplazar cualquier derecho garantizado por otros artículos de la Convención.

El Comité de los Derechos del Niño ha propuesto los criterios que permitan juzgar en qué consiste, en general o en casos particulares, este interés, a partir de los valores y los principios generales de la Convención que deben aplicarse en cualquier circunstancia. Así, en la Observación General N°14 (2013) sobre “El derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1)” ha precisado que el objetivo del concepto de interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño; resaltando que tiene una triple acción:

- a. Un derecho sustantivo. – Se trata “del derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños en general”.
- b. Un principio jurídico interpretativo fundamental. – “si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño”.
- c. Una norma de procedimiento: “siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados”.

Asimismo, destaca que el interés superior del niño no siempre será el factor único y decisivo a considerar; puede que haya conflicto entre los intereses de diferentes niños o grupo de niños, o entre los intereses de los niños y los de los adultos. No obstante, el interés superior del niño será, en todo caso, objeto de consideración. Es necesario, por tanto, demostrar que se han investigado los derechos del niño y que se le ha dado consideración primordial. Solo así, se adoptará el interés superior del niño como principio rector en la aplicación de la Convención, esto es valorando las repercusiones sobre los niños de las medidas adoptadas.

B.1 El Interés Superior del Niño en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos de la Infancia.

La evolución actual del pensamiento jurídico permite afirmar que, tras la noción de derechos humanos, subyace la idea de que todas las personas, incluidos los niños, gozan de los derechos consagrados para los seres humanos y que es deber de los Estados promover y garantizar su efectiva protección igualitaria.

Por su parte, en virtud del citado principio de igualdad, se reconoce la existencia de protecciones jurídicas y derechos específicos de ciertos grupos de personas, entre las cuales están los niños.

La Convención sobre los Derechos de los Niños es una excelente síntesis de normas provenientes de instrumentos de derechos humanos de carácter general y de principios y derechos propios de la tradición jurídica vinculada a los derechos de la infancia. Sin embargo, las disposiciones de la Convención deben ser interpretadas y comprendidas sistemática y armónicamente; esto tendrá particular importancia para interpretar, a la luz del nuevo contexto, aquellos principios que la Convención ha recogido del anterior derecho de familia o de menores, como es el caso del de “interés superior del niño”.

Es en este marco que se propone analizar la noción del “interés superior del niño”, fórmula usada profusamente por diversas legislaciones en el presente siglo, pero que adquiere un nuevo significado al ser incorporada en el artículo tercero de la Convención.

Generalmente, se cree que el interés superior del niño es una directriz vaga, indeterminada y sujeta a múltiples interpretaciones, tanto de carácter jurídico como psicosocial, que constituiría una especie de excusa para tomar decisiones al margen de los derechos reconocidos en razón de un etéreo interés superior de tipo extrajurídico.

Por esta razón, diversos autores han puesto de relieve que el carácter indeterminado de esta noción impide una interpretación uniforme y, en consecuencia, permite que las resoluciones que se adopten basadas en ella no satisfagan debidamente las exigencias de seguridad jurídica. Existen quienes lamentan que la Convención la recogiera, porque amparados en “el interés superior” se permitiría un amplio margen a la discrecionalidad de la autoridad y se debilitaría la tutela efectiva de los derechos que la propia Convención Consagra.

Por ello, surge una interpretación que supere estas objeciones, favoreciendo una concepción jurídica precisa del “interés superior del niño” que reduzca razonablemente la indeterminación y sea congruente con la finalidad de otorgar la más amplia tutela efectiva a los derechos del niño, en un marco de seguridad jurídica.

La Convención ha elevado el “interés superior del niño” al carácter de norma fundamental, con un rol jurídico definido que, además, se proyecta más allá del ordenamiento jurídico hacia las políticas públicas e, incluso, orienta el desarrollo de una cultura más igualitaria y respetuosa de los derechos de todas las personas.

Así lo ha reconocido el Comité de los Derechos del Niño, establecido por la propia Convención, que ha señalado que el interés superior del niño es uno de los principios generales de la Convención, llegando a considerarlo como principio “rector guía” de ella.

De este modo, cualquier análisis sobre la Convención no podrá dejar de hacerse cargo de esta noción, pero, a su vez, quien pretenda fundamentar una decisión o medida en el “interés superior del niño” deberá regirse por la interpretación que se desprende del conjunto de las disposiciones de la propia Convención.

Se parte de considerar que el “interés superior del niño” es una alocución que ha entrado en la historia jurídica de la humanidad de manera muy reciente, primero bajo la noción de “bien del niño”, después en su forma actual como principio general por la consagración que le ha dado la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 3. Es, por tanto, un concepto jurídico muy moderno, que apenas ha sido objeto de estudios de manera global, ya que el contenido permanece bastante impreciso y las funciones son múltiples. Es, en consecuencia, más examinado respecto a un punto preciso o aplicado en la jurisprudencia, que verdaderamente explicado de manera sistemática.

B.2 El Interés Superior del Niño en la Convención sobre Derechos del Niño.

El apogeo de este interés por el niño desemboca en la novedosa posición, consagrada por la Convención sobre los Derechos del Niño, que ubica al niño en la situación de un objeto de protección al mismo tiempo que de un sujeto de derecho. Es esta situación de sujeto de derecho la que va a obligar a una modificación importante en las mentalidades, en las leyes nacionales y en los instrumentos internacionales.

Es en este nuevo estatuto, que opera una verdadera revolución en la manera de considerar al niño, el que justifica la introducción de un nuevo concepto jurídico: “el interés del niño”. Se ha pasado del interés por el niño a la necesidad de inventar un instrumento de medida que se llama el “interés superior del niño”.

El Comité de los Derechos del Niño ha subrayado que los derechos del niño deben ser considerados como un todo y ha insistido en la interdependencia de los artículos, en particular de los que han sido reconocidos como principios generales (artículos 2, 3, 6 y 12) en la Convención sobre los Derechos del Niño. Así pues, los principios de no discriminación, de supervivencia y desarrollo, así como de respeto de la opinión del niño, deben tenerse en cuenta para determinar el interés superior del niño en una situación concreta o el interés superior de niños considerados como grupo.

La determinación del interés superior corresponde al espíritu de la Convención en su totalidad y, en concreto, al énfasis que esta pone en el niño como individuo, con sus opiniones y sentimientos propios, y como persona con plenos derechos civiles y políticos, a la vez que como beneficiario de protecciones especiales. “Este principio debe aplicarse junto con los otros principios generales cada vez que la Convención no establece una norma precisa”.

El artículo 3, primer párrafo, de la Convención sobre los Derechos del Niño funda el principio del interés superior del niño: “En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

B.3 El Interés Superior del Niño como Principio Jurídico Garantista.

Se puede afirmar que la noción del interés superior del niño, tal como está definida en la Convención sobre Derechos del Niño, es una noción que tiene dos funciones clásicas: el de controlar y el de encontrar una solución (criterio de control y criterio de solución).

Así, el criterio de control determina que el interés superior del niño sirve para velar que el ejercicio de derechos y obligaciones respecto de los niños sea correctamente efectuado.

De otro lado, el criterio de solución importa que la noción misma del interés superior del niño debe intervenir para ayudar a las personas que deben tomar decisiones hacia los niños a elegir la buena solución.

De esta forma, por el criterio de control, el interés superior del niño es un principio jurídico garantista, entendiéndolo como una obligación de la autoridad pública destinada a asegurar la efectividad de los derechos subjetivos individuales. Lo cual, implica que los principios jurídicos garantistas “se imponen a las autoridades, esto es, con obligatorios especialmente para las autoridades públicas y van dirigidos precisamente contra ellos.

Por lo tanto, el principio del interés superior del niño, reconocido en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica un deber del Estado frente a los niños en aras de efectivizar sus derechos subjetivos. Ahora, ¿Cuál es el contenido mínimo de este deber del Estado?

Una vez determinada su función, su contenido resulta ser la satisfacción de todos los derechos del niño.

De esta manera, el principio del interés superior del niño se constituye en un mandato dirigido al Estado para privilegiar determinados derechos de los niños frente a situaciones conflictivas, en las que el Estado deba restringir o limitar derechos individuales o intereses colectivos.

No obstante, la propia Convención sobre los Derechos del Niño establece que hay ciertos derechos de los niños que ceden frente a determinados intereses colectivos y a derechos individuales de terceros. Por ello mismo, no se puede afirmar la verdad de una proposición normativa que diga “todos los derechos de los niños prevalecen sobre el resto de los intereses colectivos y sobre los demás derechos individuales”.

Cabe precisar que la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce ciertos derechos sin permitir su limitación, lo cual implica la existencia de un conjunto de derechos

que deben prevalecer siempre frente a los intereses colectivos y los derechos de terceros. Es decir, existe un “núcleo duro” de derechos del niño dentro de la Convención, lo cual constituiría un claro límite a la actividad estatal impidiendo la actuación discrecional. Este núcleo comprendería el derecho a vida, a la nacionalidad y a la identidad, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a realizar las actividades propias de su edad (recreativas, culturales, etc.) y las garantías propias del derecho penal y procesal penal. Este es, pues, el contenido mínimo del deber del Estado de satisfacer los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

B.4 El Interés Superior del Niño como Pauta Interpretativa.

En otras normas jurídicas de la Convención sobre los Derechos del Niño, el interés superior del niño actúa como pauta interpretativa para solucionar conflictos entre los derechos de los niños. Esto acontece cuando el articulado de la Convención establece que un derecho del niño vea limitada su vigencia en virtud del interés superior del niño.

Cuando la Convención establece que un derecho del niño cede ante el interés superior del niño está disponiendo que determinados derechos pueden ser restringidos en aras de garantizar la eficacia de derechos de mayor jerarquía. De este modo, se relativizan ciertos derechos en aras de garantizar los derechos que se consideran superiores dentro del sistema normativo diseñado. Estos derechos de jerarquía superior son los que constituyen el “núcleo duro” de la Convención.

En conclusión, el interés superior del niño como pauta interpretativa permitiría solucionar conflictos entre los derechos consagrados en la Convención dando privilegio a determinados derechos que la propia Convención entiende como superiores. Debe destacarse que solo así se evitara que se esgrima el interés superior del niño para limitar discrecionalmente derechos de los niños, sin proteger al mismo tiempo los derechos fundamentales consagrados en la Convención.

2.4.1.4 Protección Jurídica frente a la Desprotección Familiar: Legislación Nacional e Internacional. (ROMERO TAPIA, 2017)

A. Legislación Nacional.

A.1 Constitución Política del Perú.

La Constitución Política del Perú, es el documento normativo que rige a nuestro país, donde se establece en su artículo 44° que son deberes primordiales del Estado:

“Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamente en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”.

Al garantizar la vigencia de los derechos humanos, implícitamente se consagra el interés superior del menor y su protección, los cuales deben ser resguardados por el Estado Peruano y garantizar el bienestar del niño y el adolescente.

También se regula la protección de los niños y adolescentes en situación de abandono en su artículo 4°:

“La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono”.

Dado que todo niño y adolescente tiene el derecho de crecer en un ambiente familiar adecuado donde se le brinde amor, cariño y protección, que le permita alcanzar un desarrollo integral.

A.2 Código del Niño y Adolescente Peruano.

El actual Código del Niño y del Adolescente reconoce en su artículo IX del Título Preliminar el interés superior del niño y del adolescente:

“En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el Principio de Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos”.

Los niños y adolescentes tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia, donde los padres deberán velar porque sus hijos reciban los cuidados necesarios para su adecuado desarrollo integral, los que carecieren de familia natural tiene el derecho a crecer en un ambiente familiar adecuado. Sin embargo, el niño o adolescente podrá ser separado de su familia sólo por circunstancias especiales definidas en la ley y con la exclusiva finalidad de protegerlos.

A.3 Ley Que Establece Parámetros y Garantías Procesales Para La Consideración Primordial Del Interés Superior del Niño.

La presente Ley, dispone que el interés superior del niño es un derecho, un principio y una norma de procedimiento que otorga al niño el derecho a que se considere de manera primordial su interés superior en todas las medidas que afecten directa o indirectamente a los niños y adolescentes, garantizando sus derechos humanos.

De la misma manera, el artículo 3 señala los parámetros a tomar en cuenta para la consideración primordial del Interés Superior del Niño, de conformidad con la Observación General 14:

1. El carácter universal, indivisible, interdependiente e interrelacionado de los derechos del niño.
2. El reconocimiento de los niños como titulares de derechos.
3. La naturaleza y el alcance globales de la Convención sobre los Derechos del Niño.
4. El respeto, la protección y la realización de todos los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
5. Los efectos a corto, mediano y largo plazo de las medidas relacionadas con el desarrollo del niño a lo largo del tiempo.

La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3 establece que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

Asimismo, la Observación General 14 del Comité de los Derechos del Niño sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, dispone que el objetivo del concepto del interés superior del niño es garantizar el disfrute efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño.

A.4 Decreto Legislativo para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Sin Cuidados Parentales o en Riesgo de Perderlos.

Esta norma fue dada en la Casa de Gobierno el 29 de diciembre de 2017, surge ante la necesidad de disminuir los factores que han incrementado la delincuencia, reconociendo que la familia es fundamental en la formación de los niños para su futura vida.

La presente Ley tiene por objeto brindar protección integral a las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos; priorizando su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia.

Al mismo tiempo, el Estado; la sociedad; la comunidad y la familia son los encargados de otorgar especial protección a la población de niños, niñas y adolescentes siendo la familia el espacio clave para garantizar la protección, la integridad física y psicológica, el acceso a la educación y recreación, sin embargo, actualmente las niñas; niños y adolescentes se ven parcial o totalmente privados de estos cuidados parentales lo que hace que se queden en un estado de riesgo o desprotección. Estos estados de riesgo y desprotección se deben a la falta de cuidados parentales en su entorno de familia de origen, es por ello que, el Estado para garantizar que estos deberes se cumplan y los niños puedan acceder a sus derechos, es que, se crea un plan de trabajo individual que atiende según el estado de necesidad en el que se encuentra el niño.

A.5 Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021.

Luego de la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados Partes se comprometieron a adecuar sus legislaciones nacionales referidas al niño y a su vez elaborar los Planes de Acción por la Infancia y Adolescencia.

El Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012- 2021, fue elaborado desde un enfoque de derechos, de género y diversidad cultural. Este documento es marco de los programas o estrategias que comprometen a los ciudadanos y autoridades del Perú a garantizar los derechos de los niños y adolescentes.

Menciona, que es un hecho preocupante la situación de institucionalización en que se encuentran los diferentes Centros de Atención Residencial (CAR) públicos y privados, dado que si bien es cierto son instituciones transitorias suelen convertirse en lugares permanente para muchos de los niños y adolescentes.

Es necesario que el Estado implemente políticas de reinserción familiar, refuerce las capacidades de los adolescentes que egresen de los CAR al cumplir la mayoría de edad. En ese sentido, la política del país para esta población se orienta a la implementación de estrategias dirigidas a proporcionales condiciones de vida familiar y relaciones sociales estables, que aseguren su calidad de vida y potencien su desarrollo humano.

Para que los niños sin cuidados parentales se integren a una familia este Plan propone diversas estrategias que deben implementarse:

- “Establecer mecanismos de reinserción familiar que permitan a niñas, niños y adolescentes sin cuidado parentales su integración a su familia.
- Desarrollar y establecer mecanismos que faciliten la integración familiar de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales.
- Modificar la Ley N° 26981 y su reglamento para contar con una nueva Ley del Sistema Nacional de Adopciones, que permita desarrollar el Programa sobre la base de enfoques, principios y garantías que aseguren en este servicio una atención a la niña y el niño como sujetos de derechos y bajo el mejor interés para ellas y ellos.
- Promover la agilización de los procedimientos que declaran el estado de abandono en el que se encuentra una niña, niño o adolescente, estableciendo coordinaciones con la instancia encargada de Investigación Tutelar del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud y otros.

- Priorizar la modernización y el funcionamiento adecuado de los Centros de Atención Residencial, considerando el desarrollo de sus capacidades y el pleno ejercicio de sus derechos de las niñas, niños y adolescentes, como las perspectivas más importantes.
- Brindar el apoyo necesario para que las familias que no cumplen con brindar el cuidado parental puedan ser fortalecidas.
- Implementar medidas para garantizar que en todos los procedimientos se considere la opinión de las niñas, niños y adolescentes”.

B. Legislación Internacional.

B.1 Convención sobre los Derechos del Niño.

Luego de la Segunda Guerra Mundial existe una preocupación por los Derechos Humanos en la regulación internacional, especialmente sobre los derechos de los niños y adolescentes, es así como se da la Convención de los Derechos del Niño, convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, en particular de los niños, debe recibir protección y asistencia necesaria para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la sociedad.

Reconociendo que el niño debe crecer en el seno de una familia, en un ambiente de amor y comprensión, debiendo estar preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado.

Se debe proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.

Aprobada en nuestro país mediante resolución legislativa N° 25728, la Convención de Derechos del Niño en su artículo 20° establece:

“Los niños que temporal o permanentemente se encuentren privados de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no permanezca en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencias especiales del Estado”.

B.2 Las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños de las Naciones Unidas.

Las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños de las Naciones Unidas, tienen por objeto promover la aplicación de la Convención con relación a la protección y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en peligro de ser privados del cuidado parental. En ese sentido, ha establecido algunos criterios de actuación frente a la situación de abandono o vulneración de derechos fundamentales de un niño, niña y/o adolescente.

Entre las más relevantes corresponde resaltar la obligación estatal, establecida en el párrafo 3°, que está vinculada a brindar a la familia el acceso a diversas formas de apoyo en su función cuidadora, toda vez que ésta constituye el medio natural para el crecimiento, bienestar y protección de los niños, niñas y adolescentes. Esto conlleva a que los esfuerzos de intervención busquen lograr la permanencia o regreso de las personas menores de edad a su familia nuclear o extensa.

C. Derecho Comparado. (ALDEAS INFANTILES, 2016)

C.1 España. (NOTICIAS JURIDICAS, 2015)

Se aprobó la Ley 26/2015, del 28 de julio, de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio.

Así, la Ley 26/2015, reforma las instituciones de protección a la infancia bajo el principio rector de prioridad a las medidas estables frente a las temporales, a las familiares frente a las residenciales y a las consensuadas frente a las impuestas. Entre otras medidas, se definen a nivel estatal las situaciones de riesgo y desamparo, se simplifica la constitución del acogimiento familiar, de forma que no será preceptiva la intervención de un juez y se establece la obligación de la Administración de preparar para la vida independiente a los jóvenes ex tutelados. (NOTICIAS JURIDICAS, 2015)

Asimismo, la Ley Orgánica 8/2015, en su contenido más relevante tiene que, se da al concepto de interés superior del niño un contenido triple: como derecho sustantivo, como principio general de carácter interpretativo y como norma de procedimiento. Se parte de que, sin perjuicio de los establecidos en la legislación específica aplicable, así como de aquellos otros que puedan estimarse adecuados atendiendo a las circunstancias concretas del supuesto "A efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del menor, se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales":

- La satisfacción de las necesidades básicas del menor,
- La consideración de sus deseos, sentimientos y opiniones, o
- La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia.

Estos criterios habrán de ponderarse en función de determinados elementos generales, como:

- La edad y madurez del menor,
- La necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación por su especial vulnerabilidad, o
- La necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten.

Se hace referencia a la necesidad de respetar las garantías procesales, en particular: los derechos del menor a ser informado, oído y escuchado; la intervención en el proceso de profesionales cualificados o expertos o la adopción de una decisión que incluya en su motivación los criterios utilizados.

De la misma forma, se regulan los ingresos, actuaciones e intervenciones en centros de protección específicos de menores con problemas de conducta. Estos centros están destinados al acogimiento residencial de menores que estén en situación de guarda o tutela de la Entidad Pública, diagnosticados con problemas especiales de conducta.

Estos centros tienen en cuenta las especiales características, complejidad, condiciones y necesidades de estos menores, previéndose como último recurso, la utilización de medidas de seguridad y de restricción de libertades o derechos fundamentales.

Por ello, es necesaria una normativa en la que se determinen los límites de la intervención, regulándose, entre otras cuestiones, las medidas de seguridad como la contención, el aislamiento o los registros personales y materiales, la administración de medicamentos, el régimen de visitas, los permisos de salida o sus comunicaciones.

El ingreso en estos centros requiere autorización judicial, que puedes ser solicitada por la Entidad Pública que ostente la tutela o guarda del menor, o por el Ministerio Fiscal.

Las medidas de seguridad aplicadas han de ser el último recurso, y tendrán siempre carácter educativo.

C.2 México.

El 4 de diciembre de 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (*DOF*) el decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como su Reglamento el 2 de diciembre de 2015, y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, la cual regula los Centros de Atención para niños y niñas.

Así, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su Título cuarto, denominado “De la protección de niñas, niños y adolescentes” regula los Centros de Asistencia Social. Cuando los menores han sido privados de cuidado parental o familiar, son canalizados a centros de asistencia social, donde permanecen hasta que su situación legal sea definida. Mientras están bajo el cuidado de estas instituciones, la ley busca garantizar el cumplimiento de sus derechos estableciendo lineamientos generales de operación de estos centros y determinando autoridades competentes para labores de supervisión. Los centros de asistencia social donde se protege a los menores son regulados en el título cuarto en un capítulo único, que consta de siete artículos (107-113).

De la misma forma, su Reglamento en el Título Quinto, relativo a la “Protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes”, contiene un capítulo único, referente a las acciones de protección de niñas, niños y adolescentes; que a su vez consta de únicamente tres artículos (45 al 47). También en su Título sexto “De las medidas de protección”, dividido en cinco capítulos, que abarcan los artículos 48 al 70, referidos a las medidas de protección especial, a las medidas urgentes, al acogimiento residencial, de los centros de asistencia social y de las familias de acogida.

C.3 Colombia.

Cuenta con un Código de la Infancia y Adolescencia (Ley n. ° 1.098 de 2006) señalando lo siguiente:

“Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. (Art. 1)

(...) tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. (Art.2)

Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes. (Art. 8)

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener y crecer en el seno de la familia, a ser acogidos y no ser expulsados de ella. Los niños, las niñas y los adolescentes sólo podrán ser

separados de la familia cuando esta no garantice las condiciones para la realización y el ejercicio de sus derechos conforme a lo previsto en este código. (Art. 22)

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que sus padres en forma permanente y solidaria asuman directa y oportunamente su custodia para su desarrollo integral. La obligación de cuidado personal se extiende además a quienes convivan con ellos en los ámbitos familiar, social o institucional, o a sus representantes legales. (Art. 23)”

Además, Colombia no cuenta en su marco normativo con una legislación explícita específica sobre niños, niñas y adolescentes separados del cuidado familiar.

La legislación solamente hace mención a la garantía que debe dar el Estado a los niños, niñas y adolescentes para ejercer su derecho a la familia, indicando que deben reintegrarse a sus familias de origen, ser ubicados en la familia extensa o ser adoptados, pero no contempla alternativas para los niños que no disponen de ninguna de estas opciones, que son los que permanecen a más largo plazo en las instituciones de protección. Existen lineamientos administrativos establecidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) sobre entidades de protección y/o diferentes modalidades de atención reguladas en el país.

C.4 Paraguay.

Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N° 1.680/01):

“(…) Establece y regula los derechos, garantías y deberes del niño y del adolescente, conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, los instrumentos internacionales sobre la protección de los derechos humanos aprobados y ratificados por el Paraguay, y las leyes. (Art.1)

Toda medida que se adopte respecto al niño o adolescente, estará fundada en su interés superior. Para determinar el interés superior o prevaleciente se respetarán sus vínculos familiares (...) (Art.3)

El niño o adolescente tiene derecho a vivir y desarrollarse en su familia, y en caso de falta o insuficiencia de recursos materiales de sus familiares, el derecho a que el Estado los provea. Queda prohibido separar al niño o adolescente de su grupo familiar, o disponer la suspensión o pérdida de la patria potestad invocando la falta o insuficiencia de recursos. (Art. 8)”

Al mismo tiempo, Paraguay cuenta con el Reglamento para la Habilitación y Funcionamiento de Hogares de Abrigo del año 2006, creado en el marco de la implementación de políticas públicas en la atención integral de los niños, niñas y adolescentes.

C.5 Chile.

Ley de Menores (1967)

La legislación actual data de 1967, su denominación sigue siendo Código de Menores, tal como lo fue en las legislaciones de otros países antes de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. No se identifica en su estructura un contenido dogmático, sino que más bien se centra en lo organizacional y procesal. Existen varias leyes sectoriales que

protegen algunos de los derechos, como salud, educación, prevención del trabajo infantil y prevención de la violencia.

En aquellos casos en que aparezcan gravemente vulnerados o amenazados los derechos de un menor de edad, Carabineros de Chile deberá conducirlo al hogar de sus padres o cuidadores, en su caso, y entregarlo a ellos, informándoles de los hechos que motivaron la actuación policial.

“Si, para cautelar la integridad física o psíquica del menor, fuere indispensable separarlo de su medio familiar o de las personas que lo tuvieran bajo su cuidado, Carabineros de Chile lo conducirá a un Centro de Tránsito y Distribución e informará de los hechos a primera audiencia al juez de menores respectivo. (Art. 16 bis, primer y segundo párrafo).

En los casos previstos (...) el juez de letras de menores, (...) podrá decretar las medidas que sean necesarias para proteger a los menores de edad gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos. (Art. 3)”.

Por otra parte, Chile no cuenta con una ley de protección integral de derechos de los niños, niñas y adolescentes, en la que se reconozcan los derechos fundamentales y los mecanismos efectivos para ejercerlos, protegerlos y promoverlos, a pesar de los dos proyectos de ley que se habían presentado a 2013.

2.4.2 La Familia y la Desprotección Familiar.

2.4.2.1 Familia.

Sobre el tema para Benjamín Aguilar, la familia no es solo la base de toda sociedad, sino que es LA SOCIEDAD misma. (AGUILAR LLANOS, s.f., pág. 171)

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, que como constitucionalmente se establece, requiere de protección al igual que sus integrantes; esto en atención y provecho de los individuos que la conforman, cumpliendo así con la función social que le corresponde.

Es decir que el interés familiar debe entenderse como el medio de protección de los intereses y derechos de los miembros del núcleo familiar, sobre la base de que se cumplan con los fines familiares, que son: la asistencia mutua, la solidaridad, la convivencia, la subsistencia, la reproducción. (VEGAS CASTILLO, 2018)

La familia entonces constituye el factor primordial de la vida social y de la vida política, así lo expresa Jaserán, para quien la familia “es un elemento indispensable de cohesión y equilibrio social. La historia señala que los pueblos más fuertes han sido siempre aquellos en que la familia estaba más fuertemente constituida, y denuncia también el relajamiento de los vínculos familiares durante los períodos de decadencia. Es en la célula familiar donde ordinariamente se manifiestan.

A. Concepto de Familia.

Etimológicamente familia proviene de la voz latina familia, la cual deriva de *famulus* que a su vez procede *osco famel*, que significa siervo y, más remotamente, del sanscrito *vama*, hogar o habitación, significado, por consiguiente, el conjunto de personas y esclavos que moraban con el señor de la casa. La familia es la agrupación humana histórica y jurídicamente de más profundo arraigo en nuestra civilización, ha sido conceptualizada en distintos sentidos, por muchas disciplinas y con diversos alcances Héctor Cornejo Chávez (1985) propone dos acepciones:

- a) En sentido amplio: conjunto de personas unidas por vínculos del matrimonio, del parentesco o la afinidad. Juzga que tal criterio tiene una

importancia reducida, pues «el círculo puede ser vasto y porque ignora la situación de los convivientes».

b) En sentido restringido; acepción dividida a la vez en:

- Familia nuclear: personas unidas por el matrimonio o la filiación (marido y mujer, padres e hijos, generalmente los menores o incapaces). Por extensión, se incluye a los concubinos y sus hijos menores o incapaces.
- Familia extendida: integrada por la anterior y uno o más parientes.
- Familia compuesta: la nuclear o la extendida más una o más personas que no tienen parentesco con el jefe de familia. (RAMOS NÚÑEZ, s.f., págs. 99-100)

Para Eduardo A. Zannoni dice que: “La familia es el conjunto de personas entre las cuales existen vínculos jurídicos, interdependientes y recíprocos, emergentes de la unión sexual y la procreación”. (VEGAS CASTILLO, 2018)

Asimismo, Jorge Adolfo Mazzinghi: “Familia es una institución basada en la naturaleza, y entendida como el sistema de normas que tienen el fin de asegurar la existencia y el desarrollo de la comunidad de personas vinculadas por el matrimonio y la filiación en orden a procurar a todos sus miembros el logro de su destino personal, terreno y trascendente”. (VEGAS CASTILLO, 2018)

Al respecto, Belluscio (2004) no es posible sentar un concepto preciso de familia, en razón de que se trata de una palabra a la cual pueden asignarse diversas significaciones; una amplia, otra restringida, y aún otra más; intermedia.

- a. La familia en sentido amplio (como parentesco). - en el sentido amplio es el conjunto de personas con las cuales existen algún vínculo jurídico de orden familiar. Comprendería, según Fassi, “al conjunto ascendientes, descendientes, y colaterales, de un linaje”, incluyendo a los ascendientes, descendientes y colaterales del cónyuge que reciben la denominación de “parientes por afinidad”; a esa enunciación habría que agregar al propio cónyuge, que no es pariente. Desde el punto de vista, cada individuo es el centro de una familia, diferente según a la persona a la que se refiera. Así, Zannoni la considera desde el punto de vista jurídico como “el conjunto de personas entre las cuales existen vínculos jurídicos independientes y recíprocos, emergentes de la unión sexual y la procreación.
- b. Familia en sentido restringido (pequeña familia, familia conyugal, parentesco inmediato o núcleo paterno – filial), en el sentido más restringido, la familia comprende sólo el núcleo paterno-filial – denominado también “familia conyugal” o “pequeña familia”, es decir, la agrupación formada por el padre, la madre y los hijos que viven con ellos o que están bajo su potestad.
- c. La familia en sentido intermedio (como un orden jurídico autónomo).- en el concepto intermedio, la familia es el grupo social integrado por las gentes que viven en una casa, bajo la autoridad del señor de ella. (VEGAS CASTILLO, 2018)

La familia es una institución social que se convierte en jurídica al ser objeto de regulación por el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico toma en consideración esa realidad social y la institucionaliza, la dota de un conjunto de reglas o de normas que ordenan esas relaciones. (COBAS COBIELLA, 2015)

Desde el punto de vista social, la familia suele definirse como la institución formada por personas unidas por vínculos de sangre y los relacionados con ellos en virtud de interés económicos, religiosos o de ayuda. Si consideramos las tendencias actuales, ampliaremos

el concepto, ya que dichas uniones no solo se dan por vínculos de sangre, sino también por vínculos de simple solidaridad. (INTRODUCCION AL DERECHO DE FAMILIA, pág. 22)

La familia puede ser definida desde el punto de vista jurídico, en un sentido estricto, como: el grupo formado por la pareja, sus ascendientes y sus descendientes, así como por otras personas unidas a ellos por vínculos de sangre, matrimonio, concubinato o civiles, a los que el ordenamiento positivo impone deberes y obligaciones. (INTRODUCCION AL DERECHO DE FAMILIA, pág. 22)

Según expone Claude Levi-Strauss, la familia encuentra su origen en el matrimonio, consta de esposo, esposa e hijos nacidos de su unión y sus miembros se mantienen unidos por lazos legales, económicos y religiosos. (LA FAMILIA, s.f.)

Para la sociología, una familia es un conjunto de personas unidas por lazos de parentesco. Los lazos principales son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. (LA FAMILIA, s.f.)

B. Clases de Familia.

B.1 Familia Nuclear.

El término fue desarrollado en el mundo occidental para designar el grupo de parientes conformado por los progenitores, usualmente padre, madre y sus hijos.

B.2 Familia Extensa.

También llamada familia compleja, está conformada por abuelos, los padres, los hijos, los tíos y los primos. Los miembros de la familia extensa están en contacto permanente, pueden vivir varias generaciones en la misma casa o predio. Se relacionan o interactúan en una red social de apoyo, sobre la base de la ayuda mutua.

B.3 Familia Monoparental.

Es aquella que se integra por uno solo de los progenitores, la madre o el padre y los hijos. En esta, los hijos pierden el contacto con uno de los padres, ya sea prolongada o definitivamente. (INTRODUCCION AL DERECHO DE FAMILIA)

B.4 Familia Ensamblada.

Es aquellas familias integradas por familias reconstruidas, por dos familias monoparentales, por miembros de núcleos familiares previos, que al separarse se unen nuevamente, de hecho, o de derecho, con nuevas personas o grupos familiares formando el ensamble o una nueva estructura familiar, sin que él obste para que subsista.

A todo ello para Mejía Rosasco (2009) la familia es el primer instrumento de socialización. En ella se consigue lograr aspiraciones, perpetuar la especie, extender tradiciones, educar todo ello gracias al afecto. La familia es la base emocional de la persona a través de la cual alimenta su espíritu e individualidad. Es un perfecto organismo sociopolítico en el que se inculca valores civiles, se enseña y educa a las personas logrando que se vincule con la sociedad para desarrollarse en las diferentes actividades productivas. Es la primera escuela, el primer centro de labores. Allí donde una aprende a acatar las órdenes, respetar las jerarquías, obediencia a las reglas. Sus individuos deben corresponder a compromisos, acatar normas y asimilar su calidad de ciudadanos. (VARSI ROSPIGLIOSI, 2011)

C. El Derecho de Familia.

C.1 Definición.

Como resalta Ramos Pazos (2000), como toda rama del Derecho, puede ser definido en sentido objetivo o subjetivo. En sentido objetivo, para aludir al conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas de familia. Se trata entonces del Derecho de Familia. En sentido subjetivo, para referirse a las facultades o poderes que nacen de aquellas relaciones existentes entre los miembros de la familia. Se trata en este caso de los “derechos de familia”. (ORREGO ACUÑA, s.f., pág. 18)

Se entiende por Derecho de Familia, según Ferrara, “el complejo de las normas jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los pertenecientes a la familia entre sí y respecto de terceros”. (ORREGO ACUÑA, s.f.)

C.2 Concepto.

El derecho de familia parte de la existencia de la misma y trata de descubrir sus relaciones y fines. El derecho no crea a la familia solamente la reconoce y disciplina.

Resulta preciso citar a Montero Duhalt Sara, el Derecho de Familia es: “El conjunto de normas jurídicas de derecho privado y de interés público que regulan la constitución, la organización y disolución de las relaciones familiares”.

También, Ferrara “El derecho de familia es el complejo de las normas jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los pertenecientes a la familia entre sí y respecto a terceros”. (LOPEZ DÍAZ, 2005)

Del mismo modo, Belluscio “El derecho de familia es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones familiares”. (BELLUSCIO, 2004)

Es por lo que “El Derecho de Familia se ha visto inmerso en un proceso de actualización y adecuación, con el objetivo de atender las nuevas necesidades de la realidad peruana, debido a las nuevas situaciones familiares, sociales, económicas, culturales y legales. Por lo que su dinámica, estructura y composición se han adaptado a los numerosos cambios sociales, económicos y geográficos; pero sus funciones siguen siendo de impacto en la sociedad”. (CELIS ESPARZA, 2016, pág. 287)

2.4.2.2 Desprotección Familiar. (CAHUA GALLEGOS, 2017)

Una de las formas de desprotección que históricamente se ha estudiado y conceptualizado más es el maltrato, si bien este puede ser de diversa índole como veremos más adelante. En la década de 1960 se dio “un impulso final para el conocimiento de esta enfermedad (haciendo alusión al maltrato)”. Benllinzona recoge que dicho impulso se dio gracias al “simposio interdisciplinario de la Academia Americana de Pediatría organizado por Henry Kempe en 1961”. Sin embargo, como afirma el profesor Gracia (1994), “el trabajo de Kempe no descubría los malos tratos”. Si profundizamos en la historia del maltrato infantil, podemos observar afirmaciones desde la época clásica que pueden tener vinculación con el maltrato. La doctora De Bonis recuerda cómo Aristóteles llegó a afirmar que “un hijo o un esclavo son propiedad”. Incluso en la Biblia se alude a la “la matanza de los inocentes” llevada a cabo por Herodes.

También nos recuerdan De Bonis (1998), y Gracia (1994), cómo en diferentes épocas los niños, especialmente aquellos con defecto físico o psíquico, eran despreciados, humillados y asesinados. Sin embargo, ya en el pasado hubo iniciativas para impedir el maltrato infantil, como leyes promulgadas por los emperadores César Augusto, o Tiberio. Incluso la Biblia y el Corán son ejemplo de lucha contra el infanticidio. Sin embargo, es el siglo XX cuando verdaderamente se hace un estudio intensivo, y los estados comienzan a considerar el maltrato y cualquier otro tipo de desatención una lacra de amenaza a la sociedad que debe ser erradicada, siendo reflejada en las legislaciones que los países democráticos han ido elaborando, donde se

protege los derechos del niño y se hace hincapié en la necesidad de luchar para dar seguridad a la indefensión que caracteriza al menor.

A. Definición de Protección Familiar.

La protección familiar, tiene su sustento en los principios universales de los derechos humanos: la dignidad, la equidad y la justicia social.

Se complementa con los principios particulares de igualdad y no discriminación, efectividad y prioridad absoluta, interés superior del niño, autonomía progresiva y participación solidaria. Este último principio enfatiza la necesaria participación conjunta del Estado, la comunidad y la familia para el pleno ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Si bien no existe una definición exacta de lo que es protección familiar, conforme a lo antes mencionado podemos definirla: “Como el cuidado preventivo físico o simbólico que los padres deben de tener para con sus hijos ante un eventual riesgo o problema”.

B. Función de la Familia.

Acerca del tema Benjamín (2010) indica, la familia como instituto natural y fundamental de la sociedad tiene como funciones la atención de las necesidades, cuidado, protección, formación, y promoción del desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes ya que es la principal responsable de asegurar su desarrollo personal y el ejercicio efectivo de sus derechos, la responsabilidad parental o la patria potestad es la más importante y trascendente institución del Derecho de Familia, integrada básicamente por padres e hijos, en donde descansan principios que llevan implícitos derechos y deberes.

Según un estudio de Dughi (1989), no importando en qué contexto histórico social se encuentre la familia, esta debe cumplir cuatro deberes esenciales:

1. Asegurar la satisfacción de las necesidades biológicas del niño y complementar sus inmaduras capacidades de un modo apropiado en cada fase de su desarrollo evolutivo.
2. Enmarcar, dirigir y canalizar los impulsos del niño con miras a que llegue a ser un individuo integrado, maduro y estable.
3. Enseñarle las funciones básicas, así como el valor de las instituciones sociales y los modos de comportarse propios de la sociedad en que vive, constituyéndose en el sistema social primario.
4. Transmitirle las técnicas de adaptación de la cultura, incluido el lenguaje.

C. Definiciones Doctrinarias sobre Desprotección Familiar. (QUIRI y PEREZ, 2018)

La familia como elemento natural de la sociedad, representa el núcleo central de amparo y protección de los derechos fundamentales, los cuales deben ser satisfechos en un contexto de convivencia familiar, ya que el hombre al ser un ser eminentemente político encuentra en el seno de la familia el primer grupo social en el cual crece, se desarrolla y ve satisfechas sus necesidades más importantes como son protección, cariño, asistencia, entre otras.

Por lo que, ante el incumplimiento de este conjunto de obligaciones y deberes emergentes de las relaciones paterno filiales y parentales, siendo en muchos casos los padres de familia son los vulneradores de los principales derechos de los hijos, lo cual conlleva a un estado de desprotección familiar, por lo que, en el marco del Decreto Legislativo N° 1297 la desprotección familiar representa una causa muy importante del origen e incremento de la delincuencia juvenil y por ende de la inseguridad ciudadana.

A continuación, ciertos autores ofrecen su concepto propio sobre el significado de la desprotección familiar.

Como lo señala Félix López, se define una situación como desprotección infantil cuando la insatisfacción de las necesidades básicas del niño genera un daño o riesgo que dificulta o impide su desarrollo integral. De Paúl (1996), a la hora de utilizar operativamente esta definición ante un caso concreto, es conveniente manejar simultáneamente tres criterios:

1. Perspectiva evolutiva. - Un mismo comportamiento parental o la insatisfacción de una necesidad básica puede ser dañino para un niño en determinado momento evolutivo (por ejemplo, dejar solo a un niño de tres meses) y no serlo tanto e incluso ser adecuado en otros períodos evolutivos. La conceptualización de una situación concreta como desprotección infantil se debe establecer en función de la edad del niño.
2. Presencia de factores de vulnerabilidad del niño. - Una misma situación puede no ser dañina para un niño sano, mientras que, para otro niño con enfermedades crónicas severas, con retraso psíquico, etc., puede ser considerada de desprotección.
3. Existencia de daño real o de daño potencial. - Además de los daños detectables, es necesario establecer una predicción sobre el daño potencial que puede sufrir un niño en el futuro, derivado de una determinada situación de desprotección. (DESPROTECCION INFANTIL, 2008)

Asimismo, (ÁLVAREZ OLAZÁBAL, 2017) señala, situación que se produce de hecho a causa de la inobservancia o del imposible o contraproducente desempeño de los deberes de cuidado a NNAS, y que afecta gravemente su desarrollo integral.

Al mismo tiempo, (SOKOLICH ALVA, 2017) indica que, la desprotección familiar en el marco del decreto legislativo es uno de los motivos de origen de la delincuencia juvenil, lo cual desencadena en la imperiosa necesidad de prevenirla y combatirla mediante, los sistemas de protección integral, ello en aplicación del artículo 4 de nuestra Constitución Política vigente, a través de políticas públicas.

De igual manera, Castro (2017) expresa que, como principal origen de que miles de menores se hallen en inminente abandono o situación de riesgo, la cual tiene se inicia del incumplimiento reiterado de las obligaciones de los padres, satisfaciendo la principal necesidad como es la de vivir en el seno de una familia.

Además, Vargas (2017) opina que, la desprotección familiar es el motivo de que muchos menores se encuentren en estado de abandono o en situación de riesgo, impidiendo de esta manera tener acceso al derecho de gozar de una familia que cumpla a plenitud los deberes emergentes de los lazos familiares y de la patria potestad, ya que muchas veces los mismos padres son los principales vulneradores de sus derechos fundamentales.

Conforme a lo precedentemente referido para Villaverde (2006), la desprotección familiar es una situación de peligro real o potencial de carácter material o moral, en la que puede encontrarse un menor a consecuencia de un ejercicio abusivo o deficiente de la patria potestad, configurando, en ese sentido la omisión de los deberes de crianza, alimentación, educación y cuidado que tienen los padres, lo cual implica un desprenderse, o no preocuparse por ellos. (CAHUA GALLEGOS, 2017)

D. Evolución Histórica de la Desprotección Familiar. (FARIÑA,F. et al, págs. 105-106)

Nos remontamos a la Antigua Roma o la Grecia Clásica, en estas civilizaciones los hijos eran concebidos como posesiones absolutas de sus padres, careciendo de todo tipo de derechos e incluso del más fundamental: el derecho a la vida. Hasta tal extremo que el padre tenía libertad de reconocer a su hijo o en caso contrario abandonarlo a la suerte de la calle, venderlo, matarlo, ofrecerlo a los dioses o regalarlo. Además, en la literatura, nos encontramos sobrados ejemplos de cómo tradicionalmente se han visto especialmente amenazados los niños que nacían con características físicas no aceptadas (disminuidos físicos o psíquicos y otras deficiencias) o bajo circunstancias socialmente inapropiadas (madres solteras, gemelos). (NOVO, M. et al, 2002, pág. 4)

El inicio de la Protección de Menores se puede establecer en la mitad del siglo XIX, con dos acontecimientos importantes. El primero, tiene lugar en 1860 en Francia, cuando Pardiou describe en una de sus obras 32 casos de maltrato físico a niños, perpetrados por sus familias. El segundo, se produce en Estados Unidos, y es conocido como el caso de Mary Ellen Wilson; se trata de una menor víctima de un severo maltrato físico por parte de sus padres. Las circunstancias de esta menor fueron denunciadas sin éxito ante la policía, el abogado del distrito y ante diversas agencias protectoras.

Al no existir, en aquel entonces, ninguna ley que amparara los derechos de los niños, no se pudieron iniciar acciones legales. Finalmente, el caso pudo llevarse ante los tribunales, a través de la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, bajo el razonamiento de que, si los animales estaban legalmente protegidos y Mary Ellen, como humana, pertenecía al reino animal, los casos se podían equiparar. De una manera tan sorprendente, en 1874, se ganaba en Estados Unidos el primer caso de maltrato infantil. En el mismo año, y como consecuencia de este hecho, se crea en Nueva York (National Center on Children Abuse and Neglect-NCCAN) el Centro Nacional de Abuso y Negligencia de Niños. Pocos años después se constituye en Londres (National Society for the Prevention of Cruelty to Children-NSPCC) las Sociedades de Prevención de la Crueldad y Negligencia hacia los Niños. Tras estos eventos transcurre un largo período estéril, que abarca desde finales S. XIX hasta mediados del XX, en el cual los menores de las clases más desfavorecidas, eran impunemente sometidos a explotación laboral. En 1959, se abre una nueva etapa, la Organización de Naciones Unidas aprueba la "Declaración de los Derechos del Niño".

A partir de los años 60 la sociedad se sensibiliza por la infancia, y el tema de los malos tratos a niños comienza a despertar interés en todos los ámbitos, provocando colateralmente una evolución o desarrollo del propio concepto. Kempe y Cols (1962) acuñan el término de "Battered-Child Syndrome" o síndrome del niño golpeado o apaleado, definiéndolo como un cuadro clínico que se manifiesta en niños pequeños que han recibido malos tratos severos, los cuales pueden causarles lesiones permanentes e incluso provocarles la muerte. Estos autores afirman que el síndrome debe ser considerado en cualquier niño que muestre fracturas, hematoma subdural, hinchazón en tejidos blandos, contusiones, trastornos de crecimiento, malnutrición, higiene deficiente, y en cualquier caso en el que el menor fallezca repentinamente, o cuando existen diferencias entre hallazgos clínicos y los datos aportados por los padres. Dos años más tarde, Fontana (1964) introduce el término de "niño maltratado", donde además de los malos tratos físicos propuestos por Kempe, se consideran las situaciones de negligencia y privación emocional. Comienza así a tenerse en cuenta la violencia de tipo emocional.

Ya en la década de los ochenta, el Centro Nacional de Abuso y Negligencia de Niños (National Center on Child Abuse and Neglect- NCCAN), concretamente en 1981, define el niño maltratado como aquel cuyo bienestar físico o mental resulta dañado o bien exista la amenaza de que lo sea, debido a acciones u omisiones de sus padres u otra persona responsable de su cuidado; estableciendo diferentes formas de maltrato: abuso físico, abuso sexual, abuso emocional, negligencia física, negligencia educativa y negligencia afectiva. Por su parte, el Parlamento Europeo, en 1985, entiende los malos tratos infligidos a niños como toda violencia, no accidental, contra la integridad física y/o psíquica del niño, o la privación de cuidados, por parte de sus padres o cuidadores, que conlleve perjuicio hacia el niño: herirle, dificultar su desarrollo, o inducido a la muerte.

E. Factores de Riesgo de Desprotección Familiar. (MANUAL CANTABRIA, 2010)

No hay una causa única de la desprotección familiar. Tampoco hay un patrón típico de familia maltratante o negligente. La desprotección infantil se produce en todos los grupos sociales, económicos, religiosos, culturales y étnicos.

Las investigaciones que se han llevado a cabo han identificado una serie de factores o circunstancias, denominados factores de riesgo, que aparecen frecuentemente en las familias que presentan este tipo de problemas. Los niños, niñas y adolescentes que viven en familias y entornos que presentan estas características se encuentran en mayor riesgo de sufrir desprotección.

Sin embargo, es importante destacar que, si bien estos factores de riesgo se encuentran presentes en muchas familias maltratantes y negligentes, su presencia no significa que siempre y necesariamente se va a producir la desprotección.

Así, se ha intentado identificar las causas que determinan el maltrato infantil, siempre con el objetivo de erradicar este problema social, causas que se pueden englobar en tres grandes grupos:

- a) El primero que se planteó a este respecto, se centraba en los trastornos psiquiátricos o psicológicos de los padres (Helfer y Kempe, 1968; Gelles, 1973). Desde esta perspectiva, se asume que los progenitores que maltratan, frecuentemente se encuentran insatisfechos, pierden el control con facilidad, son muy irritables, propensos a presentar ataques de cólera, y muchos de ellos han sufrido privaciones o situaciones de maltrato (López, 1995).
- b) El segundo, considera como desencadenantes de maltrato, los factores sociales, económicos y culturales. Entre los defensores de esta hipótesis se encuentran Pelton (1978), Garbarino y Shernman (1980) y Garbarino y Kostelny (1992) quienes asumen que para explicar este fenómeno es necesario atender al contexto familiar general y a las situaciones concretas en que se produce, destacando, por su importancia, los factores estresantes que se detectan en la familia, las habilidades educativas, y el estilo de vida familiar.
- c) El tercero, y con seguridad el más acertado, busca la explicación al maltrato desde una perspectiva interaccionista, en la que se conjugan las características de los padres, de los hijos y del macro y microcontexto de la interacción (López, 1995). (FARIÑA, F. et al, pág. 115)

De esta forma, una serie de variables se han mostrado, de manera significativa, relacionadas con el maltrato en la mayoría de las investigaciones, las cuales se pueden clasificar respetando la clásica tríada propuesta por Helfer y Kempe (1968) en: características de los maltratantes, características de los maltratados, y variables contextuales.

1. Características de los maltratantes.

- a) Características de personalidad y bienestar psicológico de los padres y madres. - La mayoría de los padres y madres que maltratan o son negligentes no padecen trastornos psicopatológicos graves, aunque presentan problemas emocionales y síntomas de malestar psicológico. Entre ellos podemos encontrar:
 - Baja autoestima, inmadurez, sentimientos de inutilidad, apatía, inseguridad emocional, introversión.
 - Locus de control externo (es decir, la creencia de que las cosas están determinadas por el azar o por factores fuera de su control).
 - Escaso control de sus impulsos.

- Depresión.
- Altos niveles de ansiedad.
- Escasa tolerancia a la frustración.
- Insatisfacción profesional.
- Falta de habilidades para la crianza.
- Trastornos emocionales, mentales y /o físicos.
- Historia de conductas violentas, antisociales o delictivas.

(MANUAL CANTABRIA, 2010)

- b) Historia de desprotección en su infancia. - En esta dirección, aunque se observan resultados contradictorios, existen numerosos estudios que apoyan la transmisión intergeneracional del maltrato. Así, por ejemplo, señalamos las investigaciones llevadas a cabo por Wolfe (1985) o Crivillé (1990), que identifican esta variable como factor de riesgo. (NOVO, M. et al, 2002) La historia personal influye de manera importante en la forma en que una persona se comporta con sus hijos e hijas. Los padres y madres que han sufrido situaciones de desprotección, no han tenido modelos parentales adecuados o no han visto satisfechas sus necesidades básicas en la infancia, pueden tener dificultades para atender y satisfacer adecuadamente las necesidades de sus propios hijos e hijas.

Sin embargo, no debe interpretarse que ser objeto de maltrato o negligencia en la infancia conduce inexorablemente a repetir el ciclo. Hay padres y madres maltratantes que no han sido objeto de maltrato en su infancia, así como niños y niñas maltratados que no se convierten en maltratadores. (MANUAL CANTABRIA, 2010)

- c) Problemas relacionados con el abuso de sustancias (y conductas) adictivas.- La presencia de alteraciones psicológicas o psiquiátricas, alcoholismo o toxicomanías, trastornos psicóticos también ha sido señalada como una variable que correlaciona con estas situaciones en diferentes estudios (Kaplan y otros, 1983; Famularo y otros, 1992; Gracia y Musitu, 1993). (NOVO, M. et al, 2002)

En un porcentaje importante de los casos de desprotección infantil, una o ambas figuras parentales presentan problemas relacionados con el consumo de alcohol o drogas o con conductas relacionadas con el juego patológico.

Las conductas adictivas interfieren de manera importante en el funcionamiento mental de las personas afectadas por estos problemas. La capacidad de juicio, las inhibiciones o la capacidad de una persona para proteger a un niño o niña se pueden ver profundamente alteradas, pudiendo poner en peligro al niño, niña o adolescente. (MANUAL CANTABRIA, 2010)

- d) Actitudes y conocimientos.- La carencia de habilidades y conocimientos, por parte de los padres/cuidadores, para cuidar de los hijos de manera adecuada, satisfaciendo sus necesidades y favoreciendo un adecuado desarrollo evolutivo (Herrenkohl y otros, 1983; Johnson y Showers, 1985). (NOVO, M. et al, 2002)

La mayoría de los padres y madres que maltratan o son negligentes tienen una serie de actitudes y atribuciones negativas en relación al comportamiento de sus hijos e hijas por lo que son incapaces de responder adecuadamente a las demandas que estos y estas realizan.

Junto a esta falta de conocimientos podemos encontrar otros factores como:

- Expectativas no realistas.
- Valores y actitudes negativas hacia la infancia, la mujer y la paternidad/maternidad.

- Desconocimiento de las necesidades físicas, evolutivas, psicológicas, de los niños, niñas y adolescentes.
 - Estilos de disciplina excesivos, laxos o punitivos.
 - Identificación del castigo físico con la norma de educación.
 - Fanatismo fundamentalista, sectarismo con filosofías morales extremistas.
 - Frustración ante la incapacidad de controlar y manejar la conducta de su hijo o hija. (MANUAL CANTABRIA, 2010)
- e) Relación figuras parentales - niño/a. - Una característica común a la gran mayoría de los padres y madres maltratantes y negligentes es que raramente reconocen o refuerzan las conductas positivas de sus hijos e hijas, mientras que prestan mucha atención a las conductas negativas. Suelen proporcionar menos apoyo y afecto a sus hijos e hijas, interaccionan menos y ofrecen un menor nivel de respuesta a sus necesidades.
- Junto a esta característica que condiciona la relación, existen algunas circunstancias que pueden dar lugar a la aparición de factores de riesgo como son:
- Separación de la madre y del niño o la niña después del nacimiento por complicaciones en torno al parto.
 - Hospitalización precoz prolongada.
 - Historia reciente de muerte de otro hermano o hermana o de un familiar significativo. (MANUAL CANTABRIA, 2010)

2. Características de los maltratados.

- a) Edad. - Los niños y niñas cuantos más pequeños sean más vulnerables serán a cualquier tipo de maltrato. El hecho de encontrarse en una situación en la que necesitan atención y cuidado casi constantes les coloca en un riesgo mayor de ser objeto de desprotección. (MANUAL CANTABRIA, 2010)
- b) Necesidades especiales. - Que sean niños enfermizos y con discapacidades físicas o mentales, que constantemente requieran de cuidados médicos y de una atención continuada, parece que son especialmente vulnerables (Frodi, 1981; Sherrod y cols, 1984). (NOVO, M. et al, 2002)
- En términos generales, los niños, niñas y adolescentes que son percibidos por sus familias como “diferentes”, por tener alguna discapacidad, alteración en el desarrollo, enfermedad crónica o presentar necesidades especiales pueden estar en mayor riesgo de sufrir maltrato o negligencia.
- La explicación de ello puede encontrarse en:
- La falta de adecuación a las expectativas de sus padres y madres.
 - El esfuerzo adicional que requieren para su cuidado.
 - Las actitudes sociales que desvalorizan a estos niños, niñas y adolescentes.
 - Las dificultades que tienen algunos de estos niños, niñas y adolescentes para defenderse del maltrato. (MANUAL CANTABRIA, 2010)
- c) Problemas de comportamiento. - La presencia de un temperamento difícil y desórdenes conductuales en los niños ha sido identificada como posible factor de riesgo (Bousha y otros, 1984; Centro Reina Sofía, 2002). (NOVO, M. et al, 2002)

Diversos estudios han señalado que algunas características de comportamiento de los niños, niñas o adolescentes les colocan en una situación de mayor riesgo de ser objeto de desprotección, entre estas podemos encontrar:

- Patrones de sueño y alimentación difíciles.
- Agresividad.
- Déficit de atención.
- Temperamento difícil.
- Bajo nivel de respuesta a los estímulos e iniciativas de los padres y madres. (MANUAL CANTABRIA, 2010)

En ocasiones, los problemas no son tanto las dificultades del niño, niña o adolescente sino la percepción de los padres y madres de que estos problemas existen. La mayoría de las familias con hijos o hijas con estas características les atienden y se relacionan con ellos y ellas adecuadamente, pero cuando estas circunstancias se combinan con algunas características de los padres y madres (como una escasa capacidad para empatizar, escasas habilidades de resolución de problemas o dificultad para controlar los impulsos agresivos) pueden provocar el maltrato.

3. Variables Contextuales. (MANUAL CANTABRIA, 2010)

Si bien la estructura (en cuanto número, edad,) que presenta la familia no es por sí misma un factor de riesgo, existen una serie de características en algunos tipos de familias que las sitúan en una posición de mayor riesgo.

Las familias monoparentales suelen considerarse como de riesgo porque, en general, presentan más dificultades económicas, más estrés y menor apoyo externo que las familias biparentales. Estos efectos negativos son especialmente importantes cuando la segunda figura parental no mantiene una relación positiva y fuerte con los niños y niñas ni ejerce funciones de apoyo hacia la otra figura.

Las familias con padres y madres jóvenes, especialmente la paternidad o maternidad adolescente, parece ser también un factor de riesgo para la desprotección infantil, especialmente cuando se presenta unida a dificultades económicas, falta de apoyo y altos niveles de estrés.

Otros factores relacionados con las variables contextuales son:

- a) Aislamiento social. - Parece que las familias inmersas en un aislamiento que manifiestan un déficit de apoyo social (Garbarino y Sherman, 1980; Gracia y Musitu, 1993) se encontrarían en mayor riesgo de maltratar.
- b) Familias rotas o monoparentales. - Como es el caso de madres solas que conviven con un varón que no es el padre de los hijos (de Paúl y otros, 1989; Margolin, 1992), familias que protagonizan un proceso de separación o divorcio (Arce, Seijo, Novo y Fariña, 2002), o circunstancias de frecuente ausencia del hogar de uno de los progenitores (Arruabarrena y de Paúl, 1994).
- c) El elevado número de hijos. - De este modo, un alto porcentaje de familias maltratantes tienen cuatro o más hijos (Jiménez y otros, 1996), cifra superior a la media poblacional.
- d) Conflictos de pareja. - Tales como problemas maritales y nivel de estrés, alejamiento sexual de la pareja o violencia marital (Straus y Kantur, 1987; Gracia y Musitu, 1993).
- e) Situaciones laborales. - Como desempleo, insatisfacción laboral y tensión en el trabajo (Centro Reina Sofía, 2002).

- f) Nivel socioeconómico y cultural. - Mayoritariamente los casos de malos tratos correlacionan con bajo estatus socioeconómico y nivel educacional (Pelton, 1978). (NOVO, M. et al, 2002)

F. Tipos de Desprotección Familiar.

Bajo el término genérico de desprotección familiar se engloban distintos tipos de situaciones, diferentes en su detección, etiología, tratamiento y prevención. Todas ellas, no obstante, tienen unas características comunes:

1. Constituyen la manifestación y resultado de un conjunto de problemas que afectan al bienestar familiar y a su entorno presente y pasado.
2. Afectan negativamente a la satisfacción de las necesidades básicas del niño y comprometen su adecuado desarrollo.
3. Sus efectos negativos aumentan en intensidad a medida que la situación se cronifica o es más severa. (HERNANZ, ELENA et al, 2000)

Nuestra legislación hasta antes de la dación del Decreto Legislativo N° 1297 nunca se había referido al tema propiamente de “desprotección familiar” y menos establecido los supuestos que determinen tal situación, teniéndose únicamente como referente a las causas de abandono señaladas en el artículo 248 del Código de los Niños y Adolescentes.

Es a raíz de ese vacío legal, que el Decreto Legislativo N° 1297, a través de su reglamento establece de manera clara los supuestos que determinen la existencia de desprotección familiar, que son:

- a) El abandono de la niña, niño o adolescente, que se produce cuando faltan las personas que asumen su cuidado en ejercicio de la patria potestad, tenencia o tutela; o porque éstas no quieren o no pueden ejercerla.
- b) Amenaza o afectación grave para la vida, salud e integridad física de la niña, niño o adolescente. Entre otros:
 - b).1 Cuando se produzca violencia sexual o violencia física o psicológica grave por parte de miembros de su familia de origen o éstos lo consintieran o actuaran de manera negligente.
 - b).2 Cuando la niña, niño o adolescente haya sido identificada/o como víctima del delito de trata de personas y dicha situación se vincule al incumplimiento de los deberes de cuidado de los integrantes de la familia de origen, de acuerdo a la Tabla de Valoración de Riesgo. Corresponde al Ministerio Público determinar la participación o no de la familia de origen en el delito. Asimismo, corresponde a la Unidad de Protección Especial determinar las competencias parentales para asumir el cuidado de la niña, niño o adolescente víctima.
 - b).3 Cuando la niña, niño o adolescente consume de manera reiterada sustancias con potencial adictivo o la ejecución de otro tipo de conductas adictivas, con el conocimiento, consentimiento o tolerancia de los padres, tutores o integrante de la familia de origen responsable de su cuidado.
- c) Trabajo infantil en situación de calle o aquel que suponga una afectación de derechos que revista gravedad para la niña, niño o adolescente de acuerdo a la Tabla de Valoración de Riesgo.
- d) La inducción a la mendicidad, delincuencia, explotación sexual, trabajo forzoso o cualquier otra forma de explotación de similar naturaleza o gravedad.

- e) Otras circunstancias que perjudican gravemente el desarrollo integral de la niña, niño o adolescente y cuyas consecuencias no puedan ser evitadas mientras permanezca en su entorno de convivencia, incluidas la persistencia de situaciones de riesgo de desprotección familiar que no se han revertido a pesar de la actuación estatal.

Estas circunstancias o supuestos dan inicio al procedimiento por desprotección familiar.¹

Así se procede a desarrollar los supuestos de mayor predominio que dan origen a la desprotección familiar:

1. Maltrato o Abuso Físico. (HERNANZ, ELENA et al, 2000)

Se entiende como “cualquier acción no accidental por parte de los padres o cuidadores que provoque daño físico o enfermedad en el/la niño/a y adolescente o le coloque en grave riesgo de padecerlo”.

Tales acciones pueden producir, las siguientes lesiones:

a) Magulladuras o Moratones.

➤ localizados en:

- rostro, labios o boca.
- espalda, nalgas o muslos.
- agrupados.
- varias áreas diferentes.

➤ caracterizadas por:

- estar en diferentes fases de cicatrización.
- tener formas difícilmente explicables por otros.
- mecanismos de producción.
- tener señal o marca del objeto con el que han sido infligidos.

b) Heridas o Raspaduras en:

- boca, labios, encías u ojos.
- genitales externos.
- parte posterior de brazos, piernas o torso.

c) Cortes o Pinchazos.

d) Señales de mordedura humanas.

- Especialmente cuando parecen ser de un adulto o son reiteradas.

e) Quemaduras.

De puros o cigarros; quemaduras que cubren toda la superficie de las manos (como un guante) o de los pies (como un calcetín) o quemaduras en forma de buñuelo en nalgas, o genitales, indicativas de inmersión en líquido caliente; quemaduras en brazos y piernas, cuello o torso provocadas por haber estado atado fuertemente con cuerdas; quemaduras que dejan señal claramente definida (parrilla, plancha...).

f) Fracturas.

¹ Reglamento del Decreto Legislativo N° 1297 para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes Sin Cuidados Parentales o en Riesgo de Perderlos. Artículo 4.

- En el cráneo, nariz o mandíbula.
- En espiral en huesos largos (brazos o piernas), sobre todo si el niño/a no camina.
- En varias fases de resolución.
- Fracturas múltiples.

- g) Torceduras o Dislocaciones.
- h) Lesiones cerebrales o Hematoma subdural.
- i) Lesiones de órganos internos.
- j) Asfixia o Ahogamiento.

2. Abandono Físico o Negligencia.

Entre las definiciones más destacadas de abandono físico se encuentra la de Polansky y cols. (1972), que centran fundamentalmente la atención en el comportamiento del responsable del menor. Entiende por abandono físico toda situación en la que el cuidador responsable del niño, de manera deliberada o por una extraordinaria falta de atención, permiten que el niño experimente un sufrimiento evitable y/o fracasa en proporcionarle uno o varios de los aspectos básicos y esenciales para el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emocionales. (CAHUA GALLEGOS, 2017)

Definido como “aquella situación en la que las necesidades físicas básicas del/los menores no son atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro adulto del grupo que convive con el niño/a”.

Tales necesidades físicas básicas, hacen referencia a las siguientes áreas:

- Alimentación.
- Vestido.
- Higiene.
- Cuidados médicos.
- Supervisión y vigilancia.
- Condiciones higiénicas y de seguridad en el hogar.
- Área educativa. (HERNANZ, ELENA et al, 2000)

3. Maltrato Emocional.

Definido como “hostilidad verbal y/o paraverbal crónica en forma de insulto, burla, desprecio, crítica o amenaza de abandono, y constante bloqueo de las iniciativas de interacciones infantiles (desde la evitación hasta el encierro o confinamiento) por parte de cualquier miembro del grupo familiar”.

Las conductas incluidas en este grupo son las siguientes:

- Rechazar: Se refiere a no aceptar las iniciativas de interacción del niño/a o adolescente, excluirle de actividades familiares, expresarle una valoración negativa de sí mismo/a, e impedirle evolucionar hacia una mayor autonomía y autodeterminación.
- Aterrorizar: Se refiere a amenazar al niño/a o adolescente con un castigo externo y concreto o con uno vago pero siniestro, crear en él/ella un miedo intenso, de amenaza impredecible, o mantener hacia éste/a expectativas irrealizables castigándole por no alcanzarlas.
- Aislar: Se refiere a privar al niño/a o adolescente de las oportunidades para establecer relaciones sociales. (HERNANZ, ELENA et al, 2000)

4. Abuso Sexual. (DESPROTECCION INFANTIL, 2008)

Se considera abuso sexual cualquier contacto o interacción entre un adulto y un menor, que proporcione estimulación o satisfacción sexual en el adulto u otras personas. El abuso sexual incluye dos elementos: la coerción y la asimetría (Fariña y cols. 2000). La coerción se produce mediante el uso de la fuerza física, de la presión, o del engaño, por parte del adulto. Se establece asimetría entre víctima y abusador, principalmente en las variables edad, posición de poder o madurez (Echeburúa y Cuerricaechevarría, 1998), las cuales siempre favorecen al abusador (Arruabarrena, 1997). La relación asimétrica es el más importante de los dos elementos, estando presente en todos los casos de abuso sexual. Incluso en aquellos en los que aparentemente el menor accede voluntariamente a mantener la relación, o es éste quien la provoca, porque los implicados no tienen el mismo nivel de experiencia, ni de evolución biológica, y sus expectativas sobre la relación sexual difieren (Arruabarrena, 1997, Fariña y cols., 2000). (FARIÑA,F. et al)

4.1 Formas del Abuso Sexual.

- Abuso sexual intrafamiliar: Contacto o interacción sexual en la que un menor es utilizado por un adulto con el que existe una relación familiar o con un adulto que está cubriendo de manera estable un rol parental (por ejemplo, padres adoptivos, padrastro/madrastra, compañero/ a sentimental del padre o la madre).
- Abuso sexual extrafamiliar: Cualquier interacción de carácter sexual en el que el abusador no es un miembro de la familia del menor.

4.2 Tipos de Conductas Sexuales.

- Abuso sexual sin contacto físico:
 - Seducción verbal explícita a un niño (solicitud al niño de implicarse en una actividad sexual sin contacto físico).
 - Exposición de los órganos sexuales del adulto con objeto de obtener gratificación o excitación sexual (exhibicionismo).
 - Masturbación o realización intencionada del acto sexual en presencia del niño con objeto de buscar gratificación sexual.
 - Enseñar y/o hablar con el niño acerca de material pornográfico.
- Abuso sexual con contacto físico:
 - Tocamiento intencionado de zonas erógenas del niño.
 - Forzar, alentar o permitir que el niño toque las zonas erógenas del adulto.
 - Penetración digital, sea vaginal o anal.
 - Penetración con un objeto, sea vaginal o anal.
 - Contacto genital oral.
 - Penetración vaginal o anal con el órgano sexual masculino.
 - Intentos de penetración vaginal, oral y/o anal.

5. Explotación Laboral. (HERNANZ, ELENA et al, 2000)

Definida como aquella situación en que los padres o tutores asignan al niño/a o adolescente, con carácter obligatorio, la realización continuada de trabajos (domésticos o no) que:

- Exceden los límites de lo habitual en el contexto socio-cultural en que se desarrolla el/la niña/a.
- Deberían ser realizados por adultos.
- Interfieren de manera clara en las actividades y necesidades sociales y/o escolares del niño/a o adolescente.
- Son asignados al niño/a o adolescente con el objetivo fundamental de obtener un beneficio económico o similar para los padres/tutores o la estructura familiar.

Hay autores que incorporan la mendicidad como un tipo de explotación, otros, sin embargo, la consideran un tipo de maltrato diferente (Jiménez y otros, 1995, palacios 2002). En todo caso, en la mendicidad, el niño o la niña es utilizado específicamente para pedir dinero en la calle o en otros lugares públicos.

6. Corrupción.

Conductas propiciadas por adultos que refuerzan pautas de conducta antisocial o desviada, en ocasiones con el fin de sacar un beneficio del menor y que impiden la normal integración del niño, manifestándose especialmente en el área de la agresividad, la sexualidad y las drogas. (HERNANZ, ELENA et al, 2000)

La corrupción puede manifestarse de tres maneras:

- Los padres o responsables del cuidado del menor facilitan y refuerzan pautas de conducta antisocial o desviada que impiden la normal integración del niño.

El hogar en el que vive el niño constituye un modelo de vida inadecuado para su normal desarrollo, por contener pautas asociales o autodestructivas.

Tipos de conductas que comprende:

- a) Conductas delictivas.
- b) Tráfico de drogas.
- c) Consumo de drogas.
- d) Comportamientos autodestructivos.

Para poder afirmar que se da este tipo de maltrato:

- Debe darse como mínimo una de las conductas descritas de forma reiterada.
- La presencia de esa conducta/s debe ser claramente identificable.
- El modelo inadecuado debe ser percibido con claridad por el niño.
- El niño es vulnerable a los malos efectos de ese modelo de vida inadecuado.
- Los padres o responsables del cuidado del menor le utilizan como «ayuda» o «tapadera» para la realización de acciones delictivas (robo, transporte de drogas, etc.).
- Los padres o responsables del cuidado del menor le prostituyen o le utilizan con fines pornográficos. (DESPROTECCION INFANTIL, 2008)

G. Consecuencias Físicas y Psicológicas de la Desprotección Familiar.

(FARIÑA,F. et al, págs. 111-114)

Las consecuencias de la desprotección infantil pueden ser graves y perdurar a largo plazo. Su impacto negativo en el menor de edad no es siempre visible de forma inmediata o

a corto plazo; en algunos casos no es visible en un primer momento, pero se manifiesta con el transcurrir del tiempo: es el llamado “efecto durmiente”. Estos efectos negativos pueden afectar: la salud física, el desarrollo intelectual y cognitivo, y la situación emocional y psicológica del menor de edad.

1. Consecuencias del maltrato y abandono físico.

Las consecuencias físicas del maltrato son muy diversas, abarcan desde los hematomas, heridas y quemaduras, en cualquier parte visible del cuerpo, propiciadas con diferentes objetos, hasta roturas óseas y lesiones cerebrales de diferente índole. Algunas dejarán secuelas en el niño en forma de cicatriz, deformaciones óseas o daños neurológicos. El abandono físico, como ya se ha comentado, proviene principalmente de la alimentación inadecuada y de la falta de higiene y salud corporal. Una alimentación no adecuada, por su escasez o desequilibrio, puede producir alteraciones metabólicas, intestinales y de hígado, así como una disminución de las defensas, que hace al organismo más vulnerable para cualquier tipo de enfermedad. Los menores que se encuentran en este tipo de situación suelen tener mayor número de accidentes domésticos (golpes, roturas, quemaduras, entre otros), con consecuencias similares al maltrato físico.

Las principales consecuencias psicológicas que exhiben son: trastornos de conducta, especialmente si se trata de niñas; depresión infantil y sintomatología asociada a la misma; baja autoestima; tristeza; intentos de suicidio; trastornos de tipo disociativo, tales como personalidad múltiple; mayor tendencia a sufrir problemas de alcoholismo y toxicomanías; déficits de habilidades para establecer interacción social de forma adecuada; además su coeficiente intelectual suele ser inferior al normal (Martínez Roig y de Paúl, 1993). Por otra parte, Egeland y cols. (1983) diferencian en un rango de edades, de 18 meses a 5 años, las consecuencias de maltrato. Cuando los menores tienen 18 meses reaccionan siempre con apego ansioso, independientemente del maltrato sufrido, mientras en las restantes edades evaluadas varía en función del caso. Para estos autores el maltrato físico y el maltrato emocional comparten patrones conductuales similares, y quienes lo padecen cuando tienen 24 meses muestran conductas de rabia, frustración y agresión; alcanzados los 42 meses presentan baja autoestima, hiperactividad y mayor capacidad de distracción; y a los 5 años más problemas de ajuste psicológico y trastornos conductuales.

2. Consecuencias del maltrato emocional.

Las repercusiones de este tipo de maltrato son principalmente psicológicas, y sólo indirectamente físicas. Egeland y cols. (1983), como se ha recogido en párrafos anteriores, considera que el maltrato emocional y físico provoca patrones conductuales similares, al menos hasta la edad de cinco años. No obstante, señala que las mayores consecuencias negativas del maltrato, tanto físico como emocional, se observan en la adolescencia, con conductas autodestructivas, y mayor problemática de carácter sexual (Díaz-Aguado y Martínez Arias, 1996).

3. Consecuencias del abuso sexual.

Los efectos de los abusos sexuales se encuentran determinados por diversas variables: tipo de agresión, edad del agresor y la víctima, la naturaleza de la relación entre ambos, la duración y la frecuencia de la agresión, la personalidad del niño agredido, la reacción del entorno, etc. (López y cols., 1995).

Para delimitar las repercusiones de este tipo de abuso Martínez Roig y de Paúl (1993) y López (1995) consideran necesario precisar los efectos a corto y a largo plazo en las consecuencias del abuso sexual.

➤ Los efectos a corto plazo, denominados por López y cols. (1995) efectos iniciales, son aquellos que surgen durante los dos primeros años. Según Martínez Roig y de Paúl (1993) dichos efectos se cristalizan en: tendencia de los menores a presentar sentimientos de miedo generalizado, hostilidad y rabia, que derivan en comportamientos agresivos y conductas antisociales; trastornos psicopatológicos, especialmente en niños con edades comprendidas entre 7

y 13 años; sintomatología depresiva unida a sentimientos de culpa, vergüenza y baja autoestima; alteraciones en el sueño y hábitos alimenticios; excesiva curiosidad por la sexualidad, mayor exposición de los genitales, masturbación compulsiva; así como dificultades en el rendimiento escolar y fracaso escolar.

➤ Las repercusiones del abuso sexual a largo plazo son más difíciles de estudiar, por la posible interferencia de otras variables (López y cols., 1995). Pese a ello, diferentes estudios permiten señalar que el haber padecido abuso sexual incide en una mayor presencia de: sintomatología depresiva, conductas autodestructivas y suicidio; trastornos de ansiedad: ataques de angustia o pánico, ansiedad generalizada, nerviosismo, tensión muscular; alteraciones del sueño, tales como insomnio, pesadillas nocturnas; baja autoestima, sentimientos de soledad y de estigmatización, agudizados cuando se han producido relaciones sexuales de tipo incestuoso; dificultad para establecer relaciones de tipo íntimo, mayor insatisfacción en las relaciones sexuales; tendencia a ejercer la prostitución y a sufrir abusos sexuales en la vida adulta, lo que se conoce como revictimación, así como problemas de alcoholismo y adicción a otras drogas (Martínez Roig y de Paúl, 1993, López y cols., 1995 y Fariña y cols., 2000).

2.4.3 Nuevo Régimen Normativo para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Sin Cuidados Parentales o en Riesgo De Perderlos.

A partir del 11 de febrero de 2018, tenemos un nuevo sistema legal de protección de niñas, niños y adolescentes en situación especial de vulnerabilidad. Ahora, ¿cuál ha sido el objetivo de tener una nueva legislación? Podemos encontrar hasta 3 razones:

- Primero. – Adecuar la legislación a la Convención sobre Derechos del Niño, fundamentalmente el artículo 5 y 18 referidos a la responsabilidad parental y competencias parentales, además al artículo 20 de este cuerpo legal que permite dar un mejor tratamiento a los niños en situación de desprotección familiar.
- Segundo. – Evitar la institucionalización de los niños que se encuentran en situación de riesgo y también de los niños que se encuentran en situación de desprotección familiar, fomentando su reintegración familiar o en última ratio su adopción.
- Tercero. – Establecer un nuevo marco de principios y enfoques que permitan restituir el derecho del niño a vivir en una familia

En razón de ello, se tiene cambios legislativos trascendentales a conocer:

- Ya no se puede hablar de “niños abandonados”, este es un término peyorativo. La nueva legislación señala que estos niños se encuentran en situación de riesgo o desprotección familiar, por que quien debe cumplir el rol es la familia.
- Se diferencia la situación de riesgo y la de abandono. Es importante esta diferencia porque se evita la institucionalización de niños en situación de riesgo que podrían seguir conviviendo con su familia, es decir, en la situación de riesgo intervendrá el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y de igual forma la Demuna. En casos de niños en situación de desprotección familiar, tratándose de una vulneración al desarrollo integral del niño y que la familia no pueda o no quiera cumplir con sus responsabilidades parentales o carezca de competencias parentales, de tal forma, que será la última ratio declarar a un niño en situación de desprotección familiar.
- Anteriormente, un niño declarado en estado de abandono era susceptible a ser adoptado, pero si bien es cierto no todo niño declarado en estado de abandono puede ser adoptado, de tal forma, hoy en día el juez deberá declarar además de la desprotección familiar permanente, la adoptabilidad para que el niño pueda ser adoptado. Es decir, el juez tendrá competencia importante al tener que declarar la viabilidad jurídica del niño para que pueda formar parte de una nueva familia.

De la misma forma, dentro de este marco de adopción se ha querido simplificar las normas con la finalidad que se pueda realizar una adopción adecuada al interés superior del niño y aplicarse de manera precisa el principio de necesidad e idoneidad, por lo tanto el proceso debe estar imbuido del principio de informalidad, al igual que del principio de debida diligencia el cual se refiere a actuar de manera oportuna para así el niño pueda ser adoptado sin mayor dilación del proceso y trabas burocráticas. (ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA DEL PERU, 2018)

Asimismo, (VARSI ROSPIGLIOSI, ENRIQUE et al, 2017) señala que, en nuestro ordenamiento jurídico, el tratamiento de la familia en el Código Civil abarca un total de 426 artículos (en estricto desde el 233 al 659). El desarrollo que encontramos en dicho cuerpo normativo se limita al funcionamiento jurídico del núcleo social de la sociedad civil (matrimonio, divorcio, filiación, patria potestad, etcétera). Sin embargo, el contenido de ello resulta insuficiente frente al niño o adolescente que se encuentra en riesgo cuando la familia no cumple su rol social básico, de ser un elemento que brinde protección en el desarrollo del menor.

El Instituto Interamericano del Niño define como una situación de riesgo del menor a “aquella en que se encuentra un menor tanto cuando ha incurrido en un hecho antisocial, como cuando se encuentra en estado de peligro, abandono material o moral o padece un déficit físico o mental. Dícese también de los menores que no reciben el tratamiento, la educación y los cuidados que corresponden a sus individualidades.

En la misma línea, (MONTROYA CHAVEZ, 2007) indica que, se han elaborado diversos mecanismos para que los niños y adolescentes, en especial los que sufren desamparo, puedan ser favorecidos y fortalecidos en la observancia de su dignidad. Entendiendo correctamente la situación que los rodea, los derechos que se le asignan y la posición que asumen dentro de las prioridades estatales y comunales, ellos tendrán mayor oportunidad de ser respetados. No hay que ser ciegos ante la realidad. Por eso, debe buscarse su tutela de la integridad personal, tanto corporal, sexual, psíquica y espiritual, pues solo así se conseguirá una protección estatal supletoria y en última instancia en aras de la dignidad personal.

En atención a lo anterior, (VARSI ROSPIGLIOSI, ENRIQUE et al, 2017) explica que, el niño o el adolescente, por su especial situación y por encontrarse en una posición de desventaja respecto de los llamados a velar por su protección, debe contar con una legislación y una situación acorde con sus necesidades que a su vez, requieren un ejercicio pleno de los derechos que la Constitución le ofrece.

¿Cómo se cautelan los derechos del menor dentro del seno de una familiar? El nuevo régimen de protección al menor en situación de desamparo familiar busca afinar el enfoque conceptual y reunir en un solo cuerpo normativo un sistema integral para cautelar la llamada situación de riesgo y la desprotección familiar de las niñas, niños y adolescentes.

A. Rol del Estado. (VARSI ROSPIGLIOSI, ENRIQUE et al, 2017)

En el Perú siempre se ha manejado el concepto de “abandono” como el resultado final de la vulneración de los derechos de un niño a crecer y a desarrollarse dentro de un ambiente familiar. A razón de ello, en virtud al artículo 127 del Código de los Niños y Adolescentes se requiere una declaración judicial de abandono, antes de poder iniciar el proceso de adopción. La adopción es el último recurso legal disponible para brindar un ambiente familiar donde pueda desarrollarse una persona. El referido artículo modificado por el Decreto Legislativo N°1297, responde al siguiente texto: “La adopción de niños o de adolescentes solo procede una vez declarado judicialmente el estado de desprotección familiar y adoptabilidad, salvo los casos previstos en el artículo 128 del presente Código”.

Consideramos que no se trata de una modificación antojadiza si no que dicho cuerpo normativo replantea la reivindicación de los derechos vulnerados de los menores que se encuentran en una situación de riesgo y, más aún, de aquellos que puedan recaer en una situación de desprotección familiar.

El tratamiento de la desprotección familiar resulta esencial dentro de cualquier sociedad, dado que la responsabilidad parental implica derechos y deberes respecto al desarrollo integral de los hijos; sin embargo, cuando esta vulneración se concreta, compete al Estado brindar las herramientas legales necesarias para velar por el interés de los menores.

Es la propia norma la encargada de darle contenido tanto a la situación de riesgo de desprotección familiar como la propia situación de desprotección familiar.

B. Novedosa Estructura Protectora. (VARSI ROSPIGLIOSI, ENRIQUE et al, 2017)

Inicialmente, la tutela del desarrollo integral de los menores se encontraba distribuida entre el Código de los Niños y Adolescentes, la Ley de Acogimiento Familiar, el Reglamento del Servicio de Investigación Tutelar, la Ley de Procedimiento Administrativo de Adopción de Menores de Edad Declarados Judicialmente en Abandono y la Ley General de Centros de Atención Residencial de Niñas, Niños y Adolescentes. Por lo tanto, el primer gran logro del Decreto Legislativo N°1297, al expedirse su respectivo reglamento, es la concentración de la normativa pertinente en un solo cuerpo legal.

La estructura que presenta el nuevo cuerpo normativo es la siguiente:

1. Definiciones, derechos, obligaciones, sujetos.
2. Actuaciones frente al riesgo o desprotección familiar.
3. Procedimiento de declaración de desprotección familiar.
4. Medidas de protección declarada la desprotección familiar.
5. Adopción.
6. Acogimiento de hecho.
7. Disposiciones complementarias.

El objetivo primordial del instrumento legal es el restablecimiento del vínculo familiar dentro de la familia de origen por lo que busca recomponer y restablecer los derechos de los menores mediante medidas de protección que no impliquen la remoción del menor del seno familiar, siempre que ello sea posible. Uno de los mayores aportes que puede apreciarse en este nuevo régimen es el establecimiento de plazos expeditivos para llevar adelante cada una de las etapas que buscan restablecer el derecho de las niñas, niños y adolescentes a un desarrollo integral dentro de un ambiente familiar.

Cada etapa busca atender las necesidades del menor, según el grado de afectación al cual se enfrenta y las opciones que se presentan. Así mismo, se busca controlar las situaciones de riesgo dentro del propio seno familiar, ante la desprotección se ofrecen medidas de protección que remueven de manera temporal al menor del seno familiar y finalmente la adopción que remueve de manera definitiva al menor de su origen biológico, todo bajo el principio orientador del interés superior del niño.

2.4.3.1 Decreto Legislativo N° 1297 para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Sin Cuidados Parentales o en Riesgo De Perderlos. (SOKOLICH ALVA, 2017)

A finales del año 2016, el Gobierno promulgó diversos Decretos Legislativos orientados a la reactivación de la economía y seguridad ciudadana; es así que se expide el Decreto Legislativo N°1297 por el cual se regula la protección de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos.

La norma en su exposición de motivos parte por reconocer la especial protección que merece la familia, lo cual es relevante destacar pues aquella es la cuna de formación de la persona humana en principios, valores y respeto de las normas sociales.

Lastimosamente, en la actualidad muchas familias se encuentran en crisis por diversos factores, entre los cuales se puede distinguir violencia doméstica, falta de comunicación entre sus miembros, consumo de alcohol y drogas, promiscuidad y precocidad sexual, incumplimiento de la responsabilidad parental, deserción escolar, etc., lo que de no ser atendido en forma seria, responsable y oportuna fácilmente puede dar lugar a problemas sociales graves como feminicidio, desprotección familiar, delincuencia juvenil, etc., lo que incrementa el clima de inseguridad ciudadana.

El decreto legislativo 1297 justamente identifica la desprotección familiar de los niños, niñas y adolescentes como una de las causas u origen de la delincuencia juvenil, de allí la necesidad de prevenirla y afrontarla a través de un sistema de protección integral. Ello es de especial relevancia, pues concreta el compromiso del Estado y la comunidad, plasmado en el artículo 4 de la Constitución, de proteger especialmente a los niños por medio de políticas públicas reales y efectivas.

Resulta oportuno, destacar, además, que la norma se sustenta en las “Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños”, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sexagésimo cuarto periodo de sesiones, en el marco de las celebraciones del vigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, realizado en el año 2009.

Dichas directrices, conforme así se establece en su Preámbulo, además de reafirmar la relevancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, y, por tanto, el rol de garante de los Estados, establecen las pautas a observar en aras de promover la aplicación de la Convención sobre los derechos del Niño y las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales referentes a la protección y bienestar de los niños privados del cuidado parental o en peligro de encontrarse en esa situación.

Es importante resaltar que el Decreto Legislativo N°1297 modifica y deroga diversos artículos del Código de los Niños y Adolescentes (artículos 29,36,75,77,119,127,128,143 y 144; y deróguese los artículos 45 literal d, 104, 105, 106, 107, 108, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 y 252), de la misma forma artículos del Código Civil (artículos 379 y 510; y deróguese el artículo 511); también dispone la derogación de leyes como las referentes al Acogimiento Familiar (Ley N°30162), Ley General de Centros de Atención Residencial de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley N°29174), Ley que Protege a los Menores de Edad de la Mendicidad (Ley N°28190, artículos 1,2,3, y 4) y Ley de Procedimiento Administrativo de Adopción de Menores de Edad Declarados Judicialmente en Abandono.

A. Antecedentes.

El Código de los Niños y Adolescentes y leyes complementarias como las antes mencionadas, han venido regulando en forma aislada diversos aspectos vinculados con la situación de desprotección familiar en la que se encuentran muchos niños del país.

De esta forma, tenemos, por ejemplo, la prerrogativa reconocida a las Defensorías de conocer casos de "colocación familiar", conforme lo prescrito por el literal d) del artículo 45 del Código de los Niños y Adolescentes.

La colocación familiar es una qué medida de protección consiste en la entrega de un niño a una persona, familia o institución con la finalidad de resguardar su integridad ante la ausencia de sus padres, desconocimiento de su paradero, o, incumplimiento de roles.

Se entiende que la colocación familiar es una medida de protección provisional que se mantiene hasta que la situación familiar que dio origen la separación del niño de su entorno familiar haya sido superada; sin embargo, de lo dispuesto por el literal c) del artículo 128 del Código de la especialidad, posibilita el proceso de adopción por excepción.

Esta es la razón por la cual los artículos 45. ° literal d), 128. literal c) y 243.° del Código de los niños y Adolescentes han sido derogados por el Decreto Legislativo N.° 1297,

pues lo que se pretende es canalizar en un solo procedimiento la atención y medida de protección a otorgar un niño que se encuentra en riesgo o desprotección familiar.

Es de notar, que conforme al mencionado artículo 243 del Código de los niños y Adolescentes, la colocación familiar igualmente resulta aplicable por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como medida de protección a favor de un niño en presunto estado de abandono.

El estado de "abandono", conforme la regulación recogida por el aún vigente artículo 248. ° del Código de los Niños y Adolescentes, ha dado paso a lo que ahora se entiende como "desprotección familiar", que conforme al Decreto Legislativo N°1297, es el resultado del incumplimiento o inadecuado desempeño de los deberes de cuidado y protección por parte de los responsables de los niños, hecho que afecta gravemente su desarrollo integral.

Como es de colegir, se alude al incumplimiento de la responsabilidad parental que conforme al artículo 6. ° de la Constitución Política del Estado, implica la obligación que tiene tanto el padre como la madre de velar por el adecuado proceso de crianza y desarrollo de sus hijos con la finalidad de lograr su desarrollo holístico.

El artículo 74. ° del Código de los Niños y Adolescentes regula diversos deberes y derechos de la patria potestad, entre ellos, proveer su sostenimiento y educación, dirigir su proceso educativo, tenerlos en su compañía, etc.

La Convención sobre los Derechos del Niño por el artículo 3, además de consagrar en su primer párrafo el "Principio del Interés Superior del Niño", inmediatamente subraya obligación que tienen los Estados de asegurarles protección y cuidado, teniendo en cuenta los derechos y deberes de los padres, tutores u otros responsables, de tal forma que el niño no debe ser separado de sus padres, salvo que dicha medida se sustente en garantizar su bienestar, como sucedería en supuestos de maltrato, descuido, perjuicio, abuso, descuido, trato negligente, explotación, etc.

En situaciones como las descritas se justifica la intervención estatal mediante acciones administrativas y judiciales adecuadas que garanticen la protección del niño, conforme lo dispuesto por los artículos 9, 19 y 20 de la Convención. Este es la razón de ser del Decreto Legislativo N° 1297, pues conforme a su artículo 1 la finalidad es la protección integral de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos a fin de garantizarles el pleno ejercicio de todos sus derechos, sobretudo el vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia.

Ahora bien, el literal g) del artículo 3.° del citado Decreto Legislativo establece que la situación de "desprotección familiar" tiene carácter provisional e implica la separación temporal de la niña, niño o adolescente de su familia para su protección, así como el apoyo especializado a la familia para la remoción de las circunstancias que la motivaron; sin embargo, el artículo 92 de la misma norma regula la potestad de la autoridad administrativa de promover la respectiva declaración judicial de desprotección familiar cuando del seguimiento y evaluación del plan de trabajo individual se determine que no existe posibilidad de reintegración del niño a su entorno familiar o resulte contrario a su interés superior.

Es importante resaltar, que la decisión administrativa debe tomar en cuenta la opinión del niño y sustentarse tanto en su interés superior los principios de necesidad e idoneidad. Ello resulta positivo, pues se materializa en la práctica las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño N° 12 (2009) y 14 (2013).

Los supuestos que pueden dar lugar a la declaración de desprotección familiar son desarrollados por el Reglamento; no obstante, en ningún caso la pobreza ni la discapacidad del niño o de alguno de los miembros de su entorno familiar justifica por sí misma la separación del niño de su entorno familiar, lo cual también es relevante, pues resulta coherente con el reconocimiento del derecho del niño de desarrollarse en el seno de su propia familia, conforme así se destaca en el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño.

2.4.3.2 Principios Orientadores de la Actuación Estatal. (ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA DEL PERU, 2018)

El artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1297 puntualiza que son principios orientadores de la actuación estatal los siguientes:

a) Diligencia excepcional: La actuación del Estado frente a situaciones de riesgo o desprotección familiar exige la mayor celeridad, cuidado, eficacia y responsabilidad por parte de los órganos y funcionarios competentes en todas las acciones y decisiones que adopten en garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Este principio es especialmente relevante en el análisis de las circunstancias que rodean y afectan a la niña, niño o adolescente, la valoración objetiva del impacto de las mismas en sus derechos, la justificación de las decisiones y su revisión oportuna.

Así, a través de ello se analiza, justifica y valora las acciones a seguir, garantizando la celeridad, eficacia y la actuación responsable de quienes la realizan.

b) Especialidad y profesionalización: La actuación estatal es planificada y se realiza a través de profesionales y técnicos debidamente especializados. La capacitación es periódica.

Se garantiza que, el personal que trabaja en el entorno de los niños para aplicación de las medidas de protección o las decisiones que se toman son profesionales debidamente capacitados.

c) Excepcionalidad y temporalidad: La adopción de una medida de protección que implique la separación de la niña, niño o adolescente de su familia de origen es excepcional y por el más breve plazo, que debe sustentarse en la existencia de circunstancias objetivas y en función al Interés Superior del Niño.

Responde al tipo de medida que se tomara en favor del niño, considerando su estado de vulnerabilidad, ya que, puede ser un estado de riesgo o desprotección lo cual lleva a que se apliquen diferentes tipos de medidas.

d) Igualdad y no discriminación: Todas las niñas, niños o adolescentes que se encuentren dentro del territorio nacional, tienen derecho a la protección del Estado ante situaciones de riesgo o de desprotección familiar, sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, género, color de piel, idioma, religión, nacionalidad, origen étnico o social, discapacidad o cualquier otra condición de la niña, niño, adolescente o de su madre, padre, tutora o tutor o familia de origen.

Avala que, todos los niños tengan los mismos derechos, es decir, no considera raza; género; edad o situación económica.

e) Informalismo: Las normas que regulan los procedimientos por riesgo o desprotección familiar, deben ser interpretadas, de modo que los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes, de su madre, padre, familia extensa o de origen, tutora o tutor, no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros.

Asegura que, los procedimientos sean menos tedioso y se pueda aplicar de manera adecuada la normatividad.

- f) Integración familiar: La actuación del Estado debe promover de manera prioritaria la integración de la niña, niño o adolescente en su familia de origen, realizando las acciones necesarias para este fin.*

Defiende el derecho del niño dentro de su familia de origen, considerando que la separación de esta se temporal o definitiva solo está fundamentada y se va a garantizar cuando exista riesgo de vida del niño.

- g) Interés Superior del Niño: Este derecho sustancial, principio de interpretación y norma de procedimiento, asegura la protección y desarrollo integral de la niña, niño o adolescente en su familia y en caso excepcional, prioriza un entorno familiar alternativo. A fin de determinar el interés superior del niño, se respetan los vínculos familiares y se favorece el apoyo a la familia de origen como medida de protección prioritaria. En ningún caso su aplicación puede disminuir o restringir los derechos y garantías reconocidos a las niñas, niños y adolescentes.*

Es un precepto reconocido por la Norma Supranacional a través de la Convención de los Derechos del Niño, la cual considera 3 dimensiones:

- Derecho Sustancial. – Porque garantiza que el niño sea reconocido como sujeto de derecho por lo tanto se debe dar y garantizar que todos sus derechos fundamentales sean respetados.
- Principio de Interpretación. - Porque ante la colisión de derechos el interés superior del niño pondera a mayor supremacía el derecho de niño.
- Norma Procedimental. - Porque se adecua a los tiempos y características de cada niño por su etapa de desarrollo considerando que el niño por sí solo no puede tener acceso a garantizar que se cumplan sus derechos.

- h) Necesidad e idoneidad: El principio de necesidad implica que la separación de la niña, niño o adolescente de su familia, sea dispuesta únicamente cuando todos los medios posibles para mantenerlo en su familia, no han surtido efecto o han sido descartados.*

El principio de idoneidad implica la selección de la medida de protección más adecuada y que mejor satisfaga las necesidades de cada niña, niño o adolescente.

Se encarga de dar un límite a las sesiones que se toman en cuanto al niño, porque garantiza que si la medida es temporal o definitiva responde a la necesidad o vulneración que se encuentra el niño en su entorno familiar.

- i) Subsidiaridad progresiva de la actuación del Estado: Cuando la familia de origen tenga dificultades para cumplir sus obligaciones de cuidado y protección, el alcance y la intensidad de la actuación estatal para garantizar los derechos de la niña, niño o adolescente, es proporcional al grado de riesgo o desprotección familiar en la que se encuentre.*

Surge la necesidad de respaldar que los niños que se encuentran en estado de riesgo puedan satisfacer sus necesidades a través de programas provistos por el Estado como desayuno en la escuela y comedores comunales, lo que permite y garantiza que los niños estén protegidos de cierto modo de los derechos que sus padres no pueden ejercer.

- j) Interculturalidad: El Estado y la sociedad valoran e incorporan las diferentes visiones culturales, concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnicos-culturales del país al que pertenecen las niñas, niños y adolescentes, para garantizar el ejercicio de sus derechos.*

Se encarga de hacer valer que el niño pertenece a un contexto social dentro de su entorno familiar y trata de no alejarlo de su origen.

Para (SOKOLICH ALVA, 2017), la valoración preliminar de la situación socio-familiar de un niño, así como los procedimientos por riesgo y desprotección familiar se deben caracterizar por lo siguiente:

- a) Observancia del triple concepto del interés superior del niño, conforme a la Observación General N° 14 del Comité de los Derechos del Niño.
- b) Prevalencia del derecho del niño a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia de origen y solo en casos extremos, decidir, como último recurso, la separación del niño del entorno familiar que resulta negativo para sus intereses y desarrollo.
- c) Actuación responsable, pronta, responsable, especializada y libre de todo formalismo de la autoridad
- d) Otorgamiento de medidas de protección flexibles y acordes a cada caso en particular, las cuales deben ser supervisadas en forma constante a fin de verificar su efectividad.
- e) Consideración y respeto de todos los derechos del niño reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los instrumentos internacionales de derechos humanos que resulten aplicables.

Es importante la mención de los citados principios; no obstante, consideramos que se han omitido dos principios igualmente relevantes como:

- a) El derecho del niño a emitir opinión en todos los asuntos en los que se encuentre inmerso.
- b) La motivación y justificación de las decisiones estatales en el interés superior del niño. Si bien estos principios se desarrollan en diversos artículos del Decreto Legislativo, al ser la fuente inspiradora y esencial de la actuación estatal era necesaria su inclusión en este acápite, más aún las exigencias del Comité de los Derechos del Niño materia de las últimas Observaciones finales al Estado Peruano sobre los informes periódicos cuarto y quinto de marzo de 2016, por las cuales se requiere, entre otros, el ejercicio efectivo del desarrollo del niño a emitir opinión.

Además, el artículo 5 del Decreto Legislativo N°1297 establece la obligación de la autoridad estatal de velar por el ejercicio efectivo de los derechos de los niños reconocidos en la legislación nacional; empero, obvia similar obligación respecto de los reconocidos en instrumentos internacionales de Derechos Humanos como la propia Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros, lo cual constituye una grave omisión, más aún que el Estado Peruano en atención a su calidad de garante tiene el deber de permitir, proteger y realizar en el país los derechos humanos que han sido materia de los tratados internacionales que ha suscrito y ratificado, más aún de los grupos poblacionales más vulnerables, como el conformado por los niños.

Sin perjuicio de lo expresado, resulta un acierto la materialización del reconocimiento del niño como "sujeto de derechos" cuando, por ejemplo, se establece que aquel tiene expeditos los siguientes derechos:

- a) Mantener relaciones personales con su familia y otras personas cercanas como amigos o vecinos.
- b) Gozar de un defensor público que le brinde asesoría especializada y lo represente durante la actuación estatal.

- c) Opinar y que su parecer sea tomado en cuenta en todas las decisiones estatales.
- d) Ser informado de las medidas de protección dispuestas a su favor, así como sobre la situación de los miembros de su familia y estado del procedimiento.
- e) Solicitar la variación o remoción de la medida de protección; mular quejas o peticiones a la autoridad competente.
- f) Formular quejas o peticiones a la autoridad competente. (SOKOLICH ALVA, 2017)

Debemos recordar que el reconocimiento del niño como sujeto de derechos es en la línea del tiempo de la evolución de los derechos de la infancia el punto de partida del cambio de la doctrina de la situación irregular a la doctrina de la protección integral que proclama la Convención sobre los Derechos del Niño, de tal forma que el niño deja de ser considerado como propiedad de sus padres u objeto de tutela por parte del Estado, para ser reconocido como un ser humano titular de derechos.

Este reconocimiento del niño como sujeto de derechos lo encontramos igualmente desarrollado en los artículos 14, 17 y 20 del Decreto Legislativo N° 1297, al gozar el niño de los siguientes derechos:

- a) Solicitar la actuación de diligencias, evaluaciones o presentar los documentos que considere pertinentes.
- b) Comunicar la situación de riesgo o desprotección familiar en la que se encuentre, sin exigencia de requisito alguno.
- c) Ser informado verbalmente del estado del procedimiento.

De otro lado, a la familia de origen del niño se le garantiza los siguientes derechos:

- a) Ser informada de los alcances y desarrollo del procedimiento por riesgo o desprotección familiar.
- b) Ser notificada de todas las decisiones que se tomen en el procedimiento, excepto aquellas de mero trámite o las dictadas para impulsar el procedimiento.
- c) Mantener contacto con la niña, niño o adolescente.
- d) Contar con un abogado que la asista en la defensa de sus intereses durante la actuación estatal.
- e) Participar en la elaboración e implementación del plan de trabajo individual y que su opinión sea valorada por el equipo responsable de la evaluación de dicho plan.
- f) Presentar los recursos impugnatorios a que hubiera lugar. (SOKOLICH ALVA, 2017)

La participación activa de la familia es significativa, pues en atención a que lo que es materia de investigación es la presunta situación de riesgo o desprotección familiar de un niño, corresponde a la familia de origen coadyuvar al esclarecimiento de los hechos que hubieran dado lugar a la investigación, y, en su caso, contradecirla a efectos de propiciar la reintegración familiar.

2.4.3.3 Situaciones de Riesgo o Desprotección Familiar. (MANUAL CANTABRIA, 2010)

La crianza de los hijos e hijas no es tarea fácil. Muchos padres y madres tienen dificultades para responder a las exigencias del rol parental. No obstante, la mayoría son capaces, con sus propios recursos personales y los apoyos externos con los que cuentan, de superar estas dificultades y cumplir adecuadamente con sus responsabilidades parentales.

Sin embargo, en algunos casos aparecen serias dificultades que impiden a los padres y madres satisfacer las necesidades de sus hijos e hijas. Cuando se dan estas circunstancias se dice que ese niño, niña o adolescente se encuentra en una situación de desprotección infantil y necesita de una “especial protección”:

- Entendemos por desprotección infantil cuando un niño, niña o adolescente tiene sus necesidades básicas sin satisfacer y sufre un daño físico o emocional, o se encuentra en riesgo serio de sufrir ese daño, como consecuencia del comportamiento de sus padres o cuidadores.

Un niño, niña o adolescente se encuentra en una situación de Desprotección Familiar cuando:

No tiene satisfechas sus necesidades básicas, esta situación le ha producido un daño y se debe al comportamiento de sus padres.

La existencia o no de una situación de desprotección se define exclusivamente por sus consecuencias y no por sus causas.

- Se considera que requieren de una especial protección todos los niños, niñas y adolescentes que siendo menores de 18 años se encuentran en alguna de estas situaciones:
 - Riesgo de desprotección: viven y se desenvuelven en entornos familiares y sociales cuyas condiciones pueden provocar un daño significativo a corto, medio y/o largo plazo en su bienestar y desarrollo.
 - Desprotección: tienen sus necesidades básicas sin cubrir a causa de:
 1. Circunstancias familiares y/o el comportamiento de sus padres y madres, responsables legales o adultos que conviven en la familia, o
 2. Problemas o circunstancias externas fuera del control de sus padres y madres o responsables legales

A. Situación de Riesgo de Desprotección Familiar.

Para consensuar una definición de situación de riesgo de desprotección familiar se parte de la definición contenida en el artículo 3 inciso f) del Decreto Legislativo N°1297, señalando:

“Es la situación en la que se encuentra una niña, niño o adolescente donde el ejercicio de sus derechos es amenazado o afectado, ya sea por circunstancias personales, familiares o sociales, que perjudican su desarrollo integral sin revestir gravedad, y no son o no pueden ser atendidos por su familia. Esta situación requiere la actuación estatal adoptando las medidas necesarias para prevenir la desprotección familiar, sin que en ningún caso justifique la separación de la niña, niño o adolescente de su familia de origen”.

Del mismo modo, el Reglamento del Decreto Legislativo N°1297 en su artículo 3 señala las circunstancias o supuestos del procedimiento por riesgo de desprotección familiar:

- a) Violencia física o psicológica en agravio de la niña, niño o adolescente, que no constituya una situación grave de acuerdo a la Tabla de Valoración de Riesgo.

- b) Deserción escolar, ausentismo esporádico o abandono escolar sin razones justificadas.
- c) Incapacidad o imposibilidad de controlar situaciones conductuales de la niña, niño o adolescente que puedan conllevar a una situación de desprotección familiar, peligro inminente de hacerse daño o de hacerlo a terceras personas.
- d) Descuido o negligencia que ponen en riesgo leve el desarrollo integral de la niña, niño o adolescente, de acuerdo a la Tabla de Valoración de Riesgo.
- e) Trabajo infantil en situación de calle o aquel que suponga una afectación de derechos que no revista gravedad para la niña, niño o adolescente de acuerdo a la Tabla de Valoración de Riesgo.
- f) Otras circunstancias que, sin revestir gravedad, perjudiquen el desarrollo integral de la niña, niño o adolescente.

Estas circunstancias o supuestos dan inicio al procedimiento por riesgo de desprotección familiar.

Por lo tanto, es un estado en el que se encuentra el niño donde no existe riesgo de su vida, pero si riesgo de su formación integral es por ello, que el Estado mediante medidas de protección busca garantizar a través de un trabajo en conjunto con la familia, niño e instituciones para asegurar el restablecimiento de sus derechos y que puedan cumplir sus necesidades fundamentales.

Un niño, niña o adolescente se encuentra en riesgo de desprotección cuando vive y/o se desenvuelve en entornos familiares o sociales cuyas condiciones pueden provocar un daño significativo a corto, medio y/o largo plazo en su bienestar y desarrollo. El niño, niña o adolescente aún no ha sufrido un daño significativo, pero podría sufrirlo en un futuro próximo.

	DEFINICIÓN
RIESGO DE CUIDADO INADECUADO	Hay una situación de crisis o problemas en la familia (por ejemplo, alto nivel de estrés, consumo de drogas o alcohol de los padres, maternidad/ paternidad adolescente, aislamiento social) que se prevé pueden afectar negativamente o limitar de forma significativa a la capacidad de las figuras parentales para proporcionar un cuidado y atención adecuada al niño, niña o adolescente y provocar la aparición en un futuro próximo de situaciones de desprotección.

<p>CUIDADO PARENTAL INADECUADO</p>	<p>Las figuras parentales o las personas adultas que conviven en la familia no proporcionan al niño, niña o adolescente un trato o cuidado óptimo, pero:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esta situación no ha provocado ni se prevé que vaya a provocar a corto plazo un daño (a nivel físico, psicológico, cognitivo y/o social) o, 2. Si ha producido un daño, no es significativo (es decir, no afecta de manera relevante al desarrollo) ni se prevé que vaya a serlo a corto plazo. <p>Esto puede producirse porque:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las conductas de trato o cuidado inadecuado son de baja intensidad, o • Pueden ser de intensidad moderada pero su frecuencia es baja, produciéndose sólo de forma esporádica.
<p>OTROS</p>	<p>Otras situaciones en el entorno familiar o social que pueden influir negativamente en el desarrollo del niño, niña o adolescente. Por ejemplo, entornos sociales con imágenes identificatorias no deseables, falta de servicios, alto índice de delincuencia, marginación o violencia en el vecindario, etc.</p>

(MANUAL CANTABRIA, 2010)

B. Situación de Desprotección Familiar.

Es un estado que afecta la integridad física y psicológica, incluso puede llevar al abandono poniendo en peligro y riesgo la vida del niño. Es el estado de desprotección el que genera una medida de protección de gran relevancia puesto que, separa al niño de su familia de origen colocándolo en centros de acogida o bajo la custodia de familias de acogida. Esta separación puede ser temporal o definitiva cuando el niño es entregado en adopción previa declaración de su estado de adoptabilidad.

El Decreto Legislativo N°1297 en su artículo 3 inciso g), señala:

“Es la situación que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado desempeño de los deberes de cuidado y protección por parte de los responsables del cuidado de los niños, niñas y adolescentes y que afecta gravemente el desarrollo integral de una niña, niño o adolescente.

La situación de desprotección familiar tiene carácter provisional e implica la separación temporal de la niña, niño o adolescente de su familia para su protección, así como el apoyo especializado a la familia para la remoción de las circunstancias que la motivaron, aplicando las medidas de protección apropiadas establecidas en esta ley, promoviendo la reintegración familiar. En el caso de hermana o hermano cabeza de familia no implica la separación temporal de su familia.

Los criterios de calificación de la desprotección familiar son siempre restrictivos y objetivos.

La situación de pobreza, en ningún caso justifica, por sí sola, la separación de la niña, niño o adolescente de su familia de origen, ni

constituye desprotección familiar. Es responsabilidad del Estado incorporar a estas familias a programas y servicios de protección social. Asimismo, en ningún caso se separa a una niña, niño o adolescente de su familia por la sola razón de su discapacidad o la de cualquiera de sus miembros.

Cuando a pesar del apoyo brindado por el Estado para fortalecer las competencias de cuidado y crianza, no sea posible el retorno de la niña, niño o adolescente a su familia de origen debido a que esta no puede proveerle el debido cuidado a la niña, niño o adolescente, se declara la desprotección familiar”.

De igual forma, el Reglamento del Decreto Legislativo N°1297 en su artículo 4 señala las circunstancias o supuestos del procedimiento por desprotección familiar:

- a) El abandono de la niña, niño o adolescente, que se produce cuando faltan las personas que asumen su cuidado en ejercicio de la patria potestad, tenencia o tutela; o porque éstas no quieren o no pueden ejercerla.
- b) Amenaza o afectación grave para la vida, salud e integridad física de la niña, niño o adolescente. Entre otros:
 - b.1 Cuando se produzca violencia sexual o violencia física o psicológica grave por parte de miembros de su familia de origen o éstos lo consintieran o actuaran de manera negligente.
 - b.2 Cuando la niña, niño o adolescente haya sido identificada/o como víctima del delito de trata de personas y dicha situación se vincule al incumplimiento de los deberes de cuidado de los integrantes de la familia de origen, de acuerdo a la Tabla de Valoración de Riesgo. Corresponde al Ministerio Público determinar la participación o no de la familia de origen en el delito. Asimismo, corresponde a la Unidad de Protección Especial determinar las competencias parentales para asumir el cuidado de la niña, niño o adolescente víctima.
 - b.3 Cuando la niña, niño o adolescente consume de manera reiterada sustancias con potencial adictivo o la ejecución de otro tipo de conductas adictivas, con el conocimiento, consentimiento o tolerancia de los padres, tutores o integrante de la familia de origen responsable de su cuidado.
- c) Trabajo infantil en situación de calle o aquel que suponga una afectación de derechos que revista gravedad para la niña, niño o adolescente de acuerdo a la Tabla de Valoración de Riesgo.
- d) La inducción a la mendicidad, delincuencia, explotación sexual, trabajo forzoso o cualquier otra forma de explotación de similar naturaleza o gravedad.
- e) Otras circunstancias que perjudican gravemente el desarrollo integral de la niña, niño o adolescente y cuyas consecuencias no puedan ser evitadas mientras permanezca en su entorno de convivencia, incluidas la persistencia de situaciones de riesgo de desprotección familiar que no se han revertido a pesar de la actuación estatal.

Estas circunstancias o supuestos dan inicio al procedimiento por desprotección familiar.

Un niño, niña o adolescente se encuentra en situación de desprotección cuando tiene necesidades básicas sin satisfacer, y eso sucede durante un período de tiempo

suficientemente amplio como para provocar un daño severo en su salud y desarrollo o colocarle en riesgo de sufrirlo.

Las necesidades básicas que todo niño, niña o adolescente debe tener satisfechas para garantizar un desarrollo sano son las siguientes:

	NECESIDADES INFANTILES
NECESIDADES FÍSICAS	<ul style="list-style-type: none"> -Alimentación -Temperatura -Vestido -Higiene -Salud -Sueño -Actividad física: ejercicio y juego.
SEGURIDAD (dentro y fuera del hogar)	<ul style="list-style-type: none"> -Protección ante daños reales o situaciones que suponen un riesgo de que la menor sufra un daño significativo. -Protección ante otros adultos/menores que hacen o pueden hacer daño al menor. -Protección ante el daño que el menor puede hacerse a sí mismo.
NECESIDADES EMOCIONALES	<ul style="list-style-type: none"> -Disposición de relaciones seguras, estables y afectivas con adultos significativos. -Sensibilidad y responsividad a las necesidades del niño. -Contacto físico apropiado. -Recepción de afecto y refuerzo positivo. -Consistencia en las relaciones afectivas y en la conducta de los adultos significativos. -Continuidad en las relaciones con los familiares y otros adultos significativos. -Participación y autonomía progresivas. -Respeto al proceso de desarrollo psicosexual.
NECESIDADES SOCIALES	<ul style="list-style-type: none"> -Disposición de orientación y límites a la conducta. -Aprendizaje de control de las emociones y conductas apropiadas para la participación social y el establecimiento de relaciones adecuadas con otras personas. -Red de relaciones sociales. -Interacción lúdica.
NECESIDADES COGNITIVAS	<ul style="list-style-type: none"> -Estimulación sensorial. -Exploración física y social. -Disposición de experiencias de exploración y de aprendizaje. -Comprensión de la realidad física y social.

(MANUAL CANTABRIA, 2010)

Así pues, para definir la existencia de una situación de desprotección tienen que darse tres condiciones:

1. Una persona o servicio responsable de garantizar la satisfacción de una o varias necesidades básicas de un niño, niña o adolescente, no cumple su responsabilidad (porque no puede o no quiere). O se dan determinadas condiciones externas que impiden que esa persona o servicio las satisfaga.

2. No hay agentes externos capaces de contrarrestar esta situación y satisfacer las necesidades, o la actuación de estos agentes no es suficiente.
3. Como consecuencia de esta situación, el niño, niña o adolescente ha sufrido o es probable que sufra un daño significativo en su salud, bienestar y/o desarrollo.

Las principales causas de desprotección pueden ser debidas a:

1. La incapacidad, limitación o comportamiento inadecuado de las figuras parentales, tutores o responsables legales del niño, niña o adolescente de lo que se desprenden 4 situaciones:

- a) Imposibilidad temporal o definitiva de las madres, padres o responsables legales para ejercer los deberes de protección (Guarda o Desamparo): por fallecimiento, encarcelamiento, enfermedad física, mental o toxicomanía incapacitantes, o causa de naturaleza similar) y ausencia de familiares que se hagan cargo del cuidado de la niña, niño o joven (se incluyen menores extranjeros no acompañados).
- b) Incumplimiento por parte de la madre, padre o responsables legales de los deberes de protección: renuncia o no reconocimiento de maternidad/ paternidad, abandono total de la niña, niño o adolescente, o causa de naturaleza similar. B. Incumplimiento por parte de la madre, padre o responsables legales de los deberes de protección: renuncia o no reconocimiento de maternidad/ paternidad, abandono total de la niña, niño o adolescente, o causa de naturaleza similar.
- c) Trato inadecuado (por acción u omisión) de la madre, padre o responsables legales hacia las o los menores de edad: Situaciones de maltrato/ abandono infantil: maltrato físico, maltrato emocional, abandono emocional, abuso sexual, corrupción (explotación sexual e inducción a la delincuencia), corrupción por modelos parentales asociales, explotación laboral, maltrato prenatal, incapacidad parental de control de la conducta de la o el menor de edad.
- d) Incapacidad de la madre, padre o responsables legales para proteger al niño, niña o adolescente de las agresiones o el trato gravemente inadecuado de otras personas. Se incluyen las situaciones en que la madre, padre o responsables legales demuestran pasividad o incapacidad para proteger a sus hijas e hijos de situaciones de maltrato/abandono de gravedad moderada y elevada, infligidas por otras personas adultas o por otros menores de edad.

2. Problemas o circunstancias externas fuera del control de esas personas: En este grupo se encuentran menores de 18 años y familias que viven en comunidades que atraviesan dificultades graves de índole socioeconómica fuera del control de la madre, padre o responsables legales, que provocan que las niñas, niños y adolescentes tengan necesidades básicas sin cubrir a pesar de que el deseo de aquellos es proporcionarles un cuidado adecuado. Se trata, por ejemplo, de familias que viven en comunidades extremadamente privadas con altos índices de pobreza y desempleo, escasas ayudas sociales, ausencia de oportunidades educativas, o situaciones de guerra. En nuestra comunidad estas situaciones no son frecuentes, dado el nivel de desarrollo del Sistema de Protección Social del que disponemos y el grado de bienestar y estabilidad alcanzado.

	DEFINICION
DESPROTECCIÓN MODERADA	<p>La situación ha provocado un daño en la situación física, psicológica, cognitiva y/o social del niño, niña o adolescente o se prevé que lo va a provocar, pero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • su desarrollo no se encuentra comprometido ni requiere tratamiento especializado intensivo para la resolución de sus problemas (tratamiento médico, tratamiento psiquiátrico, programas específicos para la recuperación de retrasos en el desarrollo, etc.), y/o • el daño actual o potencial en el desarrollo es mayor, pero el pronóstico para la rehabilitación familiar parece positivo porque los padres o responsables legales: <ol style="list-style-type: none"> 1. Muestran conciencia de sus problemas (bien desde un principio o como consecuencia del trabajo de concienciación llevado a cabo por los Servicios Sociales), 2. Muestran disposición suficiente a colaborar con los servicios comunitarios para mejorar la situación de sus hijas o hijos, y 3. Los recursos necesarios para la familia están disponibles en las condiciones requeridas.
DESPROTECCIÓN GRAVE	<p>La situación ha provocado o se prevé que va a provocar a corto plazo un daño significativo, sea a nivel físico, psicológico, cognitivo y/o social, a consecuencia de lo cual su desarrollo se encuentra o se va a encontrar seriamente comprometido, y requiere o va a requerir tratamiento especializado intensivo para la resolución de sus problemas. (tratamiento psicológico, psiquiátrico, médico, programas específicos para la recuperación de retrasos en el desarrollo, programas de atención temprana, etc.)</p>

(MANUAL CANTABRIA, 2010)

2.4.3.4 Medidas de Protección frente a la Situación de Riesgo o Desprotección Familiar. (DEFENSORIA DEL PUEBLO, 2010)

El artículo 4º de la Constitución consagra una protección general a los niños, niñas y adolescentes por su condición de tales, y pone el énfasis en proteger a aquéllos y aquéllas que se encuentran en situación de riesgo o abandono y que por tal motivo merecen un tipo de protección especial de carácter reforzado.

En tal sentido, si como consecuencia de la inexistencia de un núcleo familiar o de la presencia de determinadas situaciones conflictivas o problemáticas en el seno de una familia se constata una situación que vulnera o amenaza gravemente los derechos de los niños, niñas y adolescentes y, por ende, su protección y cuidado, corresponde al Estado, en forma subsidiaria, dictar medidas especiales de protección, ya que el Estado es el garante de los derechos fundamentales de las personas —en especial de aquellas pertenecientes a los grupos más vulnerables—, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1º, 4º y 44º de la Constitución.

A. Definición.

En el Informe Defensorial N° 150 se definió a las medidas de protección como las diversas acciones estatales llevadas a cabo mediante órganos especializados, orientadas a compensar carencias materiales y/o afectivas que afecten a los niños, niñas y/o adolescentes y que

han sido generadas por una situación de grave desestructuración o conflicto familiar o por la inexistencia de una familia nuclear o extensa.

El objetivo fundamental de estas medidas es revertir la situación de desprotección que atraviesa un niño, niña y/o adolescente, por medio de la restitución de sus derechos fundamentales, en cumplimiento del principio del Interés Superior del Niño.

Asimismo, en el Informe Defensorial citado se propuso que las medidas de protección deben ser diseñadas e implementadas desde el reconocimiento de la corresponsabilidad estatal y social establecida en el artículo 4° de la Constitución Política. A su vez, se planteó que dichas medidas deberían incluir servicios de apoyo o asesoría a los integrantes de la familia para evitar que se refuercen las circunstancias que amenacen o vulneren sus derechos, en virtud de lo sostenido por la Doctrina de la Protección Integral, que reconoce al niño, niña y adolescente como sujetos de derechos y, a sabiendas de esta condición, exige la protección de sus derechos, incluso dentro de la propia familia.

Ahora bien, la adopción de esas medidas de protección exige el diseño de un procedimiento que permita implementarlas en forma adecuada, a fin de enfrentar la situación de vulneración de derechos que se ha originado y lograr su restitución.

Así, el Decreto Legislativo N°1297 en su artículo 3 inciso h) definen las medidas de protección:

“Son actuaciones o decisiones que se adoptan a favor de una niña, niño o adolescente en situación de riesgo o desprotección familiar, para garantizar o restituir sus derechos y satisfacer sus necesidades.

Las medidas de protección pueden ser de carácter provisional o permanente.

Estas últimas no tienen carácter definitivo, con excepción de la adopción y pueden ser modificadas, en base a su interés superior y el principio de idoneidad.

La declaración de desprotección familiar tiene por finalidad además otorgar una modalidad de cuidado alternativa duradera y estable para la niña, niño o adolescente que garantice su derecho a vivir en una familia o en un entorno familiar”.

Por lo tanto, las medidas de protección responden a un trabajo en equipo multidisciplinario en el cual interviene el Estado, la sociedad y la comunidad para proteger y cumplir con la especial protección que el niño se merece. En consecuencia, los sujetos que intervienen en los procedimientos y deber de colaboración asumen distintas funciones en el marco del Decreto Legislativo N°1297:

- El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se encarga de organizar todo el sistema, acreditar el funcionamiento de las organizaciones e instituciones que forman parte del programa y supervisar su adecuado funcionamiento.
- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es el encargado de proveer la defensa pública a los niños, niñas y adolescentes e incluso a las familias que lo requieran.
- El Ministerio Público, por su parte es el encargado del control de las garantías, se encarga de verificar el debido proceso, que exista legalidad y que se cuente con los principios constitucionales o de derecho.
- El Poder Judicial, es el encargado del control de la legalidad, declarar las medidas de protección, el estado de desprotección, la acogida o el estado de adoptabilidad.

- La Policía Nacional del Perú, también es un ente colaborador de garantizar el adecuado funcionamiento de las medidas de protección.
- Los Gobiernos Locales a través de las Demunas, es el encargado de dar a conocer el estado de desprotección de los niños considerando su entorno más cercano, la sociedad y la comunidad forman parte esencial como terceros de interés que es cualquier persona natural o jurídica, que puede denunciar un tipo de estado de riesgo o desprotección de una niña niño o adolescente. (ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA DEL PERU, 2018)

Además, para poder dictar y aplicar las medidas de protección es necesario un instrumento denominado plan de trabajo individual, el cual considera los objetivos; metodología a seguir; metas trazadas; los plazos de cumplimiento; un seguimiento exclusivo y evaluación del trabajo que se viene desarrollando, es así que, para garantizar la adecuada actuación de las autoridades y de la sociedad en general así como el de la familia, es que, esta norma se fundamenta en los principios orientadores enmarcados en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1297, señalados en líneas preliminares.

B. Medidas de Protección en Situaciones de Riesgo de Desprotección Familiar. (SOKOLICH ALVA, 2017)

Conforme al artículo 27 del Decreto Legislativo N°1297 el procedimiento por riesgo tiene 2 etapas:

1. Evaluación de la situación socio-familiar del niño.
2. Implementación del plan de trabajo individual orientado a modificar o neutralizar la situación de riesgo.

La primera etapa supone la obligación de la autoridad administrativa de identificar aquellos factores que podrían implicar riesgo para un niño, a partir de lo cual decide abrir o no el respectivo procedimiento por riesgo.

De abrirse el aludido procedimiento, corresponde a la autoridad, entre otros, adoptar las medidas de urgencia para la atención de las necesidades inmediatas del niño, más aún si se declara la situación de riesgo provisional, caso un equipo interdisciplinario, entendemos conformado por diversos profesionales (psicólogos, asistentes sociales y terapeutas familiares), procederá a trabajo indicado para el caso en concreto, el cual incluye las acciones de protección que resulten pertinentes.

De la misma forma, el artículo 32 establece las medidas de protección que pueden disponerse:

- a) apoyo a la familia para fortalecer competencias de cuidado y crianza;
- b) acceso a servicios de educación y salud para niñas, niños y adolescentes;
- c) acceso a servicios de atención especializada;
- d) apoyo psicológico a favor de la niña, niño o adolescente y su familia;
- e) acceso a servicios para prevenir y abordar situaciones de violencia;
- f) acceso a servicios de cuidado;
- g) acceso a servicios de formación técnico productivo para la, o el adolescente y su familia;
- h) inclusión a programas sociales;
- i) otras que fueran necesarias.

Como es de colegir, el legislador deja sentada la posibilidad de que se adopten otras medidas orientadas a salvaguardar la integridad y el efectivo ejercicio de los derechos de un niño, enfocándose la protección desde b la perspectiva del fortalecimiento de la familia y satisfacción del bienestar e intereses del niño.

Al respecto, resulta oportuno resaltar que, en relación a las medidas de protección de un niño, las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños establecen las siguientes pautas a ser observadas por los Estados:

1. Elaborar y aplicar políticas coherentes y mutuamente complementarias orientadas a la familia con objeto de promover y reforzar la capacidad de los padres para cumplir sus deberes de cuidado de sus hijos.
2. Aplicar medidas eficaces para prevenir el abandono de niños, la renuncia a la guarda y la separación del niño de su familia. En ese sentido, las políticas y programas sociales deben brindar a las familias los medios para adquirir la conciencia, las aptitudes, las capacidades y las herramientas que les permitan proveer debidamente a la protección, el cuidado y el desarrollo de sus hijos mediante medidas de protección sociales que comprendan lo siguiente:
 - a) Servicios de mejora del medio familiar, como la educación parental, el fomento de relaciones positivas entre los padres y los hijos, las técnicas de solución de conflictos, oportunidades de empleo y de generación de ingresos y, de ser necesario, asistencia social.
 - b) Servicios de apoyo social, como servicios de guardería, mediación y conciliación, tratamiento de la toxicomanía, ayuda económica y servicios para los padres e hijos que sufren algún tipo de discapacidad.
 - c) Políticas juveniles dirigidas a facultar a los jóvenes para hacer frente de una manera positiva a los desafíos de la vida cotidiana, en especial al decidir abandonar el hogar familiar, y a preparar a los futuros padres a adoptar decisiones fundamentadas con respecto a su salud sexual y reproductiva ya asumir sus responsabilidades a este respecto.
3. Preparar, ejecutar y evaluar las medidas de protección a del niño con la participación de sus padres o tutores legales y la de sus guardadores y cuidadores familiares potenciales, tomando debidamente en consideración las necesidades particulares, creencias y deseos especiales del niño.

C. Medidas de Protección en Situaciones de Desprotección Familiar.²

Acorde al artículo 46 del Decreto Legislativo N°1297 el procedimiento por Desprotección Familiar tiene 2 etapas:

1. Evaluación de la situación socio-familiar del niño.
2. Implementación del plan de trabajo individual y seguimiento a las medidas de protección.

Luego de emitida la resolución de inicio se realizan las actuaciones o diligencias dirigidas a conocer la situación socio familiar de la niña, niño o adolescente a fin de evaluar los factores de riesgo y protección.

La etapa inicial comprende las entrevistas, visitas domiciliarias, evaluaciones medias, psicológicas, y todo tipo de actos dirigidos a determinar la situación socio-familiar. A su vez, alcanza a los miembros de su familia, incluida la familia extensa, o personas que puedan brindar información relevante sobre su situación personal y familiar.

Si durante la evaluación surgen indicios que la niña, niño o adolescente ha sido víctima de algún delito, la autoridad competente procede de manera inmediata a poner esta situación en conocimiento del Ministerio Público.

² Decreto Legislativo N°1297, Decreto Legislativo para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Sin Cuidados Parentales o en Riesgo de Perderlos, Artículos N° 46; 47;50 y 51.

Así, luego de escuchar la opinión del niño, niña o adolescente, si de las actuaciones realizadas consta la situación de desprotección familiar provisional, se emite la resolución declarando la misma.

Dicha resolución debe disponer la aplicación de la medida de acogimiento familiar o residencial, según corresponda en aplicación del principio de idoneidad. De la misma forma, produce la asunción automática de la tutela estatal por parte de la autoridad competente. Asimismo, produce de forma automática la suspensión de la patria potestad o de la tutela.

C.1 Medidas de Protección Provisionales.³

El Decreto Legislativo N°1297 en su artículo 59 señala las clases de medidas de protección provisionales:

- a) Acogimiento Familiar
- b) Acogimiento Residencial

La autoridad competente puede remover o variar la medida de protección de oficio o a pedido de parte, mediante resolución debidamente motivada cuando las circunstancias objetivas que la motivaron se hubieran modificado.

Las medidas de protección provisionales por desprotección familiar, tiene un plazo máximo de 18 meses, prorrogable por 6 meses, cuando existan causas justificadas que lo ameriten en función de su Interés Superior. Transcurrido ese plazo la autoridad competente resuelve la reintegración familiar y retorno de la niña, niño o adolescente a su familia o promueve la declaración judicial de desprotección familiar y la adopción de una medida de protección de carácter permanente.

- a) Acogimiento Familiar.

El acogimiento familiar como medida de protección del menor está concebida en interés de los mismos y tiene como finalidad procurar al menor separado de su familia la atención en un contexto familiar o de convivencia adecuado, ya sea con carácter provisional, temporal, permanente o como paso previo para la adopción.

Se formalizará por resolución de la Entidad Pública que tenga la tutela o la guarda, previa valoración de la adecuación de la familia para el acogimiento. En esta valoración se tendrá en cuenta su situación familiar y aptitud educadora, su capacidad para atender adecuadamente las necesidades de toda índole del menor o menores de que se trate, la congruencia entre su motivación y la naturaleza y finalidad del acogimiento según su modalidad, así como la disposición a facilitar el cumplimiento de los objetivos del plan individual de atención y, si lo hubiera del programa de reintegración familiar, propiciando la relación del menor con su familia de procedencia. (BERROCAL LANZAROT, ANA ISABEL et al, 2017)

Ahora bien, el acogimiento familiar supone la guarda del menor y el ejercicio del contenido personal de la patria potestad, por lo que se impone a los acogedores las obligaciones de velar por él, tenerlo en su alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral en un entorno afectivo.

Tiene carácter preferente frente al acogimiento residencial y supone la integración de un menor en un entorno familiar diferente al de su familia biológica. (GONZALEZ PILLADO, ESTHER et al, 2004)

Conforme al artículo 65 del Decreto Legislativo N°1297 existen 3 clases de Acogimiento Familiar:

1. Acogimiento Familiar en Familia extensa.

³ Decreto Legislativo N°1297, Decreto Legislativo para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Sin Cuidados Parentales o en Riesgo de Perderlos, Artículos N° 59;61; y 63.

Esta medida de protección se aplica con aquella familia extensa que ha sido evaluada favorablemente para asumir el cuidado y protección de la niña, niño o adolescente. Es acompañada y apoyada profesionalmente, de manera permanente.

2. Acogimiento Familiar con Tercero.

El acogimiento familiar con tercero, se aplica con una persona o familia que no forma parte de la familia extensa de la niña, niño o adolescente, que previamente ha sido seleccionada, y declarada idónea para ser familia acogedora. Es acompañada y apoyada profesionalmente, de manera permanente

En estos casos, se da preferencia a la persona o familia que haya tenido vínculo afectivo con la niña, niño o adolescente con anterioridad.

3. Acogimiento Familiar Profesionalizado.

El acogimiento familiar profesionalizado es el que se brinda a niñas, niños o adolescentes con características especiales, por una persona o familia especialmente calificada, a condición de una subvención económica para los gastos de manutención de la niña, niño o adolescente, que incorpora su atención profesionalizada, bajo supervisión de la autoridad competente.

b) Acogimiento Residencial.

El acogimiento residencial representa una medida de protección que consiste en la prestación de servicios de alojamiento, manutención, apoyo educativo y atención integral del menor en un centro de carácter residencial.

Se establece, en interés del menor, la prioridad del acogimiento familiar sobre el residencial. No obstante, se introduce en este último acogimiento para dar cobertura a aquellos supuestos en los que, por motivos debidamente justificados, el ingreso sea la única medida que se regule de manera flexible en un centro de protección disponga, o cuando el acogimiento residencial convenga al interés superior del menor.

Por otra parte, en lo relativo a los servicios de acogimiento residencial se establecen con carácter general los criterios de calidad y las características básicas, su necesario ajuste al carácter preferente de las soluciones familiares. Asimismo, todos los centros de acogimiento residencial que presten servicios en el ámbito de protección deberán estar siempre habilitados administrativamente por la Entidad Pública. (BERROCAL LANZAROT, ANA ISABEL et al, 2017)

Puesto que todas las normas relativas a la protección de menores abogan por que el menor se desarrolle en un ambiente familiar, intentando conseguir núcleo familiar de acogida. Por consiguiente, el acogimiento residencial tiene carácter subsidiario, pues sólo tendrá lugar cuando se hayan agotado todas las posibilidades de mantener al menor en su familia o bien no sea posible o no se considere adecuado el acogimiento familiar.

Además, esta medida se mantendrá por el tiempo estrictamente necesario y se promoverá la integración del menor en su entorno social, así como su acceso a los sistemas ordinarios educativos, sanitarios y laborales, teniendo presente, en todo momento, que los menores educativos individualizados que atiendan a sus circunstancias personales y socio familiares y que se recogerán en un proyecto educativo para cada menor, aunque los centros de atención a menores también deben contar con un proyecto general. (DE LA PRESENTACION BOCCIO SERRANO, 2017)

De la misma forma, el Reglamento del Decreto Legislativo N°1297 en su artículo 99 señala las finalidades de la medida de acogimiento residencial:

- a) Brindar un cuidado alternativo individualizado que brinde oportunidades a la niña, niño o adolescente para lograr su

desarrollo integral en atención a sus necesidades y su interés superior.

- b) Posibilitar la reintegración familiar.
- c) Favorecer la integración a una familia adoptiva cuando se ha declarado judicialmente la desprotección familiar y su adoptabilidad.
- d) Preparación para la vida independiente.

La medida de acogimiento residencial es exclusiva del procedimiento por desprotección familiar y se dicta considerando el perfil de atención del Centro de Acogida Residencial en forma motivada, bajo responsabilidad del que dicta la medida.

C.2 Medidas de Protección Permanentes.⁴

Las medidas de protección que se aplica cuando se declara judicialmente la desprotección familiar, tienen carácter permanente pero no definitivo, con excepción de la adopción y pueden ser modificadas, en base al interés superior y el principio de idoneidad.

El acogimiento familiar o residencial es periódicamente revisado cada 6 meses por la autoridad competente y puede ser variado o revocado de acuerdo a lo señalado en los artículos 60, 66 y 88 del Decreto Legislativo N°1297, en lo que fuera pertinente.

Asimismo, en su artículo 118 el Decreto Legislativo N°1297 establece los tipos de medidas de protección:

- a) Acogimiento familiar
- b) Acogimiento residencial
- c) Adopción

Los 2 primeros tipos de acogimiento se brindan en una familia o centro de acogida respectivamente, con la finalidad de cubrir las necesidades de las niñas, niños y adolescentes en un entorno familiar, hasta que alcancen independencia y autonomía.

El acogimiento residencial como medida de protección, es excepcional. Se aplica solo en aquellos casos en los que se acredite que es la única medida posible que responde a su Interés Superior.

2.5 HIPÓTESIS

2.5.1 Hipótesis General

La creación de Centros de Acogida Residencial para menores de edad en desprotección familiar, garantizan el Interés Superior del Niño por lo tanto el Estado cumple con otorgar las medidas de protección integral.

2.5.2 Hipótesis Específica

Se vulnera el Interés Superior del Niño con la ausencia de Centros de Acogida Residencial para menores de edad en desprotección familiar

⁴ Decreto Legislativo N°1297, Decreto Legislativo para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Sin Cuidados Parentales o en Riesgo de Perderlos, Artículos N° 117; 118 y 119.

CAPITULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1. ENFOQUE Y DISEÑO.

3.1.1 Enfoque.

➤ Cuantitativo no experimental: La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo no experimental, en cuanto involucra un proceso de estudio que se relaciona con fundamentos estadísticos, a través de un análisis de causa-efecto. En la que se ha usado una recolección de datos para probar nuestras hipótesis, analizándose los datos obtenidos y formando así nuestras conclusiones.

3.1.2 Diseño.

➤ No Experimental: En razón de que en esta investigación no se manipularán las variables de manera deliberada, sino que se observará el fenómeno tal y como se da en su contexto natural para ser posteriormente analizado.

➤ Descriptivo: ya que el propósito del investigador es analizar y recolectar información acerca de la desprotección familiar y del Principio del Interés Superior del Niño, así como describir situaciones y eventos acerca de la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes cuando sean sujetos de desprotección familiar; para de esta manera determinar si se vulnera o no el antes mencionado principio del Interés Superior del Niño en la presente investigación.

➤ Documental: La presente investigación se basará en un diseño documental, que consiste en un proceso basado en la búsqueda, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales como son: impresas, audiovisuales o electrónicas.

3.2. NIVEL.

➤ Correlacional: Dentro del nivel que enfocamos nuestra investigación es de tipo correlacional, en cuanto se encarga de medir dos o más niveles buscando que ambas se encuentren relacionadas con los mismos sujetos.

Siendo que nuestra investigación busca determinar la ausencia de Centros de Atención Residencial para menores de edad en desprotección familiar, lo que conllevará a establecer la necesidad de implementar los mismos en el Distrito de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre.

3.3. TIPO.

➤ Básica: El presente trabajo de investigación tiene como finalidad la obtención y recopilación de información para ir construyendo una base de conocimiento que se va agregando a la información previa existente.

➤ Polivariable: Se utiliza para estudiar las relaciones que hay entre variables tomadas de dos en dos.

3.4. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN.

En el presente trabajo de investigación se realizarán encuestas a las principales autoridades judiciales y administrativas del Distrito de Piura que toman conocimiento de procesos civiles en materia de familia, tales como Fiscales Especializados en Materia de Familia, Jueces que conocen causas en Materia de Familia, Abogados especialistas en la materia, Dirigentes de Instituciones Administrativas encargadas de velar por el cuidado de los menores en desprotección familiar y Psicólogos.

3.5. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS.

➤ Método Exegético: Este método hará referencia al estudio lineal de las normas, es por ello que solo puede ser utilizado para estudiar o interpretar normas legales relacionadas al trabajo de estudio.

➤ Método Empírico: Recojo de información, mediante encuestas, junto con la observación de los datos obtenidos, se podrá llegar a una conclusión acertada.

➤ Método Dogmático: Por medio de este método se tendrá en cuenta lo precisado por la fuente doctrinaria con la finalidad de estudiar la institución Jurídica que será utilizada en la presente investigación, en consecuencia, se acudirá a la doctrina nacional y extranjera, de tal manera que dicha contribución se relaciona a los resultados de la investigación.

➤ Método Analítico Sintético: Este método consiste en el análisis, es decir en la separación de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos para examinar y así entender cada una de sus partes. Por otro lado, el método Sintético Implica la síntesis es decir unión de elementos para formar un todo.

➤ Método Inductivo: Este método consiste en que va de lo particular a lo general; es decir que se analiza de manera independiente cada una de las partes del trabajo de investigación, tales como determinar la ausencia de Centros de Atención Residencial para menores de edad en desprotección familiar, también de qué manera se vulneraría el principio del Interés Superior del Niño. Asimismo, tratándose de la aplicación del método deductivo se logrará comprobar los resultados que se obtengan.

➤ Método Sociológico: Su aplicación está relacionado con la problemática que se presenta con la ausencia de centros de acogida residencial para menores en desprotección familiar, teniendo en cuenta que el hecho de su existencia concibe que el Derecho deba pronunciarse.

➤ Método Descriptivo: Por medio de éste método se describirá, analizará e interpretará aquellos resultados que se obtengan según la variable de estudio en el trabajo de investigación. Por lo tanto, en aquellas investigaciones que son de tipo descriptiva son denominadas también investigaciones diagnósticas ya que van a consistir básicamente en describir y caracterizar.

La información se procesará de acuerdo a los logros obtenidos mediante las técnicas, fuentes e instrumentos empleados para la recolección de la información. De esta forma, los datos obtenidos se analizarán detalladamente con la finalidad de dar validez a la hipótesis planteada.

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.

➤ La técnica de recolección se llevará a cabo por medio de encuestas realizadas a operadores jurídicos, abogados que conocen de procesos judiciales en materia de familia, así como autoridades administrativas encargadas de velar por el cuidado de los menores en desprotección familiar y psicólogos.

➤ Recolección y Análisis de datos: por medio de esta técnica se analizará minuciosamente la información doctrinaria y legislativa sobre el tema objeto de nuestra investigación.

3.7 POBLACIÓN Y MUESTRA.

3.7.1 Población.

La población materia de estudio en esta investigación fueron 32 autoridades judiciales y administrativas del Distrito de Piura que toman conocimiento de procesos civiles en materia de familia, como Fiscales Especialistas en Materia de Familia, Jueces que conocen causas en Materia de Familia, Abogados especialistas en la materia, dirigentes de Instituciones Administrativas encargadas de velar por el cuidado de los menores en desprotección familiar y Psicólogos, a ser ellos los vinculados a los procesos de desprotección familiar de los niños niñas y adolescentes a efecto de restituir los derechos de los menores de edad.

Población Objeto de Estudio	
Fiscales Especialistas en Materia de Familia.	4
Jueces Especialistas en Materia de Familia.	3
Abogados Especialistas en Materia de Familia.	10
Dirigentes de Instituciones Administrativas	3
Psicólogos.	10
TOTAL	30

3.7.2 Muestra.

Para nuestra investigación empleamos una muestra intencional u ofimático, seleccionando sus elementos según juicios previos.

Dada la finalidad de nuestra investigación nuestra muestra fue de 17 encuestados entre profesionales del derecho, por ser ellos sujetos intervinientes en los procedimientos y declaración de desprotección de los menores de edad; también 10 psicólogos ya que el niño, niña o adolescente al encontrarse en desprotección le genera desbalance emocional y psicológico; y 3 Dirigentes Administrativas al ser estas quienes tienen el cargo de Directoras de los albergues en el Distrito de Piura.

Muestra Objeto de Estudio	
Ministerio Publico de Piura	4
Corte Superior de Justicia de Piura	3
Unidad de Protección Especial de Piura y	
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Piura.	10
Casas Hogares y Aldea Infantil de Piura	3
Unidad de Protección Especial de Piura.	10
TOTAL	30

DECLARACIÓN JURADA

DE ORIGINALIDAD DE TRABAJO DE INVESTIGACION

Yo: Francis Ivette Peña Torres
 identificada con CU/DNI-N° 75662515, en la condición de Estudiante () Egresante ()
 Egresado ☒ de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y domiciliada
 en Calle 1-16 H. Bartolomé - AA.H.H. Distrito Chulucanas
 Provincia Moquegua Departamento Piura
 Celular: 943785367 Email: Francis724@gmail.com

DECLARO BAJO JURAMENTO: que el trabajo de investigación que presento a la Oficina Central de Investigación (OCIN), es original, no siendo copia parcial ni total de un trabajo de investigación desarrollado, y/o realizado en el Perú o en el Extranjero, en caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el Art. N° 411, del Código Penal concordante con el Artículo 34° del TUO de la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General, y Ley del Procedimiento Administrativo General y las Normas Legales de Protección a los Derechos de Autor.

En fe de lo cual firmo la presente.



Piura 25 de Septiembre del 2019.

Francis Ivette Peña Torres
 DNI N° 75662515

Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Art. 4. Inciso 4.12 del Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales -RENATI Resolución de Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU/CD

CAPITULO IV

PROBANZA DE LA HIPOTESIS

4.1 PROBANZA JURÍDICA SOCIAL Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

En el presente trabajo de investigación se analizará y demostrará la probanza de las hipótesis planteadas en su dimensión jurídica- social, así como a través de la aplicación de encuesta, a fin de determinar el sentido afirmativo de las mismas, generando con ello que la investigación realizada en el presente trabajo cumpla con las expectativas jurídicas planteadas en las hipótesis, las cuales son las siguientes: La creación de Centros de Acogida Residencial para menores de edad en desprotección familiar, garantizan el Interés Superior del Niño por lo tanto el Estado cumple con las medidas de protección integral y Se vulnera el Interés Superior del Niño con la ausencia de Centros de Acogida Residencial para menores de edad en desprotección familiar.

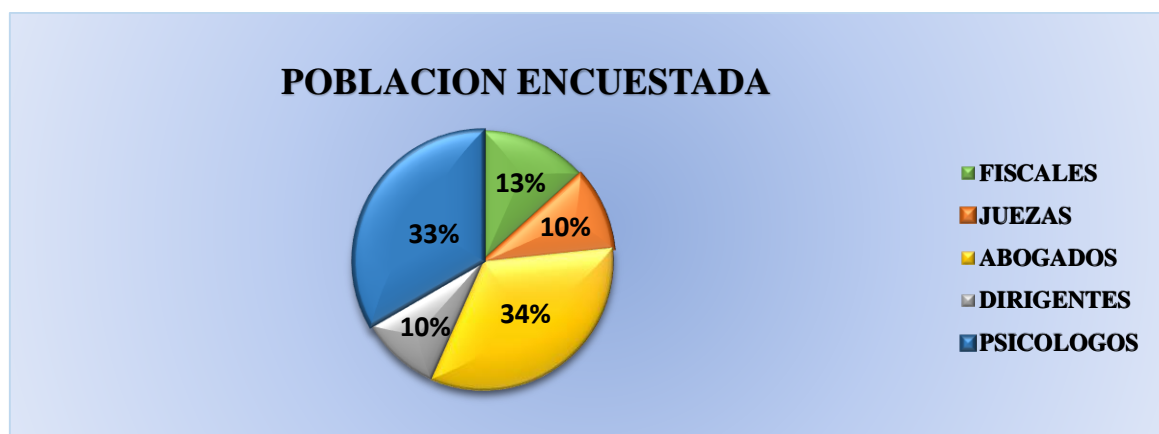
La aplicación de la encuesta fue dirigida a Fiscales Especialistas en Materia de Familia, Juezas Especialistas en Materia de Familia, Abogados Especialistas en Materia de Familia, Dirigentes de Instituciones Administrativas encargadas de velar por el cuidado de los niños, niñas y adolescentes en desprotección familiar y Psicólogos, la cual cuenta con diez preguntas, las preguntas se refieren a los menores de edad en desprotección familiar, la afectación a su autoestima, las desventajas de no contar con Centros de Acogida Residencial y ventajas de contar con los mismos, la vulneración al Interés Superior del Niño, y la necesidad de implementar Centros de Acogida Residencial en la jurisdicción del Distrito de Piura; Castilla y Veintiséis de Octubre, con la finalidad de recolectar datos reales de la situación que se genera con la falta de Centros de Acogida Residencial para menores de edad en desprotección familiar.

Cuadro 4.1

Población Encuestada

Población Encuestada	Total de Encuestados
FISCALES	4
JUEZAS	3
ABOGADOS	10
DIRIGENTES	3
PSICOLOGOS	10
TOTAL	30

Grafico 4.1



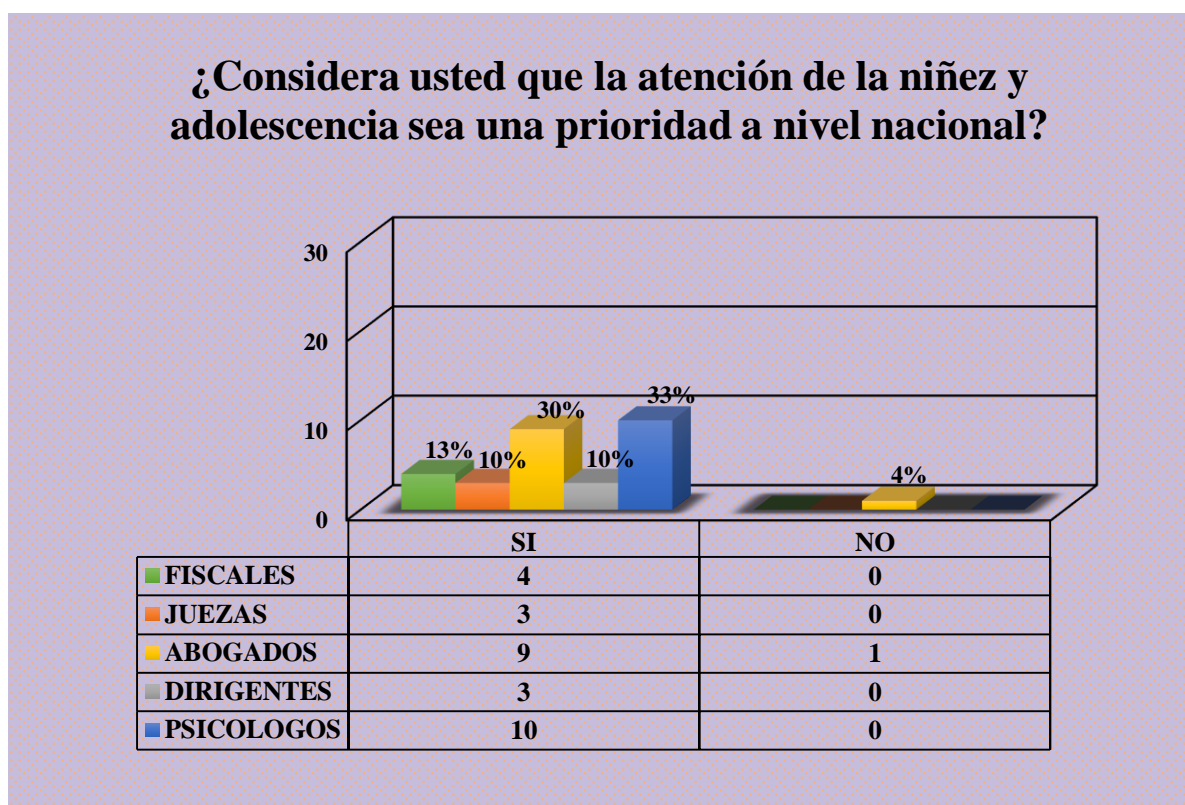
Fuente: Encuesta realizada.

Pregunta 01. ¿Considera usted que la atención de la niñez y adolescencia sea una prioridad a nivel nacional?

Cuadro 4.2

		SI	NO
FISCALES	4	4	0
JUEZAS	3	3	0
ABOGADOS	10	9	1
DIRIGENTES	3	3	0
PSICOLOGOS	10	10	0
TOTAL		30	

Grafico 4.2



Fuente: Encuesta realizada.

Interpretación: De acuerdo al grafico se observa que, del total de 30 profesionales encuestados: tales como las 4 Fiscales, 3 Magistradas, 9 Abogados, 3 Dirigentes y 10 Psicólogos consideran que la atención de la niñez y adolescencia sea prioridad a nivel nacional, así como un Abogado no discurre en lo mismo. Asimismo, se tiene que el 96% de los profesionales reconocen la atención de la niñez y adolescencia como prioridad a nivel nacional y solo el 4% no coincide con ello.

Comentario: Según los resultados que arroja la encuesta realizada concluimos que, el mayor porcentaje (96%) de encuestados concuerdan en que la atención de la niñez y adolescencia debe ser una prioridad a nivel nacional.

En ese sentido, las niñas, niños y adolescentes son «sujetos de derecho». La condición de sujeto de derechos no es un atributo exclusivo de las personas adultas. Las personas no pueden ser discriminadas por ninguna consideración, entre ellas la edad, lo que implica que todas las personas de todas las edades gozan de los mismos derechos fundamentales. Es decir: «Los niños y los

jóvenes tienen los mismos derechos humanos básicos que los adultos y también derechos concretos que reconocen sus necesidades especiales».

Así, la Convención sobre los Derechos del Niño en su Artículo 2, señala que “Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales”. (MINISTERIO DE SALUD, 2019)

Del mismo modo, en su Artículo 4°, establece la responsabilidad de los Estados de adoptar «todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional». Así también, en su Artículo 6° además de reconocer el derecho intrínseco a la vida, se dispone la responsabilidad de los Estados de garantizar la supervivencia y el desarrollo del niño.

En el Perú, como en otros países, la orientación de la política de atención a la niñez y la adolescencia ha ido en la línea de organizar y articular la acción del Estado bajo la forma de un sistema interinstitucional que vele por el cuidado y protección de la Infancia. En esta línea, el Código de los Niños y Adolescentes establecen el Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente (SNAINA). (MINISTERIO DE SALUD, 2019)

Asimismo, el Código de los Niños y Adolescentes (CNA) en su Artículo 33 señala que el SNAINA debe velar para que se implementen y articulen iniciativas o programas en el marco de los siguientes ámbitos:

- Programas de prevención que garanticen condiciones de vida adecuadas;
- Programas de promoción que motiven su participación y la de su familia y que permitan desarrollar sus potencialidades;
- Programas de protección que aseguren la atención oportuna cuando enfrentan situaciones de riesgo;
- Programas de asistencia para atender sus necesidades cuando se encuentren en circunstancias especialmente difíciles;
- Programas de rehabilitación que permitan su recuperación física y mental y que ofrezcan atención especializada

Comentario del Tesista:

Como se puede apreciar de la encuesta realizada, el mayor porcentaje de profesionales muestran su conformidad respecto a la atención prioritaria que debe tener la niñez y adolescencia por parte del Estado. Así, la Convención sobre los Derechos del Niño, reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, es decir, como titulares de derechos y obligaciones. Pues, constituyen uno de los sectores más vulnerables de la población y en razón de ello merecen una especial protección por parte del Estado, la familia y la comunidad. Es decir, será la situación de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes y no su falta de capacidad la que fundamente la necesidad de su protección especial; y esta no es per se discriminatoria, sino que es necesaria debido a las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes, protección que se tornará más exigible en aquellos casos en que los menores de edad se encuentren en presunto estado de abandono o en situación de vulneración de sus derechos fundamentales.

Pregunta 02. ¿Considera que, un menor de edad en desprotección familiar, se siente afectado en su autoestima?

Cuadro 4.3

		SI	NO
FISCALES	4	4	0
JUEZAS	3	3	0
ABOGADOS	10	10	0
DIRIGENTES	3	3	0
PSICOLOGOS	10	10	0
TOTAL		30	

Grafico 4.3



Fuente: Encuesta realizada.

Interpretación: De acuerdo al grafico se observa que, del total de 30 profesionales encuestados: tales como 4 Fiscales, 3 Magistradas, 10 Abogados, 3 Dirigentes y 10 Psicólogos consideran que la desprotección familiar afecta la autoestima en los menores de edad víctimas de esta. Asimismo, se tiene que el 100% de los profesionales reconoce que los menores de edad en desprotección familiar se ven afectados en su autoestima.

Comentario: Según los resultados que arroja la encuesta realizada concluimos que, el 100% de los profesionales encuestados concuerdan que los menores de edad en desprotección familiar se ven afectados en su autoestima.

Asimismo, según (CAHUA GALLEGOS, 2017) las consecuencias de la desprotección familiar pueden ser graves y perdurar a largo plazo. Su impacto negativo en el menor de edad no es siempre visible de forma inmediata o a corto plazo; en algunos casos no es visible en un primer momento, pero se manifiesta con el transcurrir del tiempo: es el llamado “efecto durmiente”. Estos

efectos negativos pueden afectar: la salud física, el desarrollo intelectual y cognitivo, y la situación emocional y psicológica del menor de edad.

Todos los tipos de desprotección (maltrato físico, abuso sexual, negligencia y maltrato psicológico o emocional) pueden afectar al bienestar emocional y psicológico del menor de edad y provocar que tenga problemas conductuales. Estas consecuencias pueden aparecer inmediatamente después de que ocurra la desprotección o años después. Aunque no hay un conjunto único de conductas que sean características de todos los niños objeto de desprotección, se ha constatado la presencia de problemas emocionales o psicológicos en muchos de ellos. Los investigadores y los clínicos señalan conductas que varían desde la pasividad y la introversión hasta la agresividad. Los menores de edad víctimas de maltrato físico y abuso sexual a menudo exhiben problemas tanto internalizados como externalizados e incluyen:

- Baja autoestima.
- Depresión y ansiedad.
- Trastorno por estrés post-traumático (PTSD).
- Dificultades para vincularse afectivamente.
- Trastornos de alimentación.
- Dificultades en las relaciones con iguales.
- Conductas auto lesivas (incluyendo intentos de suicidio).

(CAHUA GALLEGOS, 2017)

En ese mismo sentido, (FARIÑA,F. et al), señala que las principales consecuencias psicológicas que exhiben son: trastornos de conducta, especialmente si se trata de niñas; depresión infantil y sintomatología asociada a la misma; baja autoestima; tristeza; intentos de suicidio; trastornos de tipo disociativo, tales como personalidad múltiple; mayor tendencia a sufrir problemas de alcoholismo y toxicomanías; déficits de habilidades para establecer interacción social de forma adecuada; además su coeficiente intelectual suele ser inferior al normal.

Comentario del Tesista:

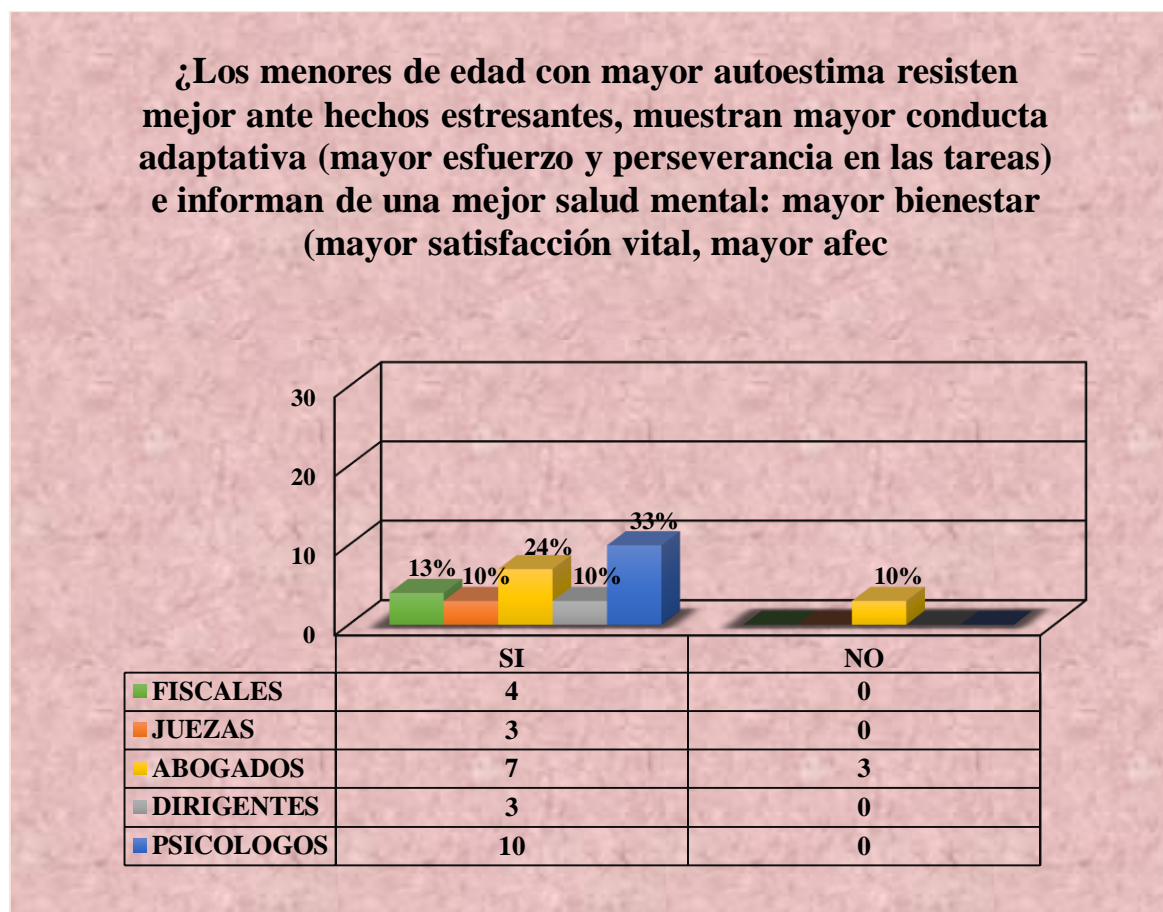
En ese sentido, debemos considerar que el menor no tiene la plenitud de capacidad para obrar, porque su desarrollo físico, intelectual y moral no es completo. Por lo tanto, debe estar bajo la protección y tutela de sus padres o de personas responsables de su cuidado (tutores, guardadores). En ese sentido, siendo la desprotección familiar principal causa de vulnerabilidad en los niños, niñas y adolescentes, colocándolos en un estado de indefensión y por ende infringiendo sus derechos fundamentales, lo que genera se afecte gravemente en su desarrollo integral.

Pregunta 03. Cree usted que, ¿Los menores de edad con mayor autoestima resisten mejor ante hechos estresantes, muestran mayor conducta adaptativa (mayor esfuerzo y perseverancia en las tareas) e informan de una mejor salud mental: ¿mayor bienestar (mayor satisfacción vital, mayor afectividad positiva y menor negativa), menor ansiedad, depresión y timidez?

Cuadro 4.4

		SI	NO
FISCALES	4	4	0
JUEZAS	3	3	0
ABOGADOS	10	7	3
DIRIGENTES	3	3	0
PSICOLOGOS	10	10	0
TOTAL		30	

Grafico 4.4



Fuente: Encuesta realizada.

Interpretación: De acuerdo al grafico se observa que, del total de 30 profesionales encuestados: tales como 4 Fiscales, 3 Magistradas, 7 Abogados, 3 Dirigentes y 10 Psicólogos infieren que con mayor autoestima los menores de edad resisten significativamente ante hechos estresantes, muestran mayor conducta adaptativa e informan de una mejor salud mental; menor ansiedad, depresión y timidez. Así, como 3 Abogados no convergen en lo mismo. Asimismo, se tiene que el 90% de profesionales concuerdan en que a mayor autoestima mayor resistencia tienen los menores de edad ante hechos estresantes e informan de una mejor salud mental.

Comentario: Según los resultados que arroja la encuesta realizada concluimos que, el 90% de profesionales coinciden en que con mayor autoestima los menores de edad resisten mejor ante hechos estresantes e informan de una mejor salud mental.

En ese sentido, (RODRIGUEZ NARANJO, Carmen Et al, 2012), señala que la autoestima fluctúa, en función de las circunstancias específicas que experimenta el individuo, y afecta de forma importante a su motivación. Al depender su autoestima principalmente de los resultados que se producen en ciertas áreas específicas, los jóvenes están motivados por obtener éxito y no fallar en su consecución, experimentando las emociones positivas intensas y elevada autoestima que resultan del éxito, y evitando las emociones dolorosas y baja autoestima que resultan del fracaso. Una autoestima alta en adolescentes se asocia con una percepción menos negativa del estrés cotidiano.

Así, los jóvenes con una autoestima elevada informan también de que disfrutan de más experiencias positivas y son a su vez más eficaces en el afrontamiento de experiencias negativas, generando respuestas más adaptativas tras el fracaso.

De la misma forma, interpretan las experiencias negativas de un modo más funcional, minimizando la importancia de la habilidad implicada en una tarea tras el fracaso en ella. También se perciben menos responsables ante la retroalimentación negativa que los jóvenes con baja autoestima, tienden a realizar atribuciones más controlables y se muestran más persistentes ante tareas insolubles. Realizan, a su vez, una mayor planificación de las respuestas en el ámbito académico y obtienen, en general, niveles superiores de éxito académico.

En cuanto a las relaciones interpersonales, los adolescentes con una alta autoestima se muestran menos susceptibles a la presión de los iguales, obtienen mejores impresiones por parte de éstos y se muestran más cercanos.

En esa misma línea, (ZAMORA LORENTE, 2012), indica que los rasgos que caracterizan a los niños con alta autoestima son:

- Seguridad y confianza en sí mismos.
- Suelen ser felices.
- Son estables emocionalmente.
- Disfrutan de sus cualidades.
- Son creativos, cooperativos y siguen las reglas.
- No se sobrevaloran ni infravaloran con relación a los demás.
- Admiten sus limitaciones y aspectos menos favorecidos de su personalidad.
- Su amistad es agradable.
- Saben proyectarse hacia los demás.
- Son abiertos y atentos.
- Mantienen relaciones sociales saludables.
- Son consecuentes entre lo que piensan y sus actuaciones.

Comentario del Tesista:

En la misma línea, de la encuesta realizada se concluye que los menores de edad con mayor autoestima resisten mejor ante hechos estresantes e informan de una mejor salud mental. Así, El desarrollo de la autoestima se inicia desde el nacimiento y se va desarrollando, evolucionando, cambiando, mejorando o deteriorándose durante toda la vida. Pero el desarrollo de la autoestima en las etapas de la niñez e infancia es fundamental porque establecerá las bases sólidas de la autoestima durante su vida. La autoestima en los niños y niñas es el resultado principalmente de la relación que existe entre la conducta del niño y el medio ambiente familiar y social que lo rodea.

Pregunta 04. ¿Qué desventajas o aspectos negativos cree usted que se genera para los menores de edad en desprotección familiar, al no contar con un Centro de Acogida Residencial (CAR)?

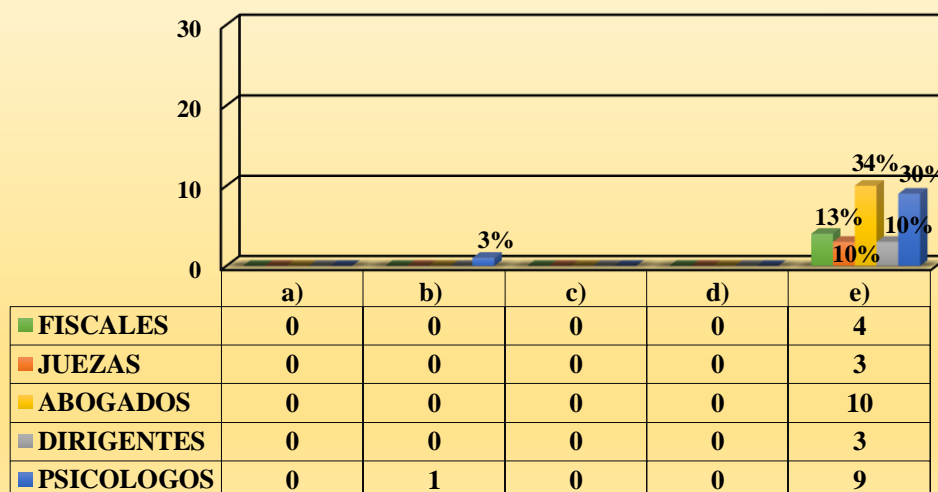
Cuadro 4.5

		a)	b)	c)	d)	e)
FISCALES	4	0	0	0	0	4
JUEZAS	3	0	0	0	0	3
ABOGADOS	10	0	0	0	0	10
DIRIGENTES	3	0	0	0	0	3
PSICOLOGOS	10	0	1	0	0	9
TOTAL		30				

- a) Crecer sin educación
b) Predispuesto a delinquir
c) Vulnerable a ser ultrajado
d) Expuesto a aplicarse sustancias ilegales
e) T.A

Gráfico 4.5

¿Qué desventajas o aspectos negativos cree usted que se genera para los menores de edad en desprotección familiar, al no contar con un Centro de Acogida Residencial (CAR)?



Fuente: Encuesta realizada.

Interpretación: De acuerdo al gráfico se observa que, del total de 30 profesionales encuestados: tales como 4 Fiscales, 3 Magistradas, 10 Abogados, 3 Dirigentes y 9 Psicólogos indican que al no contar con un Centro de Acogida Residencial los menores de edad en desprotección familiar quedan expuestos a crecer sin educación, a delinquir, a ser ultrajados y a aplicarse sustancias ilegales. Así, como un Psicólogo considera que solo están predispuestos a delinquir. Asimismo, se tiene que el 97% de profesionales han determinado que la ausencia de un

Centro de Acogida Residencial (CAR) genera las desventajas anteriormente señaladas para los menores de edad en desprotección familiar.

Comentario: Según los resultados que arroja la encuesta realizada concluimos que, el mayor porcentaje (97%) de profesionales coincidió que por la ausencia de Centros de Acogida Residencial los menores de edad en desprotección familiar están expuestos a distintas situaciones negativas como son crecer sin educación, predispuestos a delinquir, a ser ultrajados y a aplicarse sustancias ilegales.

En ese sentido, Violeta Cristina Gómez Hinostroza (DEMANDA DE CUMPLIMIENTO, 2017), señala que en muchos casos los menores de edad involucrados en estos procedimientos (Investigación Tutelar) daban y dan vueltas en el siguiente circuito:

- Comisaria (ante la denuncia por violencia o riesgo social en su agravio)
- Fiscalía de Familia (quien dispone que el menor de edad sea derivado a la UIT (Unidad de Investigación Tutelar) para que se le abra investigación tutelar en el caso que se encuentre evidencia de presunto estado de abandono y/o riesgo social)
- UIT (organismo encargado de abrir investigación tutelar), a quien por mandato legal le corresponde dar las medidas de protección al menor de edad afectado, entre ellas, albergue en un centro de atención residencial, pero en muchos casos esta medida no se disponía, pese a que podía ser la más apropiada para proteger al niño o adolescente mientras duraba la investigación tutelar y se definía que era lo mejor para él.
- Centro Preventivo de la Policía Nacional, lugar al que la UIT deriva a los niños a la espera -a veces por meses- de encontrar una vacante en un albergue (centro de atención residencial) o mientras dura la búsqueda de algún familiar que acepte recibir al niño
- Entrega del menor de edad a sus familiares realizada por la UIT (en muchos casos sin un adecuado estudio de la situación social y psicológica de los familiares que reciben al niño debido a la falta de vacantes en los albergues)
- Nueva denuncia ante la Comisaria o Fiscalía, al repetirse la situación de violencia y/o grave riesgo social en agravio del niño o adolescente, volviendo a recorrer el menor de edad las mismas Instituciones acabadas de mencionar, en ocasiones en varias oportunidades, generándose un círculo vicioso que no brinda protección real para el niño o adolescente afectado, peor aun generando una victimización por parte del Estado.

Así, las razones antes expuestas se generan a causa de no haber capacidad de atención en los centros de atención residencial (albergues), es decir, no recibían a los niños en los albergues al no haber vacantes para la atención en los centros de atención residencial (falta de capacidad operativa de atención de los albergues).

Asimismo, la situación de falta de capacidad de atención de los albergues para menores de edad en presunto estado de abandono y/o grave riesgo social termina ocasionando que en los casos que son necesaria esta medida de protección no se disponga la atención integral en un centro de atención residencial.

Comentario del Tesista: En ese mismo sentido, la desprotección familiar en menores de edad causa un estado de vulnerabilidad e indefensión. Así, el artículo 4º de la Constitución vigente consagra la obligación de protección especial para los niños, niñas y adolescentes, a quienes se encuentran en situación de abandono. Entonces, ante la inexistencia de un núcleo familiar o la presencia de determinadas situaciones problemáticas en el seno de una familia que vulneren o amenacen a los menores de edad, el Estado debe dictar medidas de protección ya que es el principal garante de estos derechos.

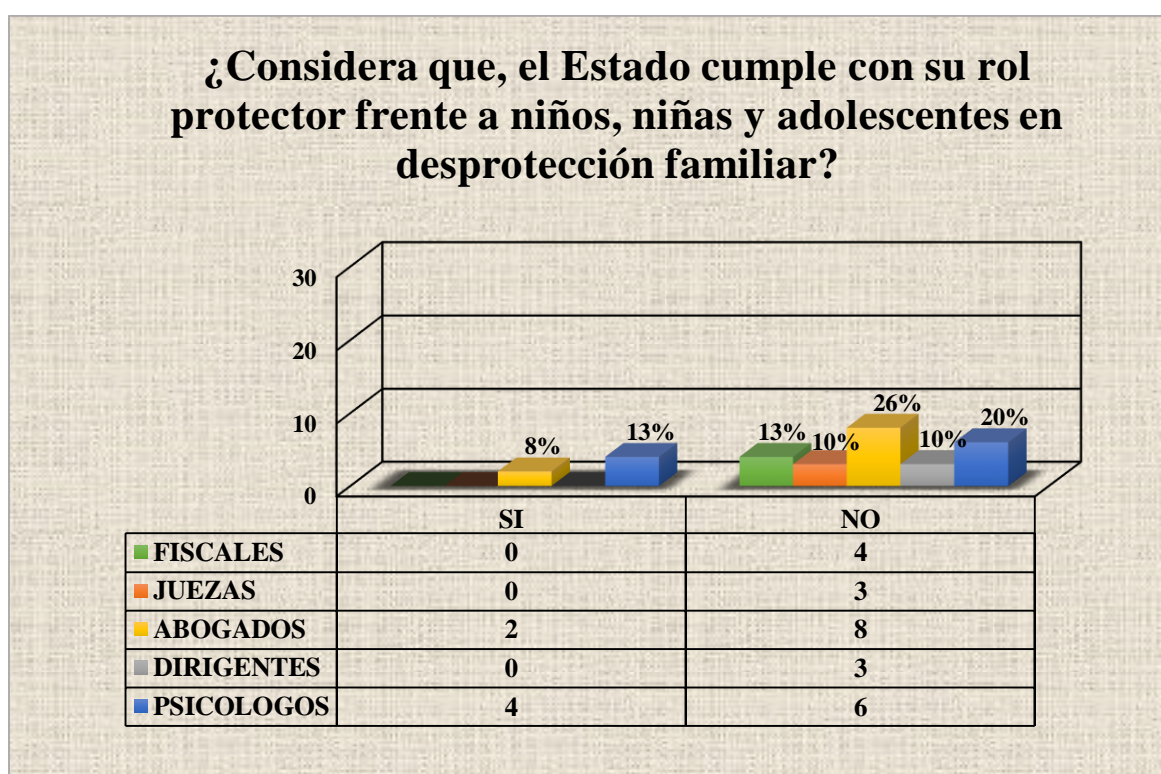
Asimismo, el Decreto Legislativo N° 1297 en su artículo 118 señala como una de las medidas de protección al acogimiento residencial. Así, ante la ausencia de un Centro de Acogida Residencial, los menores de edad se encuentran en riesgo de sufrir diferentes situaciones como aplicarse sustancias ilegales, ser ultrajados, explotados laboralmente, a delinquir y a crecer sin educación.

Pregunta 05. ¿Considera que, el Estado cumple con su rol protector frente a niños, niñas y adolescentes en desprotección familiar?

Cuadro 4.6

		SI	NO
FISCALES	4	0	4
JUEZAS	3	0	3
ABOGADOS	10	2	8
DIRIGENTES	3	0	3
PSICOLOGOS	10	4	6
TOTAL		30	

Grafico 4.6



Fuente: Encuesta realizada.

Interpretación: De acuerdo al grafico se observa que, del total de 30 profesionales encuestados: tales como 4 Fiscales, 3 Magistradas, 8 Abogados, 3 Dirigentes y 6 Psicólogos han respondido que el Estado no cumple con su rol protector en favor de los niños, niñas y adolescentes en desprotección familiar. Así, como 2 Abogados y 4 Psicólogos conciertan que el Estado efectúa su rol protector. Asimismo, se tiene que el 79% de profesionales consideran que el Estado no desempeña su rol protector frente a los menores de edad en desprotección familiar y el 21 % coincide en que ejecuta su rol protector.

Comentario: Según los resultados que arroja la encuesta realizada concluimos que, el mayor porcentaje (79%) de profesionales coincide en que el Estado no cumple su rol protector en favor de los menores de edad en desprotección familiar.

En esa línea, (DEFENSORIA DEL PUEBLO, 2010), señala que con motivo del análisis del segundo informe emitido por el Perú, el Comité de los Derechos del Niño se refirió de modo más específico a la situación de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo tutela

institucional, recomendando que el Estado prosiga desarrollando medidas sustitutivas a la tutela institucional de los niños, niñas y adolescentes, en particular promoviendo su colocación en hogares de guarda. Asimismo, recomendó que se *“refuerce su sistema de supervisión y evaluación para garantizar el desarrollo adecuado de los niños que viven en instituciones y que continúe adoptando medidas para revisar periódicamente el internamiento y el tratamiento de los niños según lo estipulado en el artículo 25 de la Convención”*.

Asimismo, en sus Observaciones Finales al tercer informe periódico presentado por nuestro país, puso de manifiesto su preocupación por distintos aspectos relativos al funcionamiento de los Centros de Atención Residencial (CAR). Básicamente, mostró su preocupación por el hecho de que la colocación en los centros no siempre sea utilizada como medida de último recurso, *el estado precario en que se encuentran algunos de los centros y la insuficiente capacidad para atender a todos los niños, niñas y adolescentes que precisan otros tipos de cuidado*.

En ese sentido, el Comité de los Derechos del Niño recomendó que, en los casos en que la colocación en una institución sea el último recurso necesario para los niños, niñas y adolescentes, temporal o permanentemente privados de su medio familiar, el Estado peruano vele porque existan instituciones adecuadas para atender a las personas menores de edad en situación de abandono, que se reconozca su derecho a la revisión periódica sobre el trato que reciben, y de las demás circunstancias pertinentes a su permanencia; y que instauren mecanismos de queja disponibles y accesibles para los referidos residentes.

El deber del Estado de proteger a la niñez, en especial a los menores de edad en presunto estado de abandono y/o grave riesgo social, se encuentra establecido en la Constitución Política del Perú, la legislación nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (Derecho Internacional de los Derechos Humanos). Entre las medidas de protección que existen a favor de un niño en presunto estado de abandono y/o grave riesgo social, se encuentra la medida de protección de atención integral en un centro de atención residencial (albergue), la que se debe disponer por la Unidad de Investigación Tutelar- Actualmente Unidad de Protección Especial -del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables cuando sea lo más favorable para proteger la integridad personal del niño o adolescente. (DEMANDA DE CUMPLIMIENTO, 2017)

Comentario del Tesista:

De la encuesta realizada se concluye que, el mayor porcentaje de profesionales concuerdan en que el Estado no cumple su rol protector en favor de los menores de edad en desprotección familiar. Siendo que, son varios los instrumentos internacionales que reconocen la obligación estatal de proteger a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de desprotección familiar, se debe precisar el especial significado de la Convención sobre los Derechos del Niño, en la medida en que representa el punto culminante del proceso de consagración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a partir de la “Doctrina de Protección Integral”. Esta reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, es decir, titulares de derechos y obligaciones. En razón de ello, para marzo del año 2018 la Unidad de Protección Especial de Piura (UPE) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, recibió 245 casos de menores de edad en desprotección familiar, lo que es un indicador de la grave situación en la que viven niños, niñas y adolescentes, lo preocupante de esta cifra es la ausencia de Centros de Acogida Residencial. Lo cual sustenta que el Estado no ejerce una labor eficiente a favor de los niños, niñas y adolescentes en desprotección familiar.

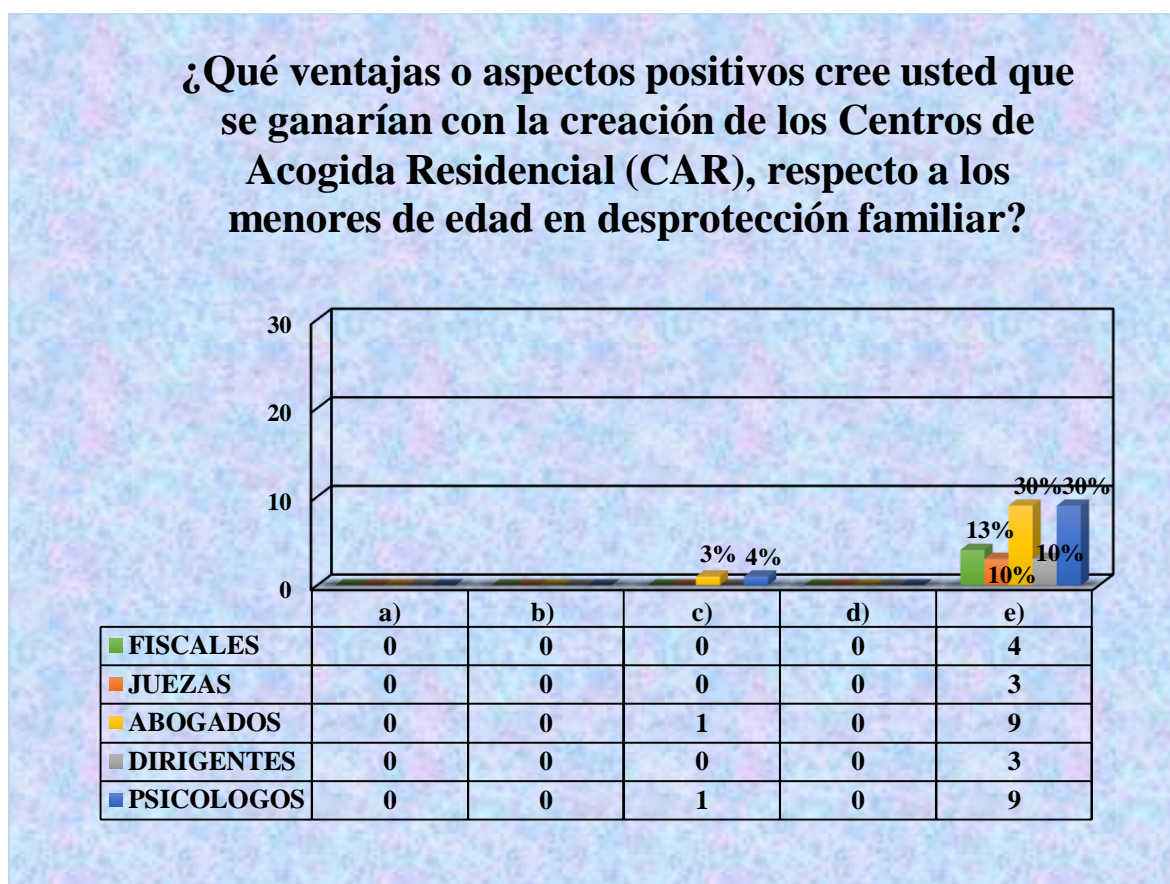
Pregunta 06. ¿Qué ventajas o aspectos positivos cree usted que se ganarían con la creación de los Centros de Acogida Residencial (CAR), respecto a los menores de edad en desprotección familiar?

Cuadro 4.7

		a)	b)	c)	d)	e)
FISCALES	4	0	0	0	0	4
JUEZAS	3	0	0	0	0	3
ABOGADOS	10	0	0	1	0	9
DIRIGENTES	3	0	0	0	0	3
PSICOLOGOS	10	0	0	1	0	9
TOTAL	30					

- a) Formación y desarrollo de la personalidad.
b) Formación de valores como responsabilidad.
c) Formación de hábitos como puntualidad.
d) Formación en herramientas prácticas.
e) T.A.

Grafico 4.7



Fuente: Encuesta realizada.

Interpretación: De acuerdo al grafico se observa que, del total de 30 profesionales encuestados: tales como 4 Fiscales, 3 Magistradas, 9 Abogados, 3 Dirigentes y 9 Psicólogos aprecian que al instaurarse Centros de Acogida Residencial los menores de edad en desprotección familiar cuentan con las ventajas de formar y desarrollar su personalidad, formarse en valores; en

hábitos como la puntualidad y formación de las herramientas prácticas que le permitirán aprender un oficio. Así, como un Abogado y un Psicólogo coinciden que la ventaja es su formación en hábitos como la puntualidad, orden y prolijidad. Asimismo, se tiene que el 93% de profesionales responden que se generan ventajas con la creación de Centros de Acogida Residencial para los menores de edad en desprotección familiar y el 7% conviene que la mejoría es la formación en hábitos como el orden.

Comentario: Según los resultados que arroja la encuesta realizada concluimos que, la mayoría de profesionales (93%) coinciden en la existencia de ventajas para los menores de edad en desprotección familiar al implementarse un Centro de Acogida Residencial.

En ese sentido, (CONDOR VILCAPOMA, MARCO ANTONIO et al, 2017) indica que teniendo en cuenta la importancia que implica la protección y cuidado de los infantes el Estado peruano ha implementado medidas de protección formalizando instituciones que se encarguen del proceso de tutela. Según la Defensoría del Pueblo (2012) los niños y niñas pueden ser incluidos en algún tipo de cuidado alternativo formal, sea en las múltiples modalidades de la institucionalización, sea en acogimiento familiar. Este espacio la conforman los Centro de Atención Residencial, los albergues o el sistema de hogares temporales.

En Huancayo el Centro de Atención Residencial Andrés Avelino Cáceres juega un papel importante en la protección y atención parental a los infantes que por diversas situaciones han sido acogidos, siendo un ámbito temporal hasta que el Estado encuentre familiares cercanos que se encarguen de su tutela.

Según el Instituto Nacional de Bienestar Familiar (2006) “La cuestión de la institucionalización adquiere una relevancia particular pues se presenta como la principal respuesta instituida frente a la privación de familia por parte del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil”. No es que el estado esté privando a los niños y las niñas que estén en el seno familiar, sino que sus progenitores han descuidado su responsabilidad, y los han expuesto a riesgo y abandono, de ahí que el Estado decide separarlos de sus padres y protegerlos.

Las investigaciones que analizamos (Gómez, 2008 Durand 2008, Instituto Nacional de Bienestar Familiar 2006) revelan que grandes proporciones de niños, niñas y adolescentes que han sido institucionalizados tienen padre y/o madre, pero no cuentan con las capacidades y recursos para afrontar el cuidado y protección.

Comentario del Tesista:

Del resultado de la encuesta realizada se concluye que, la mayoría de profesionales coincide que se generan ventajas al implementar Centros de Acogida Residencial para los niños, niñas y adolescentes en desprotección familiar. Estas ventajas o aspectos positivos engloban la formación y desarrollo de la personalidad del menor de edad en desprotección familiar, formación de valores como responsabilidad; disciplina y esfuerzo, formación de hábitos como puntualidad; orden y prolijidad, formación de las herramientas prácticas que le permitan aprender una actividad u oficio. Dado que, los menores de edad en desprotección familiar carecen de manera total o parcial de un referente adulto que es el vínculo para su sostén y cuidado. Pues, al ser separados de su familia requieren indiscutiblemente de un ambiente donde se les brinde todos los cuidados adecuados para cada una de sus necesidades puesto que sus padres por múltiples motivos, variados y complejos no pudieron proporcionarles.

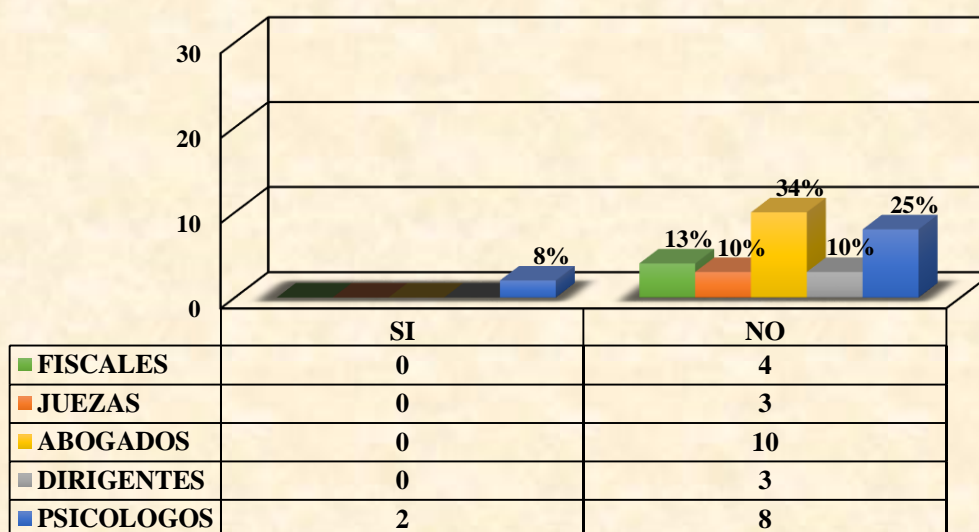
Pregunta 07. ¿Conoce usted de algún proyecto en desarrollo para la construcción de Centros de Acogida Residencial (CAR) en los Distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre?

Cuadro 4.8

		SI	NO
FISCALES	4	0	4
JUEZAS	3	0	3
ABOGADOS	10	0	10
DIRIGENTES	3	0	3
PSICOLOGOS	10	2	8
TOTAL		30	

Grafico 4.8

¿Conoce usted de algún proyecto en desarrollo para la construcción de Centros de Acogida Residencial (CAR) en los Distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre?



Fuente: Encuesta realizada.

Interpretación: De acuerdo al grafico se observa que, del total de 30 profesionales encuestados: tales como 4 Fiscales, 3 Magistradas, 10 Abogados, 3 Dirigentes y 8 Psicólogos coinciden en no tener conocimiento respecto de algún proyecto en desarrollo para la construcción de Centros de Acogida Residencial en los Distritos de Piura, Castilla o Veintiséis de Octubre. Así, como 2 Abogados concuerdan en conocer algún proyecto en desarrollo para la construcción de CAR. Asimismo, se tiene que el 92% de profesionales no tienen conocimiento sobre proyectos en desarrollo para la construcción de CAR y solo el 8% conoce sobre algún proyecto en desarrollo.

Comentario: Según los resultados que arroja la encuesta realizada concluimos que, el 92% de profesionales conciertan en no tener conocimiento sobre proyectos en desarrollo para la construcción de Centros de Atención Residencial.

En esa misma línea, (CARRILLO PINTO, 2017) establece que el acceso a Centros de Atención Residencial que cuenten con espacios acogedores, con calidad espacial en sus instalaciones e infraestructura segura, dignifican a los niños, como seres humanos, quienes crecerán protegidos y albergados en un hogar digno, donde serán respetados sus derechos. Teniendo, así como premisa primordial la calidad espacial del hábitat, se debe promover proyectos de atención residencial infantil en los que se cuente con un programa que satisfice las necesidades de un niño o adolescente que vivirán y se desarrollarán en estos espacios que será su hogar.

Comentario del Tesista:

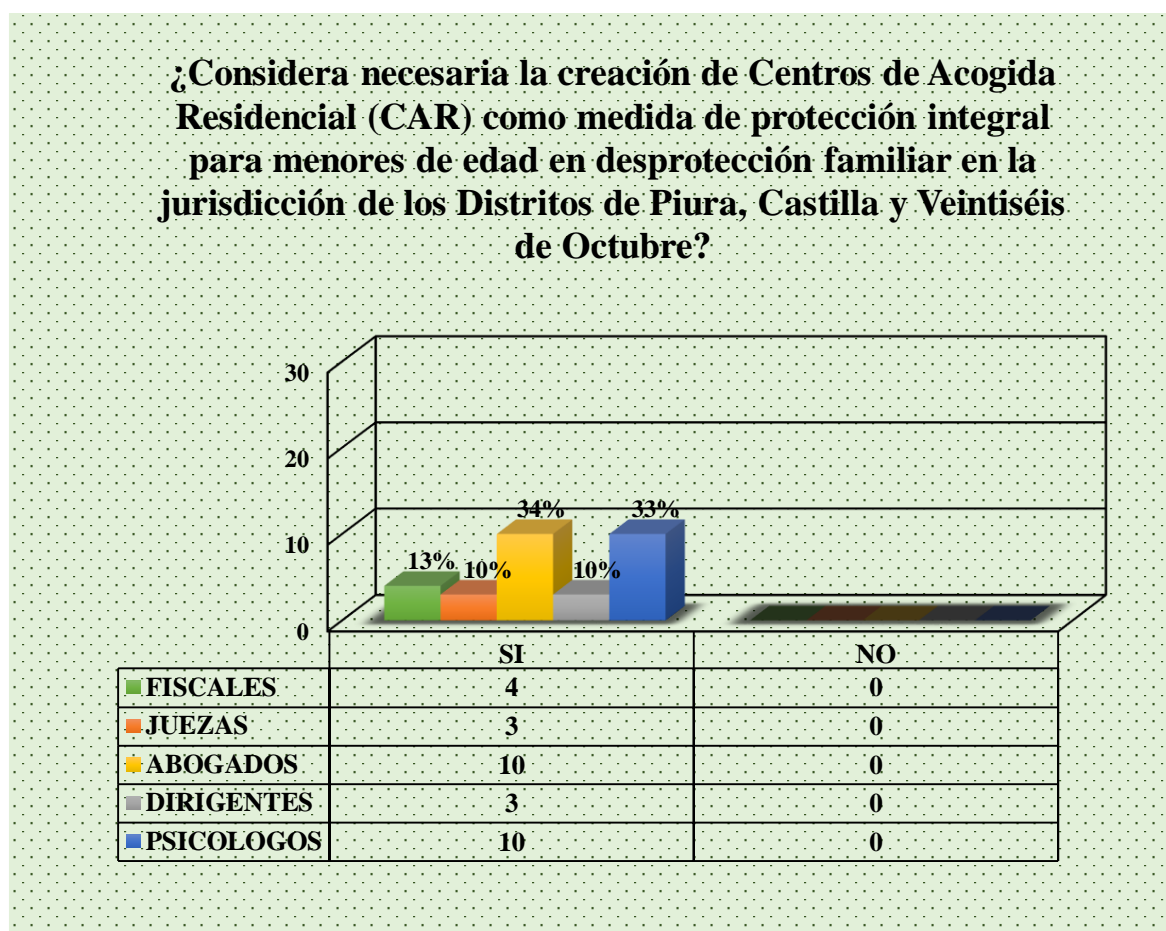
Se tiene de la encuesta realizada como conclusión que, el mayor porcentaje de profesionales coinciden en no tener conocimiento sobre algún proyecto en desarrollo para la construcción de Centros de Acogida Residencial en el Distrito de Piura, Castilla o Veintiséis de Octubre. Esto sucede porque el Estado, la sociedad y la comunidad no le toman la debida importancia y cuidado del caso, pese a que con el concurrir del tiempo la desprotección familiar de niños, niñas y adolescentes sigue en aumento.

Pregunta 08. ¿Considera necesaria la creación de Centros de Acogida Residencial (CAR) como medida de protección integral para menores de edad en desprotección familiar en la jurisdicción de los Distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre?

Cuadro 4.9

		SI	NO
FISCALES	4	4	0
JUEZAS	3	3	0
ABOGADOS	10	10	0
DIRIGENTES	3	3	0
PSICOLOGOS	10	10	0
TOTAL		30	

Grafico 4.9



Fuente: Encuesta realizada.

Interpretación: De acuerdo al grafico se observa que, del total de 30 profesionales encuestados: tales como 4 Fiscales, 3 Magistradas, 10 Abogados, 3 Dirigentes y 10 Psicólogos determinaron necesaria la implementación de Centros de Acogida Residencial como medida de protección integral en favor de los menores de edad en desprotección familiar del Distrito de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre. Asimismo, se tiene que el 100% de profesionales conciertan que es esencial la instauración de Centros de Acogida Residencial en el Distrito de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre.

Comentario: Según los resultados que arroja la encuesta realizada concluimos que, el 100% de profesionales concuerdan en considerar necesaria la implementación de Centros de Acogida Residencial en el Distrito de Piura, Castilla o Veintiséis de Octubre.

Asimismo, (CARRILLO PINTO, 2017), indica que:

- toda persona tiene el derecho y la necesidad de vivir en lugar digno. La calidad espacial en una vivienda es de suma importancia ya que influye en el desenvolvimiento de los seres que en ella habitan, siendo en el caso expuesto niños, niñas y adolescentes los que necesitan de un hogar de calidad donde ser albergados.
- El MIMP (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables) reconoce que vivir en familia, es un derecho básico y fundamental para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, por ello se debe brindar la protección, cuidado y respaldo a todos aquellos niños y adolescentes que queden bajo tutela estatal mientras dura su proceso de reinserción a la sociedad por medio de un centro de atención residencial que les brinde un hogar y una familia sustituta que influirá en su desarrollo personal .
- Un albergue infantil no debe considerarse como un lugar masivo y sin calidez donde albergar niños y adolescentes que quedan desamparados o se encuentran en situación de riesgo, sino debe concebirse como un hogar en donde la permanencia temporal o permanente de niños y adolescentes debe ser placentera y agradable, en donde se sientan a gusto e identifiquen como su casa, su hogar.
- Se decide abordar este problema debido a la situación en que se encuentran los albergues infantiles, carentes de calidad espacial, con una infraestructura insegura, y con carencia de espacios y un programa arquitectónico, lo que repercute en el desarrollo de los niños y adolescentes que viven allí, no pudiendo desarrollarse correctamente y dificultando su reinserción a la sociedad.

En ese sentido, (PALOMINO y RENGIFO, 2016), señala que el sector de Servicio Social en nuestro país no cubre en su totalidad el déficit de infraestructura de albergues de protección para menores abandonados. Este problema se ve reflejado en la poca cantidad de edificaciones para albergue y la desorganizada y obsoleta infraestructura, que cuando fueron puestos en actividad no tuvieron un plan de mantenimiento ni mejora.

Comentario del Tesista:

Se tiene que, el Artículo 20 de la Convención sobre Derechos del Niño inciso 1 indica “Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado”.

En tal sentido, por los argumentos expuestos, con la doctrina y el resultado de la encuesta realizada se concluye que, los 30 profesionales concuerdan que existe la necesidad de instaurar un Centro de Acogida Residencial para menores de edad en desprotección familiar en el Distrito de Piura, Castilla o Veintiséis de Octubre.

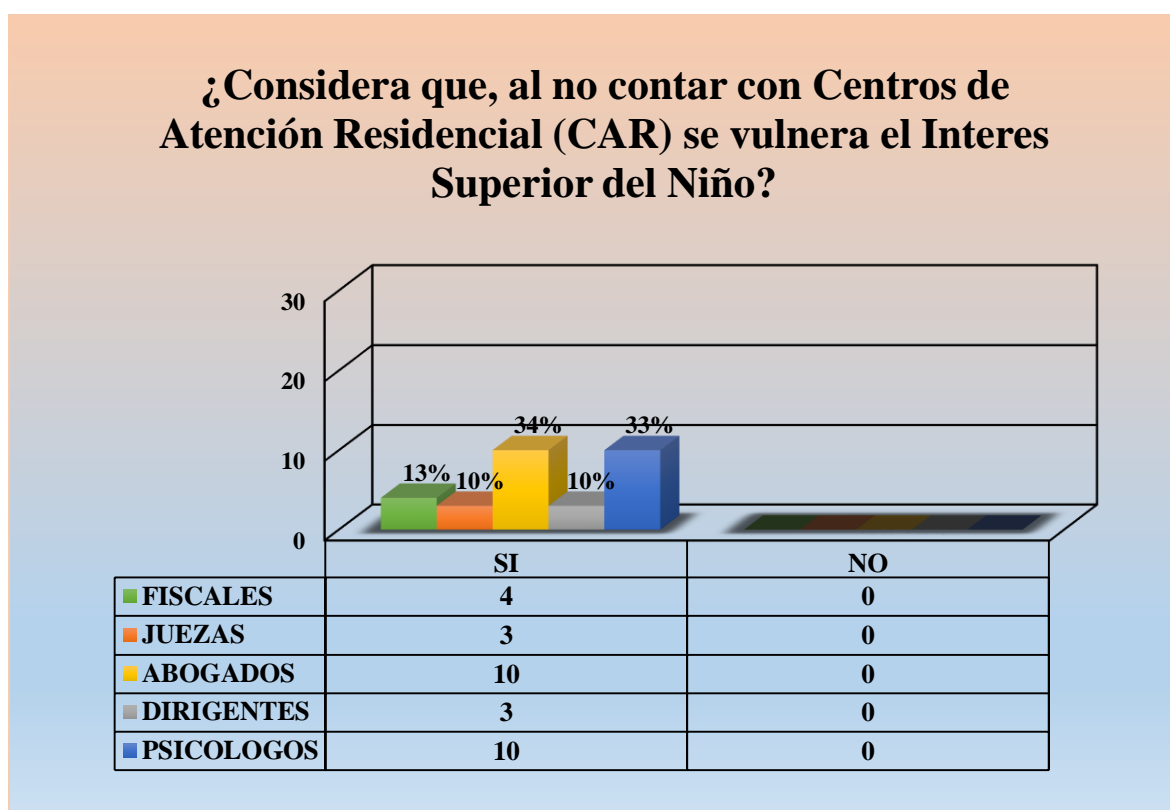
Lo que nos lleva a afirmar la hipótesis general planteada en la presente tesis, siendo que la implementación de Centros de Acogida Residencial para menores de edad en desprotección familiar, garantizan el Interés Superior del Niño por lo tanto el Estado cumple con las medidas de protección integral. De esta forma el Estado estaría efectuando con lo dispuesto en la Convención sobre Derechos del Niño y en las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños, pues los niños, niñas y adolescentes por su condición de vulnerabilidad exigen de una protección especial por parte del Estado, la comunidad y la sociedad más aun cuando se encuentran en desprotección familiar.

Pregunta 09. ¿Considera que, al no contar con Centros de Atención Residencial (CAR) se vulnera el Interés Superior del Niño?

Cuadro 4.10

		SI	NO
FISCALES	4	4	0
JUEZAS	3	3	0
ABOGADOS	10	10	0
DIRIGENTES	3	3	0
PSICOLOGOS	10	10	0
TOTAL		30	

Grafico 4.10



Fuente: Encuesta realizada.

Interpretación: De acuerdo al grafico se observa que, del total de 30 profesionales encuestados: tales como 4 Fiscales, 3 Magistradas, 10 Abogados, 3 Dirigentes y 10 Psicólogos infieren que al no contar con Centros de Atención Residencial se vulnera el Interés Superior del Niño. Asimismo, se tiene que el 100% de los profesionales concuerda que el Interés Superior del Niño se ve quebrantado por la ausencia de Centros de Acogida Residencial.

Comentario: Según los resultados que arroja la encuesta realizada concluimos que, un total del 100% de profesionales coincide que se vulnera el Interés Superior del Niño con la ausencia de Centros de Atención Residencial.

En esa línea tenemos que, el Interés Superior del Niño es un concepto triple: es un derecho, un principio y una norma de procedimiento:

- a) Se trata del derecho del menor a que su interés superior sea una consideración que prime al sopesar distintos intereses para decidir sobre una cuestión que le afecta.
- b) Es un principio porque, si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño o niña.
- c) Es una norma de procedimiento ya que, siempre que se deba tomar una decisión que afecte a menores, el proceso deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones de esa decisión en las y los menores interesados. La evaluación y determinación de su interés superior requerirá las garantías procesales.

Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 19 señala “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que sus condiciones de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.

También, la Convención sobre Derechos del Niño en su artículo 20 inciso 1) señala “Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado”. Y en su inciso 3) indica “Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores”.

Asimismo, las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños en su Anexo II.A.5 indica “Cuando la propia familia del niño no puede, ni siquiera con un apoyo apropiado, proveer al debido cuidado del niño, o cuando lo abandona o renuncia a su guarda, el Estado es responsable de proteger los derechos del niño y de procurarle un acogimiento alternativo adecuado, con las entidades públicas locales competentes o las organizaciones debidamente habilitadas de la sociedad civil, o a través de ellas. Corresponde al Estado, por medio de sus autoridades competentes, velar por la supervisión de la seguridad, el bienestar y el desarrollo de todo niño en acogimiento alternativo y la revisión periódica de la idoneidad de la modalidad de acogimiento adoptada”.

Del mismo modo, la Constitución Política del Estado en su artículo 4 establece “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono”.

Comentario del Tesista:

En razón de lo antes expuesto, los fundamentos jurídicos, tales como: La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, Las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños de las Naciones Unidas y la Constitución Política del Perú garantizan el estricto resguardo del Interés Superior del Niño.

En esa misma línea, la Convención sobre Derechos del Niño en su artículo 3 inciso 1) indica “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

Así, con la doctrina y el resultado de la encuesta realizada se concluye que, los 30 profesionales coinciden en que la ausencia de Centros de Atención Residencial vulnera el Interés Superior del Niño.

Lo que nos conduce a afirmar la hipótesis específica planteada en esta investigación, siendo que se vulnera el Interés Superior del Niño con la ausencia de Centros de Acogida Residencial para menores de edad en desprotección familiar, toda vez que, transgrede estrictamente lo establecido en la Constitución Política del Perú y las Normas Internacionales respecto a la protección de los menores de edad; en efecto el Estado debe adoptar medidas inmediatas y urgentes frente a la situación de desprotección familiar de un menor sin vulnerar sus derechos fundamentales.

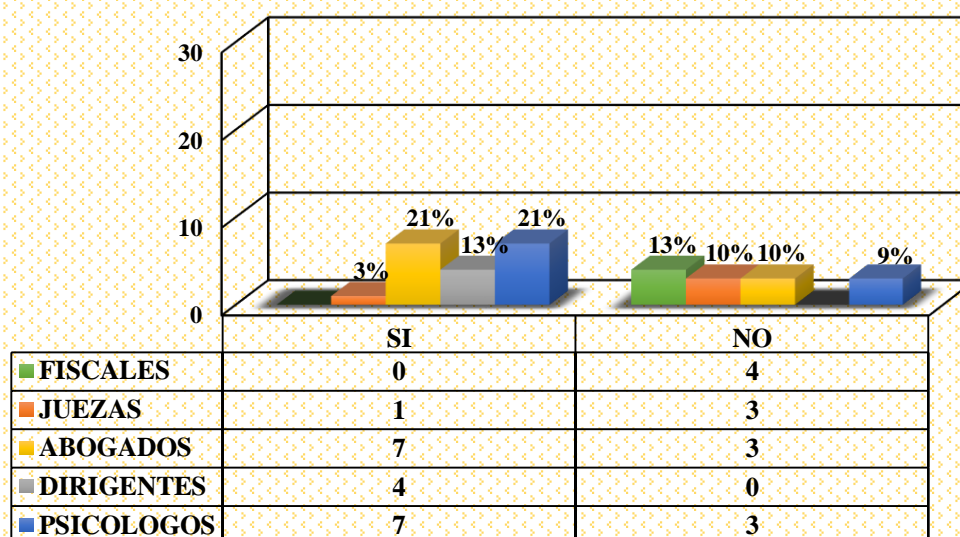
Pregunta 10. ¿Conoce usted de, más de un caso en su entorno (familia o amigos) sobre menores de edad provenientes de familias disfuncionales que necesitaron acudir a un Centro de Acogida Residencial (CAR) y en razón a la ausencia de los mismos generó que se conviertan en un peligro para la sociedad?

Cuadro 4.11

		SI	NO
FISCALES	4	0	4
JUEZAS	3	1	2
ABOGADOS	10	7	3
DIRIGENTES	3	3	0
PSICOLOGOS	10	7	3
TOTAL		30	

Grafico 4.11

¿Conoce usted de, más de un caso en su entorno (familia o amigos) sobre menores de edad provenientes de familias disfuncionales que necesitaron acudir a un Centro de Acogida Residencial (CAR) y en razón a la ausencia de los mismos generó que se conviertan



Fuente: Encuesta realizada.

Interpretación: De acuerdo al grafico se observa que, del total de 30 profesionales encuestados: tales como 1 Magistrada, 7 Abogados, 4 Dirigentes y 7 Psicólogos determinan que, tienen conocimiento respecto a menores de edad provenientes de familias disfuncionales que necesitando de un CAR se convirtieron en un peligro para la sociedad por la falta de los mismos. Así, como 4 Fiscales; 3 Juezas; 3 Abogados y 3 Psicólogos responden no conocer sobre ningún caso en su entorno. Asimismo, se tiene que el 58% de profesionales conoce sobre más de un caso

en su entorno respecto de menores de edad convertidos en un peligro para la sociedad por la falta de CAR y 42% no conoce sobre algún caso en su entorno.

Comentario:

Según los resultados que arroja la encuesta realizada concluimos que, el mayor porcentaje de profesionales coinciden en conocer sobre más de un caso respecto a menores de edad que necesitando de un Centro de Atención Residencial y por la falta del mismo se convirtieron en un peligro para la sociedad.

Así, (SOKOLICH ALVA, Unifé-Universidad Femenina del Sagrado Corazon, 2017), Para la autora, la desprotección familiar en el marco del Decreto Legislativo N° 1297 es uno de los motivos de origen de la delincuencia juvenil, lo cual desencadena en la imperiosa necesidad de prevenirla y combatirla mediante los sistemas de protección integral, ello en aplicación del artículo 4 de nuestra Constitución Política vigente, a través de políticas públicas.

En esa misma línea, el Decreto Legislativo N°1297 Para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Sin Cuidados Parentales o En Riesgo de Perderlos en su preámbulo indica que, para combatir la inseguridad ciudadana es necesario atacar sus causas, entre las cuales se ha identificado la desprotección familiar de niñas, niños y adolescentes que posteriormente podrían desarrollar conductas infractoras de la Ley Penal y en su vida adulta actos delictivos.

Comentario del Tesista:

Así, la falta de Centros de Acogida Residencial para menores de edad en desprotección familiar en el Distrito de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre genera que los niños; niñas y adolescentes terminen expuestos a diferentes situaciones negativas como es la delincuencia juvenil y a largo plazo lo conviertan en un estilo de vida. En razón de ello, el Estado debe orientar políticas públicas para la prevención social de la delincuencia enfrentando parte de sus causas a través de un sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos.

En razón a lo antes analizado, daremos respuesta a los objetivos de la presente investigación.

4.12 Demostrar, la necesidad de implementar un Centro de Acogida Residencial para menores de edad en desprotección familiar, en salvaguarda del interés superior del niño.

La protección especial de los niños, niñas y adolescentes constituye una obligación de los Estados, así como de la familia y la comunidad en virtud de diversas normas internacionales y nacionales. Sin embargo, la protección de aquellos que se encuentran en desprotección familiar exige una especial atención debido a que dicha situación implica o puede implicar la vulneración de sus derechos fundamentales.

Así, se demostró la necesidad de implementar un Centro de Acogida Residencial en el Distrito de Piura, Castilla o Veintiséis de Octubre para menores de edad en desprotección familiar, en salvaguarda del Interés Superior del Niño. Ya que, toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes genera desprotección familiar en los menores de edad. Pues, en los meses de enero a marzo del año 2018 la Unidad de Protección Especial de Piura recibió 245 denuncias sobre menores de edad en desprotección familiar, lo preocupante es que no existe un Centro de Acogida Residencial en el Distrito de Piura. Asimismo, las casas hogares y albergues que funcionan en el Distrito de Piura se encuentran sobrepobladas lo que causa muchas veces, que los menores de edad en desprotección familiar regresen con sus maltratadores o abusadores.

Ahora bien, al problema planteado, ¿Es necesaria la implementación de Centros de Acogida Residencial para menores de edad en desprotección familiar?

En base a lo antes señalado, se ha podido determinar que, **SI** es necesaria la implementación de Centros de Acogida Residencial en el Distrito de Piura, Castilla y Veintiséis de

Octubre, pues garantizan el Interés Superior del Niño por lo tanto el Estado cumple con las medidas de protección integral.

Ello es así porque la desprotección familiar coloca a los menores de edad en un estado de vulnerabilidad especial, por ello el Estado Peruano se encuentra obligado por las Normas Internacionales a brindar y ejecutar las medidas de protección integral a favor de los niños, niñas y adolescentes.

4.13 Determinar que, la ausencia de Centros de Acogida Residencial para menores de edad en desprotección familiar vulnera el Interés Superior del Niño.

La Convención sobre Derechos del Niño en su artículo 3.1 indica “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá *será el interés superior del niño*”.

También, las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños en su Anexo II.A.6 señala “Todas las decisiones, iniciativas y soluciones comprendidas en el ámbito de aplicación de las presentes Directrices deberían adoptarse caso por caso a fin de garantizar principalmente la seguridad y protección del niño, y deben estar fundamentadas en el *interés superior* y los derechos del niño de que se trate, de conformidad con el principio de no discriminación y considerando debidamente la perspectiva de género”.

Y, el Código de los Niños y Adolescentes en su artículo IX del Título Preliminar establece “En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará *el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos*”.

Así, se determinó que vulnera el Interés Superior del Niño la ausencia de Centros de Acogida Residencial para menores de edad en desprotección familiar. En consecuencia, infringe rigurosamente lo determinado en la Constitución Política del Perú, el Código de los Niños y Adolescentes y las Normas Internacionales sobre la protección de los niños, niñas y adolescentes; en resultado el Estado debe adoptar medidas inmediatas y urgentes frente a la situación de desprotección familiar de un menor de edad sin vulnerar sus derechos fundamentales. Ya que, los fundamentos jurídicos antes mencionados avalan el severo resguardo del Interés Superior de Niño.

Ahora bien, al problema planteado, ¿La ausencia de Centros de Acogida Residencial para menores de edad en desprotección familiar vulnera el Interés Superior del Niño?

En base a lo antes señalado, se ha podido determinar que, **SI** se vulnera el Interés Superior del Niño con la ausencia de Centros de Acogida Residencial para menores de edad en desprotección familiar en el Distrito de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre.

Siendo que, la Convención sobre Derechos del Niño establece que el interés superior del niño será una consideración primordial en la aplicación de todas las medidas que afecten a los menores de edad y exige medidas activas para proteger sus derechos y promover su supervivencia; crecimiento y bienestar.

CONCLUSIONES

1. Es necesaria la implementación de Centros de Acogida Residencial en el Distrito de Piura; Castilla y Veintiséis de Octubre para niños, niñas y adolescentes en desprotección familiar, por que garantizan el Interés Superior del Niño así el Estado cumple con las medidas de protección integral.
2. Se vulnera el Interés Superior del Niño con la ausencia de Centros de Acogida Residencial en el Distrito de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre para niños, niñas y adolescentes en desprotección familiar.
3. La atención de la niñez y adolescencia es prioridad a nivel nacional.
4. Todos los tipos de desprotección familiar (maltrato físico, abuso sexual, negligencia y maltrato psicológico o emocional) afectan al bienestar emocional y psicológico del menor de edad y provoca que tenga problemas conductuales.
5. La vulneración al Interés Superior del Niño implica infringir lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Convención sobre Derechos del Niño, en las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños y Constitución Política del Perú respecto a la protección de los menores de edad en desprotección familiar.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que a través de su Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) implemente Centros de Acogida Residencial en el Distrito de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre para niños, niñas y adolescentes en desprotección familiar.
2. A la comunidad y sociedad realizar una investigación y seguidamente ejecutar proyectos para la construcción de Centros de Acogida Residencial en el Distrito de Piura, Castilla o Veintiséis de Octubre para niños, niñas y adolescentes en desprotección familiar.
3. Al Estado Peruano cumplir con su rol protector en favor de los niños, niñas y adolescentes en desprotección familiar, coordinando; diseñando y ejecutando acciones para prevenir y atender la desprotección familiar

CAPITULO V

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA DEL PERU (2018). NUEVO MARCO NORMATIVO PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS. [Grabado por E. F. CASTRO AVILES]. LIMA, LIMA, PERU.
2. AGUILAR LLANOS, B. (s.f.). *PORTAL DE REVISTAS UNIVERSIDAD PONTIFICIA CATOLICA DEL PERU*. Obtenido de PORTAL DE REVISTAS UNIVERSIDAD PONTIFICIA CATOLICA DEL PERU: <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/viewFile/18507/18>
3. *ALDEAS INFANTILES*. (diciembre de 2016). Obtenido de Aldeas Infantiles: https://www.aldeasinfantiles.org/getmedia/69048d29-462d-4c77-9a76-ee3c58bf054f/Directrices-assessment-LAAM_ESP.pdf
4. ÁLVAREZ OLAZÁBAL, E. (MARZO de 2017). *PODER JUDICIAL DEL PERU*. Obtenido de PODER JUDICIAL DEL PERU: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/f84f0f804083c59186c39629891cd1ab/Seminario+Nacional+sobre+Desprotecci%C3%B3n+Familiar+de+Ni%C3%B1as%2C+Ni%C3%B1os+y+Adolescentes_diapositivas.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f84f0f804083c59186c39629891cd1ab
5. BELLUSCIO, A. (2004). *MANUAL DE DERECHO DE FAMILIA*. ARGENTINA: Astrea.
6. BERROCAL LANZAROT, ANA ISABEL et al. (2017). *La proteccion juridica de la infancia y la dolescencia tras la Ley Organica 8/2015, de 22 de julio y la Ley 26/2015, de 28 de julio*. españa: Wolters Kluwer España S.A.
7. CAHUA GALLEGOS, C. A. (2017). *Repositorio Digital de Tesis de la Universidad Andina del Cusco*. Obtenido de Repositorio Digital de Tesis de la Universidad Andina del Cusco.: http://repositorio.uandina.edu.pe/bitstream/UAC/949/3/C%C3%A9sar_Tesis_bachiller_2017.pdf
8. CARRILLO PINTO, A. (2017). *Repositorio de la Universidad Catolica de Santa Maria*. Obtenido de <https://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/handle/UCSM/7090>
9. CELIS ESPARZA, D. P. (2016). *VINCULOS Y COPARENTALIDAD: EL COMPROMISO DE UN AMOR COMPARTIDO. EN Z. NELSON,PARENTALIDAD Y DIVORCIO (DES) ENCUENTROS EN LA FAMILIA LATINOAMERICANA* . LATINOAMERICA: ALFEPSI EDITORIAL.
10. COBAS COBIELLA, M. E. (2015). *UNIVERSIDAD DE BUCURESTI-FACULTAD DE DREPT*. Obtenido de UNIVERSIDAD DE BUCURESTI-FACULTAD DE DREPT: https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/relatii-internationale/cds-privat-2015-Derecho-de-Familia-y-Derecho-de-Sucesiones.pdf
11. CONDOR VILCAPOMA, MARCO ANTONIO et al. (2017). *Repositorio de la universidad del centro del peru*. Obtenido de <http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/3911/Condor%20Vilcapoma-Sosa%20Arroyo.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
12. DE LA PRESENTACION BOCCIO SERRANO, J. (2017). *el derecho del niño a la familia natural como principio rector del sistema de proteccion. la actividad protectora de los poderes publicos en el ordenamiento español*. Valencia: Guada Impresores S.L.

13. DEFENSORIA DEL PUEBLO. (abril de 2010). *Defensoria del Pueblo*. Obtenido de Defensoria del Pueblo: <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/informe-150-2010.pdf>
14. DEMANDA DE CUMPLIMIENTO, 15431-2017 (Juzgado Constitucional Sub Especialidad en Temas Tributarios 15 de septiembre de 2017).
15. DESPROTECCION INFANTIL. (2008). *Gobierno del Principado de Asturias*. Obtenido de Gobierno del Principado de Asturias: https://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/Asuntos%20Sociales/Calidad/publicaciones/guia manualdesprotecci%C3%B3n.pdf
16. *DICCIONARIO DE ASILO*. (s.f.). Obtenido de DICCIONARIO DE ASILO: <http://diccionario.cear-euskadi.org/principio-del-interes-superior-dela-menor/>
17. FARIÑA, F. et al. (s.f.). *Universidad de Vigo*. Obtenido de Universidad de Vigo: http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/uforense/descargas/Desproteccion_infantilx_el_maltrato.pdf
18. FIGUEROA GUTARRA, E. (2012). *Derecho Constitucional Tomo I*. Lima: Editorial San Marcos E.I.R.L.
19. GONZALEZ PILLADO, ESTHER et al. (2004). *Acogimiento y adopcion*. Madrid: Bletín Oficial del Estado.
20. HERNANZ, ELENA et al. (junio de 2000). *OSAKIDETZA*. Obtenido de Osakidetza: https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/maltrato_domestico/es_maltrato/adjuntos/maltratoDesproteccionInfanciaAdolescencia.pdf
21. HERRERA CAMPOBLANCO, J. F. (2018). *Repositorio Digital Institucional-Universidad Cesar Vallejo*. Obtenido de Repositorio Digital Institucional-Universidad Cesar Vallejo: http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/16209/Herrera_CJF.pdf?sequence=1&isAllowed=y
22. INTRODUCCION AL DERECHO DE FAMILIA. (s.f.). *Biblioteca juridica de la UNAM*. Obtenido de Biblioteca juridica de la UNAM: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3270/3.pdf>
23. LA FAMILIA. (s.f.). *LUISBARILLASC'S BLOG*. Obtenido de LUISBARILLASC'S BLOG: <https://luisbarillasc.wordpress.com/la-familia-naturaleza-tipos-de-familia-y-funciones/>
24. LOPEZ DÍAZ, C. (2005). *MANUAL DE DERECHO DE FAMILIA Y TRIBUNALES DE FAMILIA*. CHILE: LIBROTECNIA.
25. MANUAL CANTABRIA. (2010). *Intituto Cantabro de Servicios Sociales*. Obtenido de <http://www.serviciosocialescantabria.org/uploads/documentos%20e%20informes/Deteccion%20y%20notificacion%20de%20situaciones%20de%20desproteccion%20infantil%20desde%20el%20sistema%20sanitario.%20Agosto%202010.pdf>
26. MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES. (Marzo de 2018). *Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables*. Obtenido de Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: <https://www.mimp.gob.pe/oficinas/omep/contenidos/articulos.php?codigo=31>
27. MINISTERIO DE SALUD. (01 de OCTUBRE de 2019). *MINISTERIO DE SALUD*. Obtenido de MINISTERIO DE SALUD: <http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3186.pdf>
28. MONTOYA CHAVEZ, V. H. (2007). *Derechos Fundamentales de los Niños y Adolescentes en la Constitucion*. lima: Grijley E.I.R.L.

29. *NOTICIAS JURIDICAS*. (23 de julio de 2015). Obtenido de Noticias Juridicas: <http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10390-contenido-y-novedades-de-la-ley-organica-8-2015-de-22-de-julio-de-modificacion-del-sistema-de-proteccion-de-la-infancia-y-adolescencia/>
30. *NOTICIAS JURIDICAS*. (29 de julio de 2015). Obtenido de Noticias Juridicas: <http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10409-contenido-y-novedades-de-la-ley-2015-de-28-de-julio-de-proteccion-a-la-infancia-y-a-la-adolescencia/>
31. NOVO, M. et al. (2002). *Universidad de Santiago de Compostela*. Obtenido de Universidad de Santiago de Compostela: http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/uforense/descargas/2002_Situaciones_de_desproteccion_infantil_xNovo_et_al.x_2002x.pdf
32. ORREGO ACUÑA, J. A. (s.f.). *JUAN ANDRES ORREGO ACUNA ABOGADO & PROFESOR*. Obtenido de JUAN ANDRES ORREGO ACUNA ABOGADO & PROFESOR: <https://www.juanandresorrego.cl/apuntes/derecho-de-familia/>
33. OSSORIO, M. (2010). *Diccionario de Ciencias Juridicas, Politicas y Sociales*. Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L.
34. PALOMINO y RENGIFO. (2016). *Repositorio Digital Institucional-Universidad Ricardo Palma*. Obtenido de http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/urp/883/lozada_r.pdf?sequence=1&isAllowed=y
35. PLÁCIDO V., A. F. (2015). *Manual de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes*. Lima: Instituto Pacifico S.A.C.
36. QUIRI y PEREZ. (noviembre de 2018). LA DESPROTECCIÓN FAMILIAR DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE Y LA PROHIBICIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE LA PENA EN LOS PROCESOS DE AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR EN LIMA EN EL PERIODO ENERO-JUNIO DEL 2018". Lima, Lima, Peru.
37. RAMOS NÚÑEZ, C. A. (s.f.). *REVISTAS PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU*. Obtenido de REVISTAS PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU: <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/11404/11919>
38. RODRIGUEZ NARANJO, Carmen Et al. (2012). Autoestima en la adolescencia: análisis y estrategias de intervencion. *Autoestima en la adolescencia: análisis y estrategias de intervencion*. España.
39. ROMAN VALDIVIEZO, E. A. (2018). EL DERECHO A LA IGUALDAD DEL PADRE EN RELACIÓN A LA TENENCIA DE LOS HIJOS MENORES DE TRES AÑOS. Piura, Piura, Peru.
40. ROMERO TAPIA, A. A. (2017). *Repositorio Institucional-Universidad de Huanuco*. Obtenido de Repositorio Institucional-Universidad de Huanuco: http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/918/T047_41558335_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
41. SOKOLICH ALVA, M. I. (2017). *Unifé-Universidad Femenina del Sagrado Corazon*. Obtenido de Unifé-Universidad Femenina del Sagrado Corazon: <http://revistas.unife.edu.pe/index.php/lumen/article/view/578/493>
42. VARSÍ ROSPIGLIOSI, E. (octubre de 2011). *REPOSITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE LIMA*. Obtenido de REPOSITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE LIMA: http://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/ulima/5230/Varsi_nueva_teor%C3%ADa_institucional_juridica_familia.pdf?sequence=3&isAllowed=y

43. VARSÍ ROSPIGLIOSI, ENRIQUE et al. (28 de marzo de 2017). *El peruano*. Obtenido de El peruano: <http://www.elperuano.pe/suplementosflipping/juridica/636/index.html>
44. VEGAS CASTILLO, S. (2018). El Síndrome de Alienación Parental, Efectos y la Legislación Nacional. Piura, Piura, Perú.
45. ZAMORA LORENTE, M. J. (26 de octubre de 2012). *Re-UNIR REPOSITORIO DIGITAL*. Obtenido de https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/972/2012_11_15_TFG_ESTUDIO_DEL_T_RABAJO.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ANEXOS

ANEXO N° 01: ENCUESTA

ENCUESTA CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL (CAR)

La presente encuesta es el medio de recolección de información como parte de la investigación denominada “**CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL PARA MENORES EN DESPROTECCIÓN FAMILIAR – Piura**”, la misma que constituye la TESIS para optar el Título Profesional de Abogado.

A continuación, presentamos un cuestionario de preguntas, invocamos su colaboración para que conceda sus respuestas las mismas que constituyen vuestro criterio.

Marcar con un **aspa (X)** o **cruz (+)** la respuesta que considere pertinente

1. ¿Considera usted que la atención de la niñez y adolescencia sea una prioridad a nivel nacional?
 - a. SI
 - b. NO
2. ¿Considera que, un menor de edad en desprotección familiar, se siente afectado en su autoestima?
 - a. SI
 - b. NO
3. Cree usted que, ¿Los menores de edad con mayor autoestima resisten mejor ante hechos estresantes, muestran **mayor conducta adaptativa** (mayor esfuerzo y perseverancia en las tareas) e **informan de una mejor salud mental**: ¿mayor bienestar (mayor satisfacción vital, mayor afectividad positiva y menor negativa), menor ansiedad, depresión y timidez?
 - a. SI
 - b. NO
4. ¿Qué desventajas o aspectos negativos cree usted que se genera para los menores de edad en desprotección familiar, al no contar con un Centro de Acogida Residencial (CAR)?
 - a. Crecer sin educación
 - b. Predispuesto a delinquir
 - c. Vulnerable a ser ultrajado
 - d. Expuesto a aplicarse sustancias ilegales
 - e. T.A
5. ¿Considera que, el Estado cumple con su rol protector frente a niños, niñas y adolescentes en desprotección familiar?
 - a. SI
 - b. NO

6. ¿Qué ventajas o aspectos positivos cree usted que se ganarían con la creación de los CAR, respecto a los menores de edad en desprotección familiar?
- a. En la formación y desarrollo de la personalidad
 - b. En la formación de valores como responsabilidad disciplina, esfuerzo
 - c. En la formación de hábitos como puntualidad, orden y prolijidad que son importantes para el resto de la vida
 - d. En la formación de las herramientas prácticas que le permitirán aprender una actividad u oficio.
 - e. T.A.
7. ¿Conoce usted de algún proyecto en desarrollo para la construcción de Centros de Acogida Residencial (CAR) en los Distritos de Piura, Castilla o Veintiséis de Octubre?
- a. SI
 - b. NO
8. ¿Considera necesaria la creación de Centros de Acogida Residencial (CAR) como medida de protección integral para menores de edad en desprotección familiar en la jurisdicción de los Distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre?
- a. SI
 - b. NO
9. ¿Considera que, al no contar con Centros de Acogida Residencial (CAR) se vulnera el Interés Superior del Niño?
- a. SI
 - b. NO
10. ¿Conoce usted de, más de un caso en su entorno (familia o amigos) sobre menores de edad provenientes de familias disfuncionales que necesitaron acudir a un Centro de Acogida Residencial (CAR) y en razón a la falta de los mismos generó que se conviertan en peligro para la sociedad?
- a. SI
 - b. NO

GRACIAS

ANEXO N° 02: VALIDACION DE ENCUESTA

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD"

Ciudad de Piura, septiembre del 2019

Señor Magister

LUIS HERNAN CRUZ VILCHEZ

Docente Principal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Universidad Nacional de Piura

Ciudad.-

Asunto: Solicito validación de encuesta de investigación

Por la presente, reciba un cordial saludo; y a la vez expresar lo siguiente:

Motivada por su reconocida formación académica en el área de Metodología de la Investigación y Derecho de Familia, me dirijo a usted para solicitar vuestra valiosa colaboración, y a la vez SOLICITARLE se sirva realizar la validación de encuesta que se ANEXA a la presente, la misma que nos sirva para recolectar información relativa a la tesis denominada "CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL PARA MENORES EN DESPROTECCION FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PIURA 2017-2018", para optar el Título Profesional de Abogado por la Universidad Nacional de Piura, nuestra Alma Mater.

Por otra parte, anexo el Instrumento para la validación de los cuestionarios, el registro de observación documental y el cuadro: Sistema de variables e Indicadores para una rápida comprensión y validación de los instrumentos.

Agradeciendo de antemano vuestra valiosa colaboración, que redundará en el desarrollo e impulso de la investigación, me despido.

Cordialmente,



Br. FREISY IVETTE PEÑA TORRES
D.N.I N°75662515

CONSTANCIA DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS

El que suscribe: **Magister LUIS HERNAN CRUZ VILCHEZ**, identificado con **D.N.I. N° 02656633**, Y Registro del Ilustre Colegio de Abogados de Piura N° 951, titulado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura en la ciudad del mismo nombre, por la presente se hace **CONSTAR**:

Que, se ha procedido a revisar, con fines de validación, el instrumento de investigación **Encuesta Dirigida a Operadores de Justicia**, que se tiene a la vista, la misma que servirá para recolectar información, en el marco del desarrollo de la tesis nominada: **"CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL PARA MENORES EN DESPROTECCION FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PIURA 2017-2018"**, para optar el Título Profesional de Abogado por la Universidad Nacional de Piura, nuestra Alma Mater.

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones:

INTRUMENTO: Encuesta Dirigida a Operadores de Justicia

1 = Deficiente

2 = Regular

3 = Bueno

4 = Excelente

INDICADORES

VALORES (1, 2, 3, 4)

1	El instrumento presenta coherencia con el problema de investigación.	4
2	El instrumento evidencia el problema a solucionar.	4
3	El instrumento guarda relación con los objetivos propuestos en la investigación.	4
4	El instrumento facilita la comprobación de la hipótesis que se plantea en la investigación.	4
5	Los indicadores son los correctos para cada dimensión.	4
6	La redacción de los ítems es clara y apropiada para cada dimensión.	4
7	En general, el instrumento permite un manejo ágil para los sujetos a quienes se les aplicará.	4
8	Las respuestas esperadas permitirán un manejo fluido de la información.	4

Ciudad de San Miguel de Piura, septiembre del 2019



Magister LUIS HERNAN CRUZ VILCHEZ
D.N.I. N° 02656633

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD"

Ciudad de Piura, septiembre del 2019

Señora Magister

ESTHELY ROSA BAYONA CASTRO

Docente Principal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Universidad Nacional de Piura

Ciudad.-

Asunto: Solicito validación de encuesta de investigación

Por la presente, reciba un cordial saludo; y a la vez expresar lo siguiente:

Motivada por su reconocida formación académica en el área de Metodología de la Investigación, me dirijo a usted para solicitar vuestra valiosa colaboración, y a la vez SOLICITARLE se sirva realizar la validación de encuesta que se ANEXA a la presente, la misma que nos sirva para recolectar información relativa a la tesis denominada "CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL PARA MENORES EN DESPROTECCION FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PIURA 2017-2018", para optar el Título Profesional de Abogado por la Universidad Nacional de Piura, nuestra Alma Mater.

Por otra parte, anexo el Instrumento para la validación de los cuestionarios, el registro de observación documental y el cuadro: Sistema de variables e Indicadores para una rápida comprensión y validación de los instrumentos.

Agradeciendo de antemano vuestra valiosa colaboración, que redundara en el desarrollo e impulso de la investigación, me despido.

Cordialmente,



Br. FREISY IVETTE PEÑA TORRES
D.N.I N°75662515

CONSTANCIA DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS

El que suscribe: **Magister ESTHELY ROSA BAYONA CASTRO**, identificado con **D.N.I. N° 40502811**, Y Registro del Ilustre Colegio de Abogados de Piura N° 2929, titulado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura en la ciudad del mismo nombre, por la presente se hace **CONSTAR**:

Que, se ha procedido a revisar, con fines de validación, el instrumento de investigación **Encuesta Dirigida a Psicólogos y Dirigentes de Instituciones Administrativas**, que se tiene a la vista, la misma que servirá para recolectar información, en el marco del desarrollo de la tesis nominada: **"CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL PARA MENORES EN DESPROTECCION FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PIURA 2017-2018"**, para optar el Título Profesional de Abogado por la Universidad Nacional de Piura, nuestra Alma Mater.

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones:

INTRUMENTO: Encuesta Dirigida a Operadores de Justicia

1 = Deficiente

2 = Regular

3 = Bueno

4 = Excelente

INDICADORES

VALORES (1, 2, 3, 4)

1	El instrumento presenta coherencia con el problema de investigación.	3
2	El instrumento evidencia el problema a solucionar.	4
3	El instrumento guarda relación con los objetivos propuestos en la investigación.	4
4	El instrumento facilita la comprobación de la hipótesis que se plantea en la investigación.	4
5	Los indicadores son los correctos para cada dimensión.	3
6	La redacción de los ítems es clara y apropiada para cada dimensión.	3
7	En general, el instrumento permite un manejo ágil para los sujetos a quienes se les aplicará.	3
8	Las respuestas esperadas permitirán un manejo fluido de la información.	3

Ciudad de San Miguel de Piura, septiembre del 2019



Magister ESTHELY ROSA BAYONA CASTRO
D.N.I. N° 40502811

ANEXO N° 03: INFORME

MIEMBROS DEL JURADO: Dr. PEDRO GERMAN LIZANA BOBADILLA
Dr. FIDENCIO FRANCISCO CUNYA CELI
Mg. ARMANDO ARÉVALO ZETA

ASUNTO: INFORME SOBRE DESARROLLO DE ACTIVIDADES
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE TESIS.

Es grato dirigirme ante ustedes para expresarles mi fraternal saludo, asimismo para informarles lo siguiente:

PRIMERO. - Que con Resolución Decanal N° 084-D. FDCCP-UNP se resolvió aprobar el Proyecto de Tesis Titulado “CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL PARA MENORES EN DESPROTECCION FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PIURA 2017-2018”, señalando la fecha de inicio de ejecución del proyecto de tesis el día 08 de junio; desarrollando las siguientes actividades:

1. Se presentó a la Directora de la Unidad de Protección Especial de Piura del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables solicitud requiriendo datos estadísticos sobre casos de menores en presunto estado de abandono o desprotección familiar y estadísticas de las causas de abandono o desprotección familiar en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre en los periodos 2017-2018. También, estadísticas de los menores declarados en presunto estado de abandono o desprotección familiar provisional en los periodos 2017-2018. Asimismo, estadísticas de la situación de niñas, niños y adolescentes víctimas de desprotección familiar (edad, sexo, procedencia, nacionalidad, situación actual, etc.)
2. Se presentó al Presidente de la Corte de Justicia de Piura solicitud requiriendo datos estadísticos de los menores declarados en presunto estado de abandono o desprotección familiar en los periodos 2017-2018. Asimismo, estadísticas de la situación de niñas, niños y adolescentes víctimas de desprotección familiar (edad, sexo, procedencia, nacionalidad, situación actual, etc.).

SEGUNDO: Que de las solicitudes presentadas ambas fueron rechazadas por diferentes motivos:

1. La Directora de la Unidad de Protección Especial de Piura respecto a lo solicitado, señalo que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables no le permitía brindar el tipo de información requerido, ya que, se trataba de datos sobre niños, niñas y adolescentes.
2. El Presidente de la Corte de Justicia de Piura respecto a lo solicitado, señalo que el sistema no permite acceder a dicha información por lo que no es posible atender lo solicitado.

Es cuanto tengo que informar a ustedes., en honor a la verdad para los fines que estimen conveniente.

Anexo.
Cartas de Presentación.
Solicitudes.
Oficios.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

Piura, de agosto de 2019

Doctora
CONSUELO LEON CURAY
Directora de la Unidad de Protección Especial – Piura.

Presente

Es grato dirigirme a usted para expresarle el cordial saludo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura, al mismo tiempo manifestarle lo siguiente:

Que, la señorita **FREISY IVETTE PEÑA TORRES** con DN:75662515, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de esta Casa Superior de Estudios, integrante de la VI VERSION DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO EN EL DESARROLLO DE TESIS (PRADET), que se lleva a cabo en nuestra Facultad, viene desarrollando el tema: "**CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL PARA NIÑOS EN DESPROTECCIÓN FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PIURA 2017- 2018**"

Por ello, agradeceré a usted otorgarle las facilidades necesarias para realizar una encuesta a los Abogados especialistas en materia de familia y Psicólogos, así también, requerir información y datos estadísticos, lo cual es necesario para realizar la probanza de su trabajo de investigación y así concluir con éxito su tesis para optar el título profesional de abogado.

Sin otro particular y agradeciéndole por la atención que brinde al presente, quedo de usted.

Atentamente,



Dr. Freisy Ivette Peña Torres
DIRECTORA

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"


Unidad de Protección
Especial 27-08-19
SOLICITO: INFORMACION ESTADISTICA

DOCTORA
CONSUELO LEON CURAY
Directora de la Unidad de Protección Especial-Piura

Yo, **FREISY IVETTE PEÑA TORRES**, identificada con DNI N°75662515, Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, de la Universidad Nacional de Piura. Ante Ud. con el debido respeto me presento y expongo:

Que, vengo desarrollando el tema de tesis: "CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL PARA NIÑOS EN DESPROTECCIÓN FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PIURA 2017- 2018", siendo así, tengo a bien solicitar a su despacho información sobre casos de menores en presunto estado de abandono o desprotección familiar y estadísticas de las causas de abandono o desprotección familiar en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre en los periodos 2017-2018. También, estadísticas de los menores declarados en presunto estado de abandono o desprotección familiar provisional en los periodos 2017-2018. Asimismo, estadísticas de la situación de niñas, niños y adolescentes víctimas de desprotección familiar (edad, sexo, procedencia, nacionalidad, situación actual, etc.)

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y agradezco desde ya la atención a la solicitud.

Piura, 27 de agosto del 2019

Atentamente.


FREISY IVETTE PEÑA TORRES
DNI 75662515



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

Piura, setiembre de 2019

DR. ALBERTO LIP LICHAM
Presidente de La Corte Superior De Justicia de Piura

Presente

Es grato dirigirme a usted para expresarle el cordial saludo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura, al mismo tiempo manifestarle lo siguiente:

Que, la señorita **FREISY IVETTE PEÑA TORRES** con DN:75662515, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de esta Casa Superior de Estudios, integrante de la VI VERSION DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO EN EL DESARROLLO DE TESIS (PRADET), que se lleva a cabo en nuestra Facultad, viene desarrollando el tema: "**CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL PARA NIÑOS EN DESPROTECCIÓN FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PIURA 2017- 2018**"

Por ello, agradeceré a usted otorgarle las facilidades necesarias para realizar una encuesta a los Jueces que toman conocimiento de procesos civiles en materia de familia; Abogados especialistas en la materia y Psicólogos, así también, requerir datos estadísticos al área de estadística, lo cual es necesario para realizar la probanza de su trabajo de investigación y así concluir con éxito su tesis para optar el título profesional de abogado.

Sin otro particular y agradeciéndole por la atención que brinde al presente, quedo de usted.

Atentamente,

Santiago Herrera Navarro

Jefe De La Unidad De Investigación



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"

SOLICITO: INFORMACION ESTADISTICA

DOCTOR
ALBERTO LIP LICHAM
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura

Yo, FREISY IVETTE PEÑA TORRES, identificada con DNI N°75662515, Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, de la Universidad Nacional de Piura. Ante Ud. con el debido respeto me presento y expongo:

Que, vengo desarrollando el tema de tesis: "CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL PARA NIÑOS EN DESPROTECCIÓN FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PIURA 2017- 2018", siendo así, tengo a bien solicitar al área de estadísticas datos estadísticos de los menores declarados en presunto estado de abandono o desprotección familiar en los periodos 2017-2018. Asimismo, estadísticas de la situación de niñas, niños y adolescentes víctimas de desprotección familiar (edad, sexo, procedencia, nacionalidad, situación actual, etc.)

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y agradezco desde ya la atención a la solicitud.

Piura, 02 de septiembre del 2019

Atentamente.



FREISY IVETTE PEÑA TORRES
DNI 75662515

Piura, 23 de septiembre del 2019.

OFICIO N° 4849-2019-P-CSJPI/PJ

Señor:

SANTIAGO HERRERA NAVARRO

JEFE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Ciudad.-

Ref. Solicitud de fecha 02 de septiembre del 2019.

Tengo el agrado de dirigirme a usted expresándole mi cordial saludo, asimismo en atención al documento de la referencia y el Oficio N° 0340-2019-A-JEF-CSJP/PJ remitido por la administradora del Módulo de Familia Central de Piura, quien procede a informar lo solicitado por su unidad, siendo que respecto a los datos estadísticos solicitados refiere que el sistema no permite acceder a dicha información, asimismo respecto a la encuesta a las Juezas de Familia, se brindarán las facilidades del caso; haciendo de conocimiento para los fines pertinentes.

Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Respetablemente,

Jesús Alberto Lip Licham
Presidente.

ANEXO N° 04: MATRIZ BÁSICA DE CONSISTENCIA

MATRIZ BÁSICA DE CONSISTENCIA			
CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL PARA MENORES EN DESPROTECCIÓN FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PIURA 2017-2018			
	PROBLEMAS	HIPÓTESIS	OBJETIVO
General	¿Es necesaria la creación de Centros de Acogida Residencial para menores de edad en desprotección familiar?	La creación de centros de acogida residencial para menores de edad en desprotección familiar, garantizan el Interés Superior del Niño por lo tanto el Estado cumple con otorgar las medidas de protección integral.	Demostrar, la necesidad de crear Centros de Acogida Residencial para menores de edad en desprotección familiar, en salvaguarda del interés superior del niño.
Específico	¿La ausencia de Centros de Acogida Residencial para menores de edad en desprotección familiar vulnera el Interés Superior del Niño?	Se vulnera el interés superior del niño con la ausencia de centros de acogida residencial para menores de edad en desprotección familiar.	Determinar que, la ausencia de centros de acogida residencial para menores de edad en desprotección familiar vulnera el interés superior del niño.

ANEXO N° 05: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES									
AÑO	2018		2019						
ACTIVIDADES	NOV.	DIC.	ENE.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.
ETAPA DE ANÁLISIS- METODOLOGICA									
Análisis Previo									
Planteamiento del Problema									
Recopilación y Ordenamiento de datos									
Clasificación de Datos									
Análisis Crítico e Interpretativo									
ETAPA ELABORATIVA									
Análisis Metódico									
Redacción Inicial									
Presentación del Proyecto									
Aprobación del Proyecto									
Interpretación de la Información									
Segunda Redacción									
Preparación bibliográfica, citas, anexos y cuadros estadísticos									
Corrección e impresión de la tesis									
Sustentación									

ANEXO N°06: PRESUPUESTO

Para la elaboración de la presente investigación, y su correspondiente ejecución se ha proyectado los siguientes cuadros de recursos y presupuestos de gastos, los mismos que detallo a continuación. Los recursos utilizados en el presente trabajo de investigación son sustentados por los ingresos del Tesista.

- **Recursos:**

INVERSIÓN A LA INVESTIGACIÓN	S/. 6960.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS PROPIOS

- **Gastos de Presupuesto:**

RUBRO	CONCEPTO	COSTO
GASTOS ADMINISTRATIVOS	TASAS ADMINISTRATIVAS	S/. 140.00
BIENES	IMPRESORA EMPSON	S/. 100.00
	CARTUCHOS Y TINTA	S/. 250.00
	HOJAS A4 (SIMILARES)	S/. 150.00
	MATERIAL DIDÁCTICO	S/. 250.00
SERVICIOS	PASAJES Y VIATICOS	S/. 850.00
	SERVICIO DE COPIAS	S/. 200.00
	INTERNET E IMPRESIONES	S/. 300.00
	SERVICIO DE ANILLADO EMPASTADO	S/. 200.00
	MOVILIDAD	S/. 150.00
ASESORIA		S/. 4370.00

APÉNDICE

- **El Artículo 4 de la Constitución Política del Perú.** - La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono”.
- **El Artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño.** - Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.
- **El Artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño.** - En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
- **El Artículo 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño.** - Los niños que temporal o permanentemente se encuentren privados de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no permanezca en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencias especiales del Estado.
- **El Párrafo 5° Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños.**
- Cuando la propia familia del niño no puede, ni siquiera con un apoyo apropiado, proveer al debido cuidado del niño, o cuando lo abandona o renuncia a su guarda, el Estado es responsable de proteger los derechos del niño y de procurarle un acogimiento alternativo adecuado, con las entidades públicas locales competentes o las organizaciones debidamente habilitadas de la sociedad civil, o a través de ellas. Corresponde al Estado, por medio de sus autoridades competentes, velar por la supervisión de la seguridad, el bienestar y el desarrollo de todo niño en acogimiento alternativo y la revisión periódica de la idoneidad de la modalidad de acogimiento adoptada.
- **El Artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes.** - En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos.
- **El Artículo 74 del Código de los Niños y Adolescentes.** - Son deberes y derechos de los padres que ejercen la Patria Potestad:
 - a) Velar por su desarrollo integral;
 - b) Proveer su sostenimiento y educación;
 - c) Dirigir su proceso educativo y capacitación para el trabajo conforme a su vocación y aptitudes;
 - d) Darles buenos ejemplos de vida y corregirlos moderadamente. Cuando su acción no bastare podrán recurrir a la autoridad competente;
 - e) Tenerlos en su compañía y recurrir a la autoridad si fuere necesario para recuperarlos;
 - f) Representarlos en los actos de la vida civil mientras no adquieran la capacidad de ejercicio y la responsabilidad civil;
 - g) Recibir ayuda de ellos atendiendo a su edad y condición y sin perjudicar su atención;
 - h) Administrar y usufructuar sus bienes, cuando los tuvieran; y,
 - i) Tratándose de productos, se estará a lo dispuesto en el Artículo 1004° del Código Civil.

- **El Artículo 2 de la Ley Que Establece Parámetros y Garantías Procesales Para La Consideración Primordial del Interés Superior del Niño.** - El interés superior del niño es un derecho, un principio y una norma de procedimiento que otorga al niño el derecho a que se considere de manera primordial su interés superior en todas las medidas que afecten directa o indirectamente a los niños y adolescentes, garantizando sus derechos humanos.

- **El Artículo 3 de la Ley que Establece Parámetros y Garantías Procesales para la Consideración Primordial del Interés Superior del Niño.** - Para la consideración primordial del interés superior del niño, de conformidad con la Observación General 14, se toman en cuenta los siguientes parámetros:
 1. El carácter universal, indivisible, interdependiente e interrelacionado de los derechos del niño.
 2. El reconocimiento de los niños como titulares de derechos.
 3. La naturaleza y el alcance globales de la Convención sobre los Derechos del Niño.
 4. El respeto, la protección y la realización de todos los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
 5. Los efectos a corto, mediano y largo plazo de las medidas relacionadas con el desarrollo del niño a lo largo del tiempo.

- **El Artículo 3 inciso f) del Decreto Legislativo para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Sin Cuidados Parentales o en Riesgo de Perderlos.** - Es la situación en la que se encuentra una niña, niño o adolescente donde el ejercicio de sus derechos es amenazado o afectado, ya sea por circunstancias personales, familiares o sociales, que perjudican su desarrollo integral sin revestir gravedad, y no son o no pueden ser atendidos por su familia. Esta situación requiere la actuación estatal adoptando las medidas necesarias para prevenir la desprotección familiar, sin que en ningún caso justifique la separación de la niña, niño o adolescente de su familia de origen.
 Por vía reglamentaria, se definen las circunstancias y supuestos que pueden ser considerados como situación de riesgo de desprotección familiar.
 En adelante, cuando en la presente ley se utilice el término “riesgo” debe entenderse que se hace referencia a riesgo de desprotección familiar.

- **El Artículo 3 inciso g) del Decreto Legislativo para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Sin Cuidados Parentales o en Riesgo de Perderlos.** - Es la situación que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado desempeño de los deberes de cuidado y protección por parte de los responsables del cuidado de los niños, niñas y adolescentes y que afecta gravemente el desarrollo integral de una niña, niño o adolescente.
 La situación de desprotección familiar tiene carácter provisional e implica la separación temporal de la niña, niño o adolescente de su familia para su protección, así como el apoyo especializado a la familia para la remoción de las circunstancias que la motivaron, aplicando las medidas de protección apropiadas establecidas en esta ley, promoviendo la reintegración familiar. En el caso de hermana o hermano cabeza de familia no implica la separación temporal de su familia.
 Los criterios de calificación de la desprotección familiar son siempre restrictivos y objetivos. Por vía reglamentaria, se definen las circunstancias y supuestos de desprotección familiar.
 La situación de pobreza, en ningún caso justifica, por sí sola, la separación de la niña, niño o adolescente de su familia de origen, ni constituye desprotección familiar. Es responsabilidad del Estado incorporar a estas familias a programas y servicios de protección social.
 Asimismo, en ningún caso se separa a una niña, niño o adolescente de su familia por la sola razón de su discapacidad o la de cualquiera de sus miembros.

Cuando a pesar del apoyo brindado por el Estado para fortalecer las competencias de cuidado y crianza, no sea posible el retorno de la niña, niño o adolescente a su familia de origen debido a que esta no puede proveerle el debido cuidado a la niña, niño o adolescente, se declara la desprotección familiar.

- **El Artículo 3 inciso h) del Decreto Legislativo para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Sin Cuidados Parentales o en Riesgo de Perderlos.** - Son actuaciones o decisiones que se adoptan a favor de una niña, niño o adolescente en situación de riesgo o desprotección familiar, para garantizar o restituir sus derechos y satisfacer sus necesidades. Las medidas de protección pueden ser de carácter provisional o permanente. Estas últimas no tienen carácter definitivo, con excepción de la adopción y pueden ser modificadas, en base a su interés superior y el principio de idoneidad.
La declaración de desprotección familiar tiene por finalidad además otorgar una modalidad de cuidado alternativa duradera y estable para la niña, niño o adolescente que garantice su derecho a vivir en una familia o en un entorno familiar.
- **El Artículo 4 inciso g) Decreto Legislativo para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sin Cuidados Parentales o en Riesgo de Perderlos.** - Este derecho sustancial, principio de interpretación y norma de procedimiento, asegura la protección y desarrollo integral de la niña, niño o adolescente en su familia y en caso excepcional, prioriza un entorno familiar alternativo. A fin de determinar el interés superior del niño, se respetan los vínculos familiares y se favorece el apoyo a la familia de origen como medida de protección prioritaria. En ningún caso su aplicación puede disminuir o restringir los derechos y garantías reconocidos a las niñas, niños y adolescentes.
Cuando exista conflicto entre el interés superior de un niño y otros intereses o derechos, la autoridad competente analiza y pondera los derechos de todos los interesados, teniendo en cuenta que el derecho de la niña, niño y adolescente a que su interés superior es una consideración primordial.
- **El Artículo 32 del Decreto Legislativo para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Sin Cuidados Parentales o en Riesgo de Perderlos.** - Declarada la situación de riesgo, la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el plan de trabajo individual puede disponer la aplicación acumulativa o no, de cualquiera de las siguientes medidas de protección en favor de la niña, niño o adolescente:
 - a) Apoyo a la familia para fortalecer competencias de cuidado y crianza.
 - b) Acceso a servicios de educación y salud para niñas, niños y adolescentes.
 - c) Acceso a servicios de atención especializada.
 - d) Apoyo psicológico a favor de la niña, niño o adolescente y su familia.
 - e) Acceso a servicios para prevenir y abordar situaciones de violencia.
 - f) Acceso a servicios de cuidado.
 - g) Acceso a servicios de formación técnico productivo para la o el adolescente y su familia.
 - h) Inclusión a programas sociales
 - i) Otras que fueran necesarias.
- **El Artículo 59 del Decreto Legislativo para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Sin Cuidados Parentales o en Riesgo de Perderlos.** - Las medidas de protección tienen el carácter de provisionales y son las siguientes:
 - a) Acogimiento familiar.
 - b) Acogimiento Residencial.
- **El Artículo 117 del Decreto Legislativo para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Sin Cuidados Parentales o en Riesgo de Perderlos.** - Las medidas de

protección que se aplica cuando se declara judicialmente la desprotección familiar, tienen carácter permanente pero no definitivo, con excepción de la adopción y pueden ser modificadas, en base al interés superior y el principio de idoneidad. El acogimiento familiar o residencial es periódicamente revisado cada seis (06) meses por la autoridad competente y puede ser variado o revocado de acuerdo a lo señalado en los artículos 60, 66 y 88 de la presente Ley, en lo que fuera pertinente.

- **El Artículo 118 del Decreto Legislativo para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Sin Cuidados Parentales o en Riesgo de Perderlos.** - Los tipos de medidas de medidas de protección son:

- a) Acogimiento familiar
- b) Acogimiento residencial
- c) Adopción

- **El Artículo 100 del Reglamento del Decreto Legislativo para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sin Cuidados Parentales o en Riesgo de Perderlos.**- Es el espacio físico donde se desarrolla la medida de acogimiento residencial dispuesta en el procedimiento por desprotección familiar, en un entorno que se asemeje al familiar y se implementa el Plan de Trabajo Individual, con el objetivo principal de garantizar su desarrollo psicosocial y propiciar su reintegración familiar; debiendo contar para ello con acreditación vigente y con las condiciones básicas para su funcionamiento.

En ningún caso un Centro de Acogida Residencial hace las veces de un Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación o el lugar donde se aplica la medida de protección para adolescentes menores de catorce (14) años de edad que han infringido la Ley Penal.

La persona que asume la Dirección del Centro de Acogida Residencial, ejerce la dirección y representación legal del mismo.